

Cuadernos del Sur

Sociedad • Economía • Política



EDUARDO LUCITA

Elecciones sindicales y autorganización obrera en Argentina

CARLOS ABALO

Notas sobre la economía argentina (II parte)

HUGO DEL CAMPO

Continuidad y cambio en el movimiento sindical argentino

ERIK O. WRIGHT

Los intelectuales y la clase obrera

ANDA/SEGRE

Política de informática en los países dependientes

Cuadernos del Sur

Sociedad • Economía • Política

Número 3



Julio-Septiembre de 1985

Tierra  fuego
del

CONSEJO EDITORIAL

Argentina: *Eduardo Basz / Eduardo Lucita /
Roque Pedace / Alberto J. Pla / Carlos Suárez*

México: *Alejandro Dabat / Alberto Di Franco /
Adolfo Gilly / José María Iglesias (editor)*

Italia: *Guillermo Almeyra*

Brasil: *Enrique Anda*

El Comité Editorial está constituido por los miembros
del Consejo Editorial residentes en Argentina.

Publicado por © *Editorial Tierra del Fuego*

Número 3

Argentina, julio de 1985

Toda correspondencia deberá dirigirse a:

En Argentina:

Casilla de Correos No. 167, 6-B, C.P. 1406

Buenos Aires - Argentina

En México:

EDITORIAL TIERRA DEL FUEGO

Nebraska 43-402

México-03810-D.F.

INDICE

EDUARDO LUCITA • Elecciones sindicales y autoorganización obrera en Argentina	5
HUGO DEL CAMPO • Continuidad y cambio en el movimiento sindical argentino	55
CARLOS ABALO • II Parte de notas sobre...	67
ERIK O. WRIGTH • Los intelectuales y la clase obrera	83
C. M. CASSASUSS • Estructura de clases y acción obrera	121
ANDA/SEGRE • Política de informática en los países dependientes	131
DOCUMENTOS • Nicaragua, análisis de los resultados electorales	147
REVISTA • De REVISTAS	161

CUADERNOS DEL SUR responde a un acuerdo entre personas, las que integran el Consejo Editorial. La revista es ajena a toda organización. La pertenencia, actual o futura, de cualesquiera de sus integrantes a partidos o agrupamientos políticos sólo afecta a éstos de modo individual; no compromete a la revista ni ésta interfiere en tales decisiones de sus redactores.

CUADERNOS DEL SUR es un órgano de análisis y de debate; no se propone, ni ahora ni en el futuro, ser un organizador político ni promover reagrupamientos programáticos.

El Consejo asume la responsabilidad del contenido de la revista, pero deslinda toda responsabilidad intelectual en lo que atañe a los textos firmados, que corren por exclusiva cuenta de sus autores, cuyas particulares ideas no son sometidas a otro requisito que el de la consistencia expositiva. El material de la revista puede ser reproducido si se cita la fuente y se añade la gentileza de comunicárnoslo. Las colaboraciones espontáneas serán respondidas y, en la medida de nuestras posibilidades, atendidas.



Romero/PT

Artista plástico invitado: *Juan Carlos Romero*

Elecciones sindicales y autorganización obrera

Eduardo Lucita

En recuerdo de EDUARDO REQUENA,
docente, dirigente de CTERA, miembro
de la Mesa de Gremios en Lucha de
Córdoba. Detenido-Desaparecido. Militante
indoblegable, amigo entrañable.

“Es posible que se queden a medio camino... y que no emerja una nueva sociedad en sentido estricto, con nuevas contradicciones y nuevos modos de constitución de los sujetos políticos, pero en todo caso hay un golpe de muerte a la vieja sociedad, donde la combinación de lo viejo y de lo nuevo ya es por sí mismo un nuevo tipo de sociedad.”

Manuel Garretón.

Al cumplirse casi una década de un periodo excepcional desde el punto de vista de la conflictividad social, seguido a su vez de una ofensiva sostenida y generalizada del capital sobre el trabajo, ofensiva que no tiene precedentes en Argentina, los trabajadores, recuperadas las instituciones democráticas y la vigencia de los derechos y las libertades públicas, retomaron el camino de la elección y selección de sus dirigentes y de la recuperación de sus organizaciones gremiales.

Parece indudable que estas elecciones a poco de concluido el proceso aún en curso y una vez facilitado el acceso a la documentación depositada en el Ministerio de Trabajo han de constituirse en campo privilegiado para sociólogos, políticos e investigadores de distintas corrientes y matices ideológicos y políticos. Y no solo por lo que tradicionalmente pesaron y pesan los sindicatos en la política nacional sino también y muy especialmente por el contexto político inédito en que se desarrollaron.

Baste señalar aquí las modificaciones operadas en la estructura productiva; en los patrones de acumulación y desarrollo; en las relaciones sociales y en las pautas de conducta de los sujetos sociales. O bien, en el plano estrictamente político, el hecho de que por primera

vez en su historia el peronismo —ese frente policlasista que fue el eje de la política nacional durante más de treinta años— resultara perdedor de una confrontación electoral a nivel nacional, y en la que, a diferencia de la de 1973, las direcciones sindicales estaban totalmente comprometidas tanto en la campaña como en la selección de las candidaturas.

La reorganización sindical que se iniciara en septiembre de 1984 y que se extenderá hasta probablemente mediados del año en curso fue precedida de una intensa exteriorización pública durante la campaña para elegir Presidente de la Nación, y de una breve pero no menos intensa polémica en las Cámaras de Diputados y Senadores que rebasó las fronteras parlamentarias para inundar todo el ámbito de la sociedad civil y al cabo de la cual el partido gobernante hubo de renunciar a muchas de sus consignas preelectorales. Hizo eje de su política en el antagonismo con la burocracia sindical afirmando la democratización sindical. Llegó al gobierno con una clara política confrontacionista que a breve plazo, luego del fracaso parlamentario, trocó en política acuerdista y de reafirmación del régimen bipartidista sancionado por las urnas el 30 de octubre de 1983.

Sin embargo y aún encorsetadas por el cuerpo legal en cuyo marco se desarrollaron —en el plano legislativo la Ley 23.071/84 “de Reorganización Sindical” sancionada luego de arduas negociaciones, y en el plano normativo los estatutos vigentes en cada organización, por lo general amañados y modificados a gusto de los dirigentes e interventores en tiempos del llamado “proceso”—, estas elecciones sindicales que abarcaron alrededor de setecientos gremios de los cuales una treintena son definitorios al momento del recuento para la conformación de la cúpula cegetista, se constituyeron tanto por los niveles de participación alcanzados como por su desarrollo en el proceso electoral más democrático en varias décadas.

Una primera apreciación en el plano de las conclusiones políticas, que fuera explicitado en distintos análisis periodísticos, es que los trabajadores han reafirmado con su voto su identidad política peronista y que la burocracia sindical ha revalidado títulos y por primera vez en muchos años aparece con una representatividad asentada en el apoyo masivo de los afiliados.

Sin embargo estas generalidades, que como todas contienen ciertas cuotas de verdad, semejan una suerte de verdad tautológica, y aparecen más como el resultado de un análisis meramente empírico, a la luz de los datos directos, que producto de una confrontación de los mismos con una realidad societal que acusa el impacto de los cambios operados en el país en la última década, en tanto que pare-

cieran no contemplar los contenidos implícitos del proyecto de reorganización sindical impulsado por el gobierno democrático-burgués del alfonsinismo.

Limitar así el análisis es quedarse en la superficie de los hechos, sin bucear en las profundidades buscando las modificaciones y condicionamientos reales que provocan alteraciones en las conductas de los sujetos sociales colectivos.

Por otra parte es un lugar común en la Argentina que transitamos aseverar que marzo de 1976 marca el fin de un ciclo histórico en el país. Pero este aserto, a nuestro juicio no comprendido aún en toda su dimensión, entre otras cosas porque no tenemos una lectura acabada de la sociedad real existente, implica reconocer las mutaciones y la modificación de fuerzas sociales a que ha dado lugar, que tomadas globalmente arrojan un balance complejo y contradictorio, un estadio de transitoriedad resultante de la superposición de los resabios de una sociedad agotada pero aún supérstite y los nuevos contenidos de una sociedad cuya aparición se anuncia pero que no acaba de producirse.

En lo que sigue no proponemos exponer algunos elementos de análisis que abran el camino para futuras y más exhaustivas investigaciones.

El proyecto alfonsinista de democracia sindical

El proyecto oficialista de democratización de la vida sindical argentina apareció en los momentos previos a las elecciones nacionales, y también en los inmediatamente posteriores como un punto de coincidencias donde en su forma aparente confluían los intereses de la clase obrera,¹ que en la búsqueda de cambiar la relación de fuerzas con la burguesía e ir plasmando en términos políticos y programáticos su propia alternativa, requiere organización y debate en la base y un recambio democrático en los niveles de los cuadros dirigentes; y la necesidad del gobierno —en rigor de su ala socialdemocratizante, el alfonsinismo— que para “administrar la crisis de las minorías con el apoyo de las mayorías” (tal la feliz expresión con que se ha concep-

¹ Empleamos en este trabajo un criterio ampliado del concepto de clase obrera, entendiendo por tal al sujeto social colectivo que aparece en el mercado como propietario y vendedor de mercancía, la fuerza de trabajo. Es decir, incluimos en ella tanto a los proletarios asalariados como a los asalariados no proletarios. Y descartamos el criterio que restringe el concepto de clase obrera a los asalariados industriales.

tualizado a los actuales gobiernos socialdemocráticos europeos), se esfuerza en favorecer una dirección de recambio medianamente representativa.

Pero a poco que se profundice, esta coincidencia resulta más aparente que real. Los contenidos implícitos en cada una de esas necesidades insatisfechas, como es fácilmente comprobable, son sustancialmente diferentes.

El planteo alfonsinista requiere, como el de cualquier fracción política burguesa en esta etapa del capitalismo dependiente argentino, de un reforzamiento de los mecanismos de intervención del Estado en los sindicatos, enmascarados bajo formas democráticas, al mismo tiempo que su proyecto precisa de la reconstrucción de una burocracia sindical no confrontacionista, o cuando menos no corporativa, cuyas formas de resolver la conflictividad social y la conciliación de clases resulten diferentes de los de la burocracia sindical peronista clásica.

Es por demás evidente que para esta fracción política de la burguesía en el gobierno, actualizada teóricamente en el manejo europeizado de los asuntos del Estado, en lo que tiene que ver con las formas de articular las mediaciones del aparato estatal, esta burocracia acusada no sin razón de venalidad, matonaje y contubernio dictatorial, (que no encuentra formas de retomar su relación con las bases y por eso muestra claros síntomas de disgregación al interior de sus cuerpos orgánicos), no le resulta útil para reconstruir las instituciones democráticas. Y es por su propia debilidad, solamente contenida por el férreo control de los aparatos, una fuente de inestabilidad permanente que no permite institucionalizar, en el largo plazo, un modelo de participación funcional.

Por el contrario, para los trabajadores, carentes desde hace décadas de una dirección propia,² la democratización de la vida sindical es un camino de recorrido ineludible para la recuperación plena de sus organizaciones gremiales que encierra no sólo la selección y elec-

² En el seno del movimiento peronista, y aún en los momentos más altos de su política de reivindicaciones sociales y colaboración de clases, siempre existieron contradicciones entre su base obrera y su dirección burguesa/burocrática. Pero a partir de los años '60, con la expansión de la crisis del capitalismo dependiente argentino, la manipulación ideológica, se hizo cada vez más dificultosa, y todo enfrentamiento antipatronal se trasladó inmediatamente al plano antiburocrático, convirtiéndose éste en un componente ineludible del enfrentamiento de clase. De ahí que la consigna de los años '70 "Se va a acabar la burocracia sindical..." tuviera una aceptación generalizada. Es este mismo sentimiento antiburocrático el que intentó capitalizar el alfonsinismo, primero desde el llano y luego en el gobierno.

ción de una nueva camada de dirigentes, sino toda una nueva metodología, que significa la recuperación de su antigua práctica social, en el terreno de la elección y revocabilidad de sus dirigentes; la unidad y participación masiva en las decisiones y acciones emanadas de las asambleas de base; la defensa, recuperación y logro de sus reivindicaciones, avanzando en la recuperación de los espacios perdidos hacia el control de sus organizaciones y hacia formas de auto-organización democrática y su independencia política.

El lanzamiento a la arena política del proyecto de ley de reorganización sindical produjo un efecto contrario al buscado por el oficialismo. Al calor del debate parlamentario, y su posterior votación negativa por el Senado, la burocracia sindical en sus distintas fracciones,³ que se encontraba en una profunda crisis luego de la derrota electoral de octubre de 1983, reagrupó sus fuerzas sobre la base de abroquelarse en la defensa de sus intereses comunes. Aunque débiles, estas bases en lo inmediato le permitieron imponer condiciones y obligar al gobierno a cambiar su política de confrontación por una política acuerdista y revalorizar a la burocracia sindical peronista como interlocutor válido.

La defensa de la vieja dirigencia sindical se basó en dos axiomas: independencia del movimiento obrero frente al Estado; y denuncia de la intención del gobierno radical de romper la unidad del movimiento obrero promoviendo la formación de dos o más centrales sindicales.

El rechazo del intervencionismo estatal y la defensa indeclinable de formas autónomas de organización e independencia en las decisiones es una cuestión de principios que está en la historia viva del movimiento obrero local e internacional, pero que en boca de esta burocracia nacida y criada al calor del favoritismo estatal y desarrollada como su apéndice, cuando durante cuarenta años la relación sindicato/estado fue priorizada sobre la relación sindicato/clase, se torna meramente un recurso formal y carente de todo contenido.⁴

³ Las "62 Organizaciones" peronistas; la Comisión de Gestión y Trabajo; la gran mayoría de los dirigentes enrolados en la Comisión Nacional de los "25"; y también el apoyo no explícito de la alicaída Comisión de los "20".

⁴ Las sucesivas Leyes de Asociaciones Profesionales (12921/45; 14455/58; 20615/74) que favorecieron el desarrollo y expansión de la organización sindical y la fortalecieron corporativamente en la defensa del valor de venta de la fuerza de trabajo constituyen al mismo tiempo el mayor instrumento de integración y control del aparato estatal.

Es el Estado el que otorga y retira las personerías gremiales, el que regula todo el funcionamiento, manejo de los fondos y actividades en general, y son las patronales las que

En cuanto a la segunda premisa en verdad no es fácilmente demostrable. Por el contrario si se ahonda en el análisis del discurso gubernamental se encontrarán indicios que permitirán verificar que "...la política alfonsinista no desdeña un sindicalismo unitario, democrático y político, por el contrario lo promueve ya que se inscribe en el marco de un proyecto más amplio de rescatar al Estado burgués y sus instituciones democráticas".⁵ Es precisamente esta y no otra, la intencionalidad alfonsinista. Establecer una nueva relación entre la sociedad civil y la sociedad política, marchar hacia la refundación de un sistema de partidos y establecer un mecanismo que facilite la articulación de las representaciones sociales de los intereses del capital y el trabajo por vías no corporativas. Es obvio que en una sociedad como la Argentina, con un régimen de partidos sumamente débil, los sindicatos se insertan en este modelo, bien que teórico, jugando un rol específico en el conjunto de las mediaciones de un Estado fortalecido.

Inversamente quien agita la intencionalidad divisionista asignando tal pretensión al gobierno radical es la propia burocracia —acompañada de algunos teóricos de la izquierda nacionalista—, que lo exorcizó como un mecanismo de autodefensa, consciente de su crisis de representatividad y de su debilidad intrínseca para reconstruir la trama de relaciones orgánicas con "sus" bases sociales, y de la crisis de identidad política del peronismo, que no es otra cosa que el reflejo del agotamiento de todo un modelo de acumulación y reproducción del capital y de resolución política del enfrentamiento de clases, que la incluía a ella como una de sus expresiones corporativas, y que en esta etapa del capitalismo mundial no pareciera poder reproducirse.

Muy distinta fue la actitud de algunos dirigentes sindicales que forjaron nuevos agrupamientos al calor de las nuevas condiciones abiertas en el país con la formalización del gobierno democrático el 10 de diciembre de 1983.

El Movimiento Nacional de Renovación Sindical (MNRS, radicales); el Plenario Nacional Sindical (PNS, peronistas combativos); la Asamblea Gremial Argentina (AGA) burócratas desplazados; y el

descuentan las cotizaciones, siendo la burocracia la administradora del conjunto.

Si a esto se le adiciona el discrecional manejo de las obras sociales, es posible definir el triptico que delimita el sindicalismo argentino: integración al Estado, fuerte desarrollo de la base material y enquistamiento burocrático. Lo que lleva a una contradicción creciente entre los intereses y objetivos de los trabajadores y los del aparato sindical.

⁵ Japaz, Jorge, "Los 100 Días", mimeo, Mendoza, abril 1984.

Encuentro Nacional de Trabajadores (ENTRA), coalición pluralista, apoyaron crítica pero decididamente el proyecto de ley de reorganización sindical pero se vieron imposibilitados, ya fuere por lo reciente de su formación, o por no tener el control de estructuras sindicales convocantes, para forjar una corriente independiente capaz de aprovechar las amplias condiciones existentes. Se vieron entonces obligados a jugar la recuperación y democratización sindical en una lucha de aparatos recostándose en la propuesta gubernamental. Y aún en el caso del ENTRA, aportando modificaciones importantes a su articulado,⁶ que en general recogían las necesidades que luego señalarían la mayoría de las listas antiburocráticas, que lo modificaban en forma progresista.

La votación y posterior rechazo del proyecto de ley por el Senado hirió de muerte a estos agrupamientos que se fueron extinguiendo sin pena ni gloria.

La izquierda orgánica: El Partido Comunista Argentino (PCA), el Movimiento al Socialismo (MAS), y el Partido Obrero (PO), volvieron a reiterar puntualmente su incapacidad, que ya pareciera patológica, para romper con su economicismo inoperante, para establecer una ligazón entre la sociedad real y las proposiciones políticas, para aprovechar los resquicios de una sociedad corporativa agotada y de

⁶ Las modificaciones propuestas por el ENTRA apuntaban a perfeccionar el proyecto oficial poniendo en igualdad de condiciones a todos los trabajadores. En la práctica intentaba romper el marco restrictivo, apoyándose en las propuesta gubernamental para rebasarla.

Sus contenidos pueden sintetizarse en los siguientes puntos:

1) Campaña de reafiliaciones y afiliaciones en los lugares de trabajo, bajo fiscalización de las agrupaciones sindicales. 2) Amplia amnistía para todos los afiliados y condonación de las cuotas en mora. 3) Emisión de constancias de reafiliación o afiliación equiparables, a los efectos de la votación, al carnet sindical. 4) Confección de padrones en forma simultánea con la campaña de reafiliación y afiliaciones a cargo de un organismo fiscalizador integrado por dos representantes de cada agrupación. Exhibición de los mismos en empresas y lugares de trabajo. 5) Dejar sin efecto toda limitación que impedía elegir o ser elegido a cualquier afiliado. Estos podrán ser candidatos a cualquier cargo electivo por el solo hecho de ser afiliados. 6) Reincorporación de todos los despedidos por razones políticas o gremiales. La negativa de la empresa no inhabilitará a que se presente como candidato a delegado del personal del establecimiento. 7) Los trabajadores que aspiren a ser delegados se integrarán en una lista abierta y única, resultarán elegidos por mayoría simple. Se elegirá un delegado por cada 25 trabajadores o fracción. 8) A partir de la reglamentación se convocará a asamblea general o de delegados para elegir a la Junta Electoral, a la que se incorporarán con voz y voto dos representantes de cada una de las listas. Estas serán reconocidas con el respaldo del 2% de los afiliados, y se pondrán presentar hasta 20 días antes del acto comicial. 9) La empresa se abstendrá a partir de la sanción de esta reglamentación de despedir o trasladar de sección a sus trabajadores mientras dure el proceso de normalización sindical.

un gobierno con iniciativa política pero débil para sostener con acción práctica.

Así el rechazo liso y llano de la ley por parte del MAS y del PO se basó fundamentalmente, más allá de los recursos polémicos y los artilugios literarios, en los mismos argumentos burocráticos: intervencionismo estatal y ruptura de la unidad cegetista. La postura del PCA acusó los vaivenes de su tradicional política ambivalente, “ni los iluminados del Ministerio de Trabajo, ni los dirigentes aferrados a sus sillones” fue su postura inicial que duró hasta que sellara su acuerdo electoral con el grupo que conforma la Comisión Nacional de los “25”.⁷ en conjunto unos y otros, por izquierda o por derecha, fortalecieron la posición defensiva de los burócratas tradicionales.

En definitiva, el proyecto de ley de reorganización sindical se constituyó en el instrumento jurídico central con que el gobierno intentó agrietar aún más la alianza corporativa, debilitando a uno de sus principales integrantes y fortaleciendo las instituciones y el régimen de partidos.

Impulsó el recambio de las conducciones sindicales y no desdeñó el recurso del intervencionismo estatal, en forma bastante desprolija por cierto, vía Ministerio de Trabajo, interviniendo algunos gremios, desplazando comisiones con mandatos prorrogados o desconociendo comisiones internas elegidas en asambleas de fábrica. (pueden señalarse los casos de papeleros, telefónicos, ferroviarios, mecánicos, etc.).

Ambos factores utilizados —jurídico y político— expresan la importancia asignada por el alfonsinismo a su planteo inicial. El trun-

⁷ La posición del PCA es doblemente significativa. Por un lado reitera su tradicional política de no apoyar los intentos hacia la independencia de clase de los trabajadores, sino apoyarse en sus luchas para hacerlo jugar un rol en el frente de clases con la “burguesía nacional”. Por otro lado no sólo favoreció la posición de la burocracia en su conjunto, sino que fue el principal responsable de que abortara prematuramente uno de los más serios intentos de reagrupamiento antiburocrático desde la época de la Coordinadora de Gremios en Lucha en 1975.

Fue el principal promotor e impulsor del ENTRA. Prestó todo su aparato para realizar el plenario en la Federación de Box que convocara más de 4000 trabajadores; muchos de ellos con mandato de sus bases. Suscribió los documentos votados con las modificaciones al proyecto de ley de Reordenamiento Sindical para finalmente en aras de su acuerdo superestructural con la burocracia sindical peronista, retirarse del mismo, veinticuatro horas antes del acto convocado para el 1° de Mayo de 1984 en Plaza Lorea, para asistir el acto programado con la cúpula cegetista en cancha de Atlanta, dejando desairados a dos de los dirigentes más representativos del movimiento obrero argentino y que son un punto de referencia ineludible para cualquier recomposición seria del movimiento obrero, Julio Guillán y Alberto Piccinini, telefónico y metalúrgico respectivamente.

co desenlace, fallo de no innovar en las conducciones sindicales del proyecto por el Senado, marcan puntualmente un fracaso que obligó a un giro de 180° en la política oficial, no sin la complacencia del ala derecha de su propio partido, y que en los hechos concretos rechazó todo el espectro político nacional. Al mismo tiempo es un indicador elocuente de que las distintas fuerzas políticas en pugna no se miden solamente por el porcentaje de apoyos electorales, como tal vez ingenuamente pensaban muchos seguidores alfonsinistas.

El debate apareció como un enfrentamiento político superestructural entre el gobierno y la burocracia sindical, con adhesiones y rechazos repartidos, y donde el conjunto de los trabajadores se mantuvo al margen, fuera de la disputa. No sólo por limitaciones concretas como es la carencia de organizaciones gremiales convocantes en sus manos, sino porque la discusión real no fue llevada a las bases.

El gobierno propuso un recambio de dirigentes de corte “jacobino”, por las cúpulas, confiando en una sanción legislativa para alcanzar el control de cierta porción del aparato sindical.⁸ La burocracia hizo estridentes llamados folklóricos a las bases, desplegó sus influencias locales e internacionales, pero no bajó la discusión al seno de los trabajadores. Incluso cuando convocó a concentrarse frente al Congreso de la nación lo hizo limitando la convocatoria a “los cuadros sindicales”.⁹

He aquí un verdadero punto de confluencia del gobierno alfonsinista y la burocracia sindical peronista. Se contraponen en el plano político porque sus proyectos son distintos, pero coinciden cuando se trata de evitar que el movimiento obrero recupere su papel protagó-

⁸ Seguramente otro hubiera sido el curso de los acontecimientos si el proyecto de reorganización se hubiera planteado una real democratización de la vida sindical, invirtiendo el planteo y comenzado, de abajo hacia arriba, por los organismos de base al interior de las unidades fabriles (Comisiones Internas, Cuerpo de Delegados) y continuando por las Seccionales y luego las Conducciones Centrales.

Invertir el planteo comenzando “desde abajo” encierra una mecánica que en su desarrollo lleva el reemplazo de los viejos dirigentes por delegados de base; en última instancia potencialmente encierra la posibilidad de que los trabajadores avancen en el control de sus propias organizaciones.

Aquella forma de encarar la reorganización, de arriba hacia abajo, es una de las causales que junto con las restricciones estatutarias y la falta de control sobre las juntas electorales, trabaron la posibilidad en un gran número de gremios de forjar listas alternativas. Así los trabajadores no tuvieron otra alternativa que apoyar en muchos casos listas surgidas de desprendimientos burocráticos, o sumarse a aquellos que representaran un mal menor.

nico en la sociedad. Éstos porque temen perder sus privilegios y aquéllos porque rotas las compuertas burocráticas, los trabajadores lo condicionarían con sus exigencias y propuestas concretas.

Finalmente el rechazo de la ley por el Senado deja al descubierto los flancos débiles de la democracia parlamentaria. “Dos votos en el Congreso dirimen una problemática donde el sujeto destinatario —los trabajadores— resultan en realidad convidados de piedra.”¹⁰

Los cambios en la estructura social y en la clase obrera

Los cambios en el modelo de acumulación y reproducción del capital operados a partir de marzo de 1976, y la alteración de los patrones de desarrollo de las fuerzas productivas han concluido en transformaciones estructurales profundas. Aunque persistentemente señaladas en distintos análisis periodísticos y de investigación, su magnitud aún no ha sido precisada con certeza.

Estas transformaciones han dado lugar a un nuevo equilibrio de las relaciones sociales (entre clases y fracciones de clase), y a mutaciones en el comportamiento social de los sujetos colectivos que se expresan en diferentes niveles.

El primero es el que deviene de los cambios estructurales que redundan en una nueva participación relativa de los diferentes sectores económicos y en una nueva articulación de las relaciones de poder en Argentina.

El segundo muestra la modificación de las pautas de conducta que delimitaban el pasado reciente de esos sujetos en la cotidianeidad de la sociedad civil.

⁹ Esta actitud puede ser objeto de una doble lectura. Por un lado no llamar a una movilización que de ser respondida en forma masiva podría escapar de los límites impuestos por los propios dirigentes y ser desbordados. Lo sucedido posteriormente con la movilización de 10.000 metalúrgicos en capital por reclamos salariales que terminaron silbando y abucheando a Lorenzo Miguel y Guerrero frente a las puertas del Ministerio de Economía justifica esta actitud temerosa. Por otro lado la incertidumbre de la propia burocracia en cuanto al remanente real de su antigua capacidad convocante, especialmente cuando no se trata de intereses de clase, sino de sus exclusivos intereses de casta. Frente a la duda optó por el gambito de los “cuadros sindicales”. Hay no obstante un punto de referencia: el acto del 1º de Mayo en Atlanta. Allí la burocracia jugó todo su aparato, contó con el apoyo del Partido Justicialista en pleno y con la colaboración del PCA, del PI, y de otros grupos menores de la izquierda. Según el origen de las cifras y el interés subjetivo de los informantes los asistentes oscilaron entre las 20 y 30 mil personas. Cualquiera fuera el dato real, resulta poco relevante.

¹⁰ “Los 100 Días”, *op.cit.*

La clase obrera no se mantuvo al margen de esta reestructuración que, como en toda crisis, redefinía las relaciones globales entre capital y trabajo. No sólo ha perdido peso (absoluto y relativo) en la formación social, sino que en su interior se introdujeron modificaciones sustanciales, que incluyen desplazamientos y cambios, que alteraron el perfil y homogeneidad de clase construido por los trabajadores y sus representaciones gremiales durante décadas, al calor de modelos de desarrollo distribucionistas, asentados en la expansión del mercado interno y en la sustitución de importaciones.

Los cambios operados en la estructura social a partir de 1976 mantienen una ligazón de continuidad con las tendencias inauguradas a mediados de la década del 60, pero en estos años recientes adquieren una dinámica propia que aumentaron sus desproporcionalidades y produjeron un punto de ruptura en el equilibrio del mercado de trabajo.

El modelo de acumulación impuesto por la oligarquía financiera nativa en el poder¹¹ operó con una fuerte redistribución de ingresos tanto en el plano vertical —favoreciendo al capital frente al trabajo—, como en el plano horizontal —con transferencias interramas e intrarramas—, fortaleciendo a las cúpulas oligopólicas e incentivando la tendencia a la jerarquización de las cuotas de ganancia.

Esta política orientada a provocar un fuerte incremento de la masa de plusvalía y a favorecer la concentración del capital, agudizando la crisis de realización como forma de viabilizarla, fue acompañada por mecanismos que acentuaban despóticamente el control estatal sobre el movimiento obrero.

Mecanismos que incluyeron desde la represión y persecución directas a su vanguardia clasista y combativa; la intervención selectiva a Federaciones y Sindicatos y al Consejo Directivo Central de la CGT; hasta la fijación por decreto de los básicos de convenio, la modificación de las convenciones laborales y la reforma de la Ley 20744 de Contratos de Trabajo.

Estas medidas junto con la intención de forzar los acuerdos entre capital y trabajo en el nivel de las mismas unidades de producción en función de sus productividades diferenciadas, llevaban implícitas, no

¹¹ J. Monge, N. Romano, "La Oligarquía Financiera Nativa en el Poder, un nuevo ciclo histórico, un nuevo modelo de acumulación", mimeo., Buenos Aires, 1978. En este trabajo se define a la OFN como "La alianza del gran capital nacional, cuyos orígenes se remontan a la constitución del Estado nacional, conformada por viejas y nuevas familias alrededor de fuertes grupos empresarios, y cuyas fuentes de acumulación se encuentran en la renta agraria, el beneficio industrial y el interés del dinero."

sólo la pérdida de peso político de las organizaciones gremiales sino una desvalorización de aquellas de segundo grado. Esto afecta directamente la organización y disciplina del movimiento obrero, ya que las Federaciones por rama de industria y las Convenciones Colectivas de Trabajo son las herramientas que han sostenido la unidad social y relativizado los diferenciales salariales.

Es que al desplegarse el abanico salarial se ahondan las diferencias al interior de la clase obrera con la ruptura de su homogeneidad, en tanto que la ampliación de la brecha salarial entre trabajadores de la misma categoría en una misma rama industrial, e incluso en una misma fábrica o zona, tiende a deteriorar la solidaridad de clase.

La satisfacción de las nuevas necesidades de la acumulación capitalista provocó la aceleración de la concentración en la industria, con su secuela de absorciones, fusiones y quiebras en cadena, lo que acompañado de cambios relativos en la composición orgánica del capital y cierto grado de innovación tecnológica incidió sobre la pérdida de empleos industriales y el crecimiento de la masa de desocupados.

El propio modelo privilegió el comportamiento individualista de una sociedad consumista, amplió el campo de las actividades de servicios y favoreció todo tipo de intermediación parasitaria con lo que la llamada terciarización temprana de la economía, insinuada ya en los años '60, cobraría nueva fuerza y se difundiría ampliamente, creciendo a tasas mayores que las de las actividades productivas, dando así lugar al surgimiento de nuevas fracciones de la pequeñoburguesía y de las capas medias en general.

La abrupta caída de los salarios reales, por otra parte, forzó el retiro del mercado de trabajo. Primero fue la mano de obra femenina y luego los jefes de familia, que fueron a engrosar las filas del cuentapropismo y del trabajo individual. Paralelamente las patronales recurrieron en forma creciente a aumentar el componente de premios y bonificaciones en el total de las remuneraciones, y a las horas extras como reemplazo de la incorporación de nueva fuerza de trabajo.

El resultado final es que hoy la estructura social muestra juntamente con el incremento de la masa de desocupados y del trabajo precario el fortalecimiento de una fracción de obreros más calificados que se diferencian del resto y se ubican en las industrias más dinámicas; la emergencia de nuevas franjas de las capas medias, el em-

pobrecimiento de otras y el deslizamiento hacia la marginalidad social y la pauperización de los sectores sociales más desprotegidos.¹²

En la clase obrera pueden mencionarse sintéticamente los siguientes aspectos:

- **Modificaciones en el perfil de los asalariados que se evidencian en los cambios en la estructura ocupacional, el incremento en el sector servicios y una fuerte pérdida relativa de los empleos industriales.**

¹² Una idea de los cambios operados en la clase obrera y en relación a la formación social puede acotarse con estos indicadores que hemos seleccionado de: "La clase Obrera en la Argentina", El Bimestre, N° 16 — Agosto '84:— y "Evolución de la Industria Manufacturera entre 1974-1981. INDEC:

— En 1947 por cada cien habitantes había 7.4 en la industria, en 1970, 6.4, y en 1980 sólo 5.9. Pero a partir de esta fecha censal los asalariados industriales caen en número absoluto "por primera vez en la historia moderna argentina"

— Según la encuesta del INDEC, los establecimientos de más de 25 personas censados en 1974 ascendían a 8.101, en 1981 alcanzaban a 6.637, cayeron un 18 %; en tanto que el personal ocupado que era de 1.056.012 cayó a 738.524, un 30 %.

Las industrias más afectadas se ubican en las ramas textil, metalmecánicas, maquinarias y equipos.

Pero el proletariado industrial no sólo disminuyó físicamente sino que también se dispersó:

— Los establecimientos "grandes", que ocupan más de 400 obreros, disminuyeron en un 11 %, pero el personal ocupado lo hizo en forma más que proporcional: cayó un 34 %. Esto fue acompañado por un cambio cualitativo en el nivel educativo. Los obreros que quedaron en las empresas grandes tienen un umbral educativo superior.

— La clase obrera ocupada en la construcción pasó de 450.000 en 1970 a 400.000 en el '81, luego de haber orillado los 520.000 alrededor de 1978. En tanto que los trabajadores de las empresas de servicios públicos pasaron de 275.000 en 1975 a 195.000 en 1981.

— Hacia 1983 los obreros de la industria, la construcción y los servicios básicos sumaban cerca de 1.800.000, en 1983 sólo alcanzaban a 1.300.000. Según "El Bimestre" en las elecciones nacionales de 1973 había un obrero por cada 7.8 electores registrados en el padrón; en 1983 había uno por cada 13.8 electores. En 10 años la capacidad de los obreros para incidir con su voto en un resultado electoral se redujo a casi la mitad.

— Una aproximación a los cambios ocupacionales se puede obtener cotejando el 1.300.000 obreros de la industria, la construcción y los servicios con los 2.260.000 "cuenta propia" que registra el censo; o con los 550.000 trabajadores domésticos, o con los 900.000 vendedores que registra el mismo censo.

- Ruptura de la homogeneidad y de los lazos de solidaridad internos de la clase por las alteraciones en la estructura productiva, la quiebra de las convenciones laborales y la dispersión y diferenciación de las escalas salariales.
- Indicios de segmentación en el mercado de trabajo, con dificultades a la entrada que se presentan en determinadas ramas productivas y trabas en la movilidad intersectorial.
- Aparición de bolsones de marginalidad que engloban contingentes de desocupados que no logran establecer relaciones funcionales con las unidades de producción.

Ahora bien, es válido preguntarse ¿hasta qué punto los cambios en la estructura social y las trasformaciones operadas en la clase obrera aparecen reflejados, al menos tendencialmente, en los resultados del proceso de elecciones sindicales actualmente en curso?

Responder a nuestro interrogante requeriría un trabajo de una dimensión y envergadura teórica distintas a las del presente, y más alejado en el tiempo del momento de ocurrencia de los hechos. En una sociedad en transición, como lo es la Argentina de nuestros días, las variables tienen un alto grado de provisoriedad. Sin embargo es posible recurrir a algunos antecedentes recientes e inferir algunas hipótesis de trabajo que resulten operacionales para investigaciones futuras.

Las elecciones del 30 de octubre de 1983 mostraron cambios tendenciales en el comportamiento electoral de los sujetos sociales colectivos; la consulta popular por el Canal de Beagle en 1984 ratificó aún más esta tendencia (la estructura porcentual del voto por distrito electoral según las dimensiones socioeconómicas regionales muestra un comportamiento diferenciado según el mayor o menor grado de industrialización); finalmente la huelga general decretada por la CGT el 3 de septiembre de 1984, con adhesiones y rechazos repartidos, marcó a fuego la distinta actitud de los trabajadores industriales, que acataron masiva y disciplinadamente el paro, respecto de los que revisten en el sector de servicios.

Con los resultados conocidos hasta ahora puede señalarse que el viejo proletariado industrial ha perdido porciones importantes de su poder estratégico y encuentra serias dificultades para hegemonizar al conjunto de los trabajadores. Disminuido y agrietado, continúa sujeto a prácticas que son resabios de tipo vandorista (caso de metalúrgicos, alimentación, carne, petroleros, ferroviarios), en tanto

que el incremento del sector servicios así como el mayor peso relativo del empleo estatal se verifica en la nueva dimensión alcanzada por estos gremios, que van asumiendo una presencia política creciente, y en la intensa puja electoral que pudo observarse (caso de bancarios, seguros, sanidad, estatales), o en la dura puja por reconstituir las “62 organizaciones peronistas”: brazo político de la burocracia sindical peronista.

El mayor grado de concentración económica encuentra su contrapartida en el fortalecimiento de una corriente participacionista de envergadura (CGyT, Comisión de los “20”.; Independientes).

La irrupción de las formas democráticas ha permitido asimismo la emergencia de corrientes que resultan tanto expresión de franjas burocráticas de nuevo tipo con un discurso diferente al tradicional, como de corrientes pluralistas, democráticas y clasistas.

La presencia del radicalismo como expresión organizada en el movimiento obrero, si bien no alcanzó la envergadura ilusionada por el alfonsinismo, con una política de alianzas totalmente errática y posibilista que en ocasiones enfrentó a corrientes partidarias internas, no debe despreciarse. Fracasó totalmente en ferroviarios, pero fue protagonista en bancarios, participa en varias conducciones centrales de distintos gremios y obtuvo 1.700 votos de los obreros mecánicos cordobeses.

Este abanico de tendencias y de hipótesis a confirmar deja planteada una problemática de investigación cuyo marco teórico y formas de resolución práctica no encuentran demasiados antecedentes en Argentina: La identificación de las principales fracciones de la clase obrera, sus orientaciones organizativas, sus expresiones de acción práctica.¹³

¿Hasta qué punto las fracciones internas que es posible identificar en la clase obrera constituyen una resultante de las distintas formas en que los trabajadores se insertan en el proceso productivo? ¿Y estas formas de inserción se reflejan en los agrupamientos político-sindicales, que más adelante identificamos y que muestran frente a cada coyuntura nacional comportamientos diferentes en el plano de las alianzas con distintas fracciones de la burguesía, en el de las propuestas programáticas, en las acciones concretas?

¹³ Un proyecto de investigación en este sentido fue presentado en CICSO en abril de 1976: “La Clase Obrera Argentina: Fracciones Internas, Orientaciones Organizativas y Comportamiento de Clase, 1945-1975”. Lamentablemente no pudo llevarse a cabo.

No es este el lugar de responder a estos interrogantes, ni estamos hoy en condiciones de hacerlo: simplemente los dejamos planteados.

Los resultados electorales

Aún faltando normalizar algunos gremios importantes, e incluso la propia CGT, ¿qué es lo que muestran el surgimiento del proceso electoral y la lectura de los resultados?

En primer lugar son notorias las diferencias contextuales con las últimas elecciones generales. Una década atrás las impugnaciones por parte de las listas oficialistas resultaban moneda corriente, y había un hilo conductor que las atravesaba a todas ellas: su componente ideológico. La vieja dirigencia sindical, más allá de sus diferencias internas, funcionaba como bloque, abroquelada en torno a la “62 Organizaciones” peronistas y frenaba todo intento de oficializar listas por parte de los agrupamientos clasistas y combativos.

El resultado fue en la gran mayoría de los gremios la presentación de listas únicas, pero especialmente en aquellas organizaciones que mayor peso corporativo y político tienen en la vida nacional: UOM; UOCRA; SMATA; SUPE; ATE; Luz y Fuerza, (ver listado de siglas), y en aquellos casos en que la fuerza de la realidad lograba traspasar las barreras de impugnaciones y normas estatutarias, la persecución ideológica asumía formas intervencionistas. Ya fuera estatal —vía Ministerio de Trabajo—, o bien por las propias conducciones centrales de los gremios. Entre los primeros pueden señalarse las intervenciones a la Federación Gráfica Bonaerense y a la Asociación de Periodistas de Buenos Aires; entre los segundos a las Seccionales cordobesas del SMATA y Luz y Fuerza, y a la Secc. neuquina de la UOCRA.

En algunos casos esto resultó acompañado por la creación desde el Estado de sindicatos paralelos como UDA en el gremio docente para ocupar el espacio de la oficialmente desconocida CTERA, a quien una y otra vez se le denegara la personería; el actual SGA para reemplazar a la intervenida FGB; o bien reflatar organizaciones de escasísima representatividad como el Sindicato de Prensa. En todos los casos estas nuevas organizaciones se alineaban en la derecha peronista. (Es interesante señalar que actualmente la UDA muestra un importante proceso de democratización interna y está en franco tren de incorporarse a CTERA).

La contrapartida de estos manejos políticos, que encerraban una verdadera persecución ideológica, se expresó entonces en la baja participación electoral de los afiliados, casi siempre inferior al 25 % de los padrones, y en el grado de violencia generalizado al que la burocracia, amparada por el aparato estatal, recurría sistemáticamente en la medida que se aislaba de las bases para ligarse cada vez más al Estado (son recordados los enfrentamientos ocurridos en UF, UOCRA, SUPE, entre otros).

El proceso electoral en curso muestra un signo inverso, y pone en evidencia el debilitamiento de aquellas “anomalías” que constituyeron la normalidad durante décadas. Un contexto político y social distinto, que muestra rasgos inéditos frente a lo anteriormente conocido, unido a una iniciativa gubernamental que encierra un proyecto encontrado al de la vieja dirigencia obrera, abrió un espacio democrático que permitió un juego diferente, que mostró una política de alianzas distinta.

La impugnación ideológica dejó paso al pluralismo político. El monolitismo de las “62 Organizaciones” fue seriamente erosionado, no sólo por la presencia legalizada de otros agrupamientos que le disputan los espacios de poder y la titularidad de la cúpula cegetista, sino también por el resquebrajamiento al interior de ellas mismas lo que dio lugar a que en algunos gremios se presentaran como alternativas listas que se reclamaban casi todas de las “62”. (Caso de UTA; APUBA; STIA).

La impugnación dejó así de ser estrictamente ideológica para transformarse en la mayoría de los casos en un instrumento de la lucha interburocrática.

La participación electoral alcanzó niveles desconocidos, poniendo en evidencia una vez más la tendencia que recorre todo el tejido social de la sociedad argentina en lo que se refiere a expresarse a través de los canales institucionalizados por el régimen democrático.

Así la reorganización sindical no escapó a la tendencia general inaugurada el 30 de octubre de 1983 con las elecciones nacionales y continuada con la consulta popular por el conflicto centenario del Canal de Beagle. la participación de los votantes sobre los padrones oficializados está en promedio cercana al 60 %, con picos como Villa Constitución donde se alcanzó el 99.9 %; y Luz y Fuerza capital donde lo hizo el 87.3 % (para el anecdotario vale la pena señalar que en este gremio se votó en dos jornadas, siendo la primera de ellas domingo con un alto porcentaje de votantes).

Claro está que los elementos del pasado no dejaron de estar presentes. El pluralismo político fue paralelo a las listas únicas; la

violencia estuvo presente como un remanente del pasado en gremios como 'sanidad y construcción; el intervencionismo estatal, ya fuera por acción u omisión de la autoridad de aplicación, no pasó desapercibido en los casos de la AOT; UOyEP, UOM, ATSA, UF, UOCRA, etc.

Finalmente el control de las Juntas Electorales resultó un elemento casi definitorio al momento de la confrontación electoral, y este proceso echó luz sobre la debilidad de algunos liderazgos sindicales cuyas figuras fueron sobredimensionadas en épocas de la dictadura militar. Por ejemplo Horacio Alonso, figura importante de la Comisión Nacional de los "25" y de la CGT Brasil, titular de la UEJN que fuera desplazado por una asamblea general de afiliados y que sufrió una fuerte derrota en las elecciones de su gremio, hoy está retirado de la actividad sindical y es un simple asesor del senador peronista Oraldo Britos; o Saúl Ubaldini, uno de los actuales cuatro Secretarios Generales de la CGT, cuya representatividad se asienta en un sindicato de fábrica que cuenta con 63 afiliados.¹⁴

La reorganización sindical que en los últimos tramos se está desarrollando en forma paralela con las políticas de concertación social impulsadas por el Poder Ejecutivo y la discusión tripartita —gobierno/UIA/CGT— acerca de las obras sociales, ha hecho aflorar los numerosos bloques internos y enfrentamientos que continuamente se expresan en alianzas sin principios, en acuerdos superestructurales, y en rupturas de cúpulas inconsistentes frente a las bases.

En un primer análisis éstos no representan otra cosa que peleas por los espacios de poder que encubren diferentes modos de relación con el Estado. Pero si se ahondara el análisis, como hemos propuesto anteriormente, podría verificarse tal vez que esa seguidilla de alianzas, rupturas y recomposiciones de los agrupamientos político-sindicales van mostrando, aunque no siempre en forma cristalina, las respectivas alianzas y enfrentamientos de distintas fracciones de la clase obrera, que adoptan formas organizacionales para vincu-

¹⁴ "Saúl Ubaldini acaba de ganar con lista única en su atípico 'Sindicato de Obreros y Empleados del Fermento' que cuenta con 63 afiliados. Es un sindicato de fábrica que nuclea a los trabajadores de la Cía. Argentina de Levaduras (CALSA) una empresa con tres fábricas, cada una con un sindicato propio. "La 'Federación Cervecera' de la que Ubaldini es secretario gremial y de interior y que aún no renovó autoridades cuenta con 17 sindicatos de fábrica y alrededor de 7000 afiliados" (*Clarín*, 3/12/84).

larse al Estado, a los partidos, a las distintas fracciones de la burguesía y a los grupos de presión.

A medida que se han ido conociendo los resultados gremio por gremio, con su carga de revalidaciones, desplazamiento, nuevos liderazgos, presencia de listas opositoras que aún perdidosas constituirán un referente futuro ineludible, se va operando un reacomodamiento de fuerzas cuya expresión pareciera ser una suerte de cristalización de las fracturas al interior del cuerpo burocrático. Cristalización esta que recoge viejas tendencias remanentes del pasado y nuevas expresiones fruto de los cambios ocurridos en la composición de la clase obrera.

Este realineamiento de fuerzas permite apreciar la consolidación de los encuadramientos preexistentes sobre los que es posible avanzar una primera aproximación.

a) El viejo tronco vandorista nucleado en torno a la “62 Organizaciones” peronistas (hoy caracterizadas como “miguelismo”), y los no alineados: insertados esencialmente en el viejo proletariado industrial. Que expresa un proyecto de corte nacional-burgués desarrollista, asentado en la acumulación del capital sobre la base de la expansión del mercado interno. Políticamente plantea una posición economicista de derecha, siendo su intención corporativa reconquistar el poder económico resultante del control de las cuotas de afiliaciones y las obras sociales; como contrapartida se propone en su antiguo rol de mediación y control de las masas obreras negociando concesiones salariales y sociales.

b) El ala colaboracionista —participacionista, que se expresa a través de la Comisión de Gestión y Trabajo pero a la que hay que adicionar sus antiguos socios de la CGT Azopardo: la Comisión de los “20”, hoy sensiblemente reducida y algunos gremios “Independientes”

Este grupo de corte profesionalista insertado en algunos gremios industriales y de servicios de envergadura y peso político, no hace más que recoger las tendencias a la colaboración y el acuerdismo que una y otra vez han resurgido en la vida sindical argentina de las últimas décadas y que estuvieron representados por dirigentes importantes como Kloosterman (mecánicos), Cavalli (petroleros), Coria (construcción), Tacco-

ne (Luz y Fuerza) y que conformaran agrupamientos como el “Grupo de los Ocho” o “Nueva Corriente de Opinión”.

Ligado al gran capital y a los militares se fortaleció bajo la dictadura —de hecho se constituyó sobre la base de las Federaciones intervenidas— alcanzando una dimensión y protagonismo que supera ampliamente a las experiencias anteriores y debe buscarse una explicación correlacionándolo con los cambios tendenciales que desde tiempo atrás vienen afectando al capitalismo dependiente argentino.

Frente a un modelo de acumulación que fortaleció las cúpulas oligopolicas, que hoy llegan a controlar segmentos importantes de los mercados en que actúan aparece esta corriente sindical con apoyatura social ligada a esos intereses. Las posiciones de este sector en la mesa de Concertación asumiendo la propuesta y programa de la Unión Industrial Argentina resultan una primera contrastación práctica para esta hipótesis.¹⁵ Como contrapartida la tajante oposición de las “62 Organizaciones”, más allá de la puja fraccional, refiere al viejo esquema vanderista.

Ambos sectores, participacionistas y vanderistas, tienen puntos de contacto en el plano metodológico: nula participación de las bases y presionar para negociar.

- c) La burocracia de nuevo tipo, nucleada en torno de la Comisión Nacional de los “25”, asentada casi con exclusividad en los gremios de servicios, que pareciera expresar un proyecto de renovación y protagonismo sindical en la vida política del país. Sin embargo su política de alianzas sin principios con la CGyT, su tacticismo frente al miguelismo, dan muestras de la endeblez de su coherencia interna y de la existencia en su seno de intencionalidades diferenciadas, cuando no contradictorias. Es que en la conformación actual de este agrupamiento, que dista mucho de ser el original, coexisten dirigentes que muestran un pasado divergente: peronistas verticalistas y ortodoxos;

¹⁵ La reciente discusión en el seno de la CGT. en relación al rol del Estado en la sociedad, es otro indicador elocuente. Ya no se trata de que el plástico Jorge Triaca declarara días atrás que los trabajadores argentinos “han optado por el capitalismo”. En rigor este aspecto desde la década del '40 no estuvo en discusión entre los dirigentes cegetistas. Pero en esta oportunidad se ha optado sin eufemismos por el discurso neoliberal. Cuando se discute la dimensión y el papel del Estado, la disminución del gasto público y la liberación de precios y salarios. Cuando se integra el “Grupo de los 11” junto con la Sociedad Rural, la Unión Industrial, la Asoc. de Bancos de Buenos Aires, etc.

antiguos vanderistas y calabrocistas; participacionistas y combativos.

En realidad este sector constituye un conglomerado diferenciado del resto de la burocracia pero a su vez heterogéneo en sí mismo, que más allá del mayor o menor grado de burocratización de sus integrantes muestran puntos de coincidencias: su unidad política en torno a la ideología populista del peronismo y el estar jugados, al menos en lo inmediato, al sostenimiento del régimen democrático de gobierno, en una apuesta política que será necesario valorar en toda su dimensión.

En el plano de las relaciones internacionales aparece sujeto a tensiones. A diferencia de las “62 Organizaciones” y la CGyT, que año a año han ido anudando relaciones con la central norteamericana ALF-CIO, los “25” se ven cruzados por dos grandes tendencias: un ala socialdemocrática vinculada a la CIOLS-ORIT; y un ala socialcristiana vinculada a la CMT-CLAT.¹⁶

Pero esta reorganización sindical también demostró que puesta en situaciones de definiciones y bajo condiciones mínimas, y aún sin los instrumentos legales adecuados, la memoria histórica colectiva de las masas trabajadoras, recuperando sus experiencias y superando la fractura de continuidad impuesta por el paréntesis dictatorial, se expresó puntualmente.

Superando las prisiones y los exilios, las trampas estatutarias y la persecución ideológica, varios dirigentes de distintas vertientes políticas e ideológicas recuperaron sus puestos en sus organizaciones gremiales.

Así pasó en FOETRA-Capital con el triunfo del Frente Gremial Telefónico, construido en torno al activismo de la lista Marrón, con la participación de comunistas, intransigentes, radicales y de izquierda independiente, que repuso en su titularidad a Julio Guillán, debiendo enfrentar tanto a listas burocráticas ligadas a las “62 Organizaciones” y a la CGyT, como a listas decididamente de izquierda que hicieron gala de un sectarismo incomprensible.

En la UOM nueve seccionales escaparon a la tutela de la dupla Miguel-Guerrero. Por su envergadura y antecedentes son de destacar las de Quilmes, La Matanza y Villa Constitución.

¹⁶ Esto llevó a que las “62 Organizaciones” se pronunciaran contra “...los intentos de infiltración ideológica por parte de ‘socialdemócratas’, del ‘socialcristianismo’ y del ‘comunismo’ ” (*Clarín*, 21/3/85).

En Quilmes los trabajadores metalúrgicos impusieron con la fuerza de los votos como Secretario General a Francisco Gutiérrez, prisionero de la dictadura durante siete años y contra quien la burocracia llegó a volantear las puertas de fábrica con su "prontuario". En La Matanza una lista "armada desde afuera" (para usar el lenguaje del activismo) por gente expulsada de fábrica que reconocía sus antecedentes en las Coordinadoras de 1975, asestó una derrota aplastante a una dirección local tal aferrada a los sillones como alejada de las bases, derrotándola en todas las grandes fábricas de la zona (Acindar, Ex Sta. Rosa; Martín Amato; Yelmo.). En Villa Constitución los trabajadores nucleados en torno a la lista Marrón volvieron a plasmar un nuevo hecho histórico: no sólo recuperaron su sindicato y reeligieron secretario general a Alberto Piccinini, sino que por sobre los restos de una tierra literalmente arrasada los integrantes de la lista Marrón fueron prácticamente plebiscitados. Votó el 99 % de los empadronados (sobre un total de 4720 habilitados para votar solamente no lo hicieron 6) y de los votos emitidos la lista Marrón obtuvo el 87.9 % , contra un 11.2 % de la Azul y Blanca ligada a las "62 Organizaciones"

Las elecciones en el Sindicato Gráfico Argentino (ex FGB.) se constituyeron en otro acto de reparación histórica. El Frente Gráfico de la Honra —que rememora la consigna de la CGT de los argentinos de los años '60 "mejor honra sin sindicatos que sindicatos sin honra"—, constituido en torno a la Lista Verde, orientada históricamente en una perspectiva de clase, aglutinó los esfuerzos de peronistas combativos, intransigentes, clasistas e independientes de izquierda en general.

El triunfo por más del 50 % de los votos emitidos, logrado a costa de las listas de la burocracia que colaborara con la intervención en 1975, y de la alianza de un desprendimiento de ésta ligada a los "25" con activistas comunistas, radicales y socialistas amarillos, no sólo repuso en el cargo de secretario general a su máximo dirigente Raimundo Ongaro, sino que tiene connotaciones que superan los estrechos marcos de la actividad gremial.

Si Alberto Piccinini y todo el movimiento metalúrgico de Villa Constitución representan hoy la continuidad histórica de las tendencias clasistas que se expresaron diez y quince años atrás con epicentro en el movimiento social cordobés (SITRAC-SITRAM, SITRAP, Luz y Fuerza, UEPC, ATILRA) pero que se extendió también a Rosario (mecánicos, petroleros, químicos) y al Gran Buenos Aires (Martín Amato, Squibb, Astarsa, Saiar-Rheem, Hospital Posadas), donde dirigentes que no se reclamaban del peronismo eran elegidos por bases obreras mayoritariamente peronistas; Raimundo Ongaro, un di-

rigente peronista votado por una gran cantidad de gráficos no peronistas, con todo lo que representa la historia de la CGT-A detrás, se constituye en la conciencia crítica de la burocracia sindical peronista. La valoración ética y moral de aquella época se proyecta en el presente como la representación inversa de la conciencia culpable de toda una franja del llamado sindicalismo peronista combativo, que una y otra vez se enfrentara al vandorismo, y que una y otra vez encerrado en los estrechos límites del nacionalismo que se expresa en su conciencia populista, terminara enredado sin principios en la maraña burocrática.

Las listas autodefinidas como independientes, de corte clasista en distintas variantes, han tenido un espacio en el movimiento social muy inferior respecto a los años '60 y '70, pero sus expresiones no dejan de ser significativas en gremios como alimentación, seguros, sanidad, telefónicos, mecánicos, bancarios, cine, construcción, panaderos y han de ser un punto de referencia para la futura reorganización democrática del movimiento obrero.

Pero las derrotas de las seccionales cordobesas del SMATA y Luz y Fuerza constituyen el otro costado de estas elecciones. Allí el tosquismo perdió las elecciones por 25 votos, y el SMATA la lista Naranja, de alguna manera [es] continuidad de la Marrón de una década atrás, salió cuarta entre cuatro y una lista radical obtuvo 1700 votos, lo que está hablando a las claras del retroceso impuesto por la represión y la crisis económica en esta regional, baluarte del sindicalismo clasista y combativo, a partir de 1976.

Finalmente la emergencia de direcciones democráticas que se definen por una concepción pluralista, que expresan la necesidad de construir una legitimidad asentada en la consulta asamblearia y el requisito de reenlazar la relación con las bases, en gremios como APBA (prensa), APOPS (previsionales), UEJN, (judiciales), SUP (publicitarios), bancarios de capital, municipales de provincia y ATE (estatales), completan el cuadro de situación resultante.

Este último es uno de los datos más relevantes de estas elecciones. Se trata de uno de los gremios grandes (85.000 afiliados), extendido a la largo y a lo ancho del país. Es prácticamente el único de nivel nacional que fue recuperado por los trabajadores, desplazando a una burocracia colaboracionista asentada desde hace más de 20 años, en los que tejó profundas relaciones con los militares. Su conformación interna refiere bastante al tejido social más general del país: en su seno coexisten desde empleados públicos de los ministerios nacionales y provinciales, hasta obreros industriales de las fábricas militares, los astilleros y las construcciones portuarias, pasando por las enfermeras de salud

pública, los mineros de yacimientos carboníferos y los técnicos y profesionales de la Comisión de Energía Atómica. La conformación de la Lista Verde, sobre la base de la agrupación ANUSATE (unidad y solidaridad de los trabajadores estatales), es una de las expresiones más extendidas del pluralismo político emergente: muestra un gran número de peronistas independientes, radicales, intransigentes, democratas cristianos, comunistas y socialistas independientes. Aspecto éste que se muestra no sólo en la conducción central sino también en las principales direcciones seccionales.

Las elecciones en la UOCRA, si se prescinde de la baja participación electoral, aparecen como la síntesis de todo el proceso: la derrota aplastante del miguelismo (lista Marrón), triunfo de una lista de recambio (Blanca) nacida en el seno de la propia burocracia tradicional, ascenso de un sector neoburocrático (lista Azul) de características pluralistas, y emergencia de un sector clasista (Lista Naranja) que obtuvo el 10 % de los votos emitidos y ganó en varias seccionales importantes.

¿Qué grado de representatividad?

El saldo preliminar de esta reorganización sindical es que el peronismo burocrático, aún no repuesto del síndrome del 30 de octubre de 1983, agudizadas sus contradicciones internas por una lucha fraccional que pareciera no tener límites, continúa hegemonizando en la figura de sus viejos dirigentes la mayoría de las conducciones sindicales. Cálculos estimativos ubican esta mayoría en el orden del 70 % de los gremios.

Hemos ya señalado que la forma de instrumentar la normalización, de arriba hacia abajo, y el cambio de la política oficialista hacia la dirigencia sindical una vez rechazado el proyecto de ley, que involucra sucesivos cambios en la cartera de trabajo, favoreció decisivamente estos resultados, ya que en la mayoría de los casos los trabajadores no tuvieron otra alternativa que optar por el mal menor.

Sin embargo esta persistencia en la titularidad de los cargos no ha sido gratuita. En numerosas situaciones la burocracia sindical peronista se vió obligada a producir una renovación de sus cuadros dirigentes; en otras su propia debilidad la forzó a instrumentar una política de alianzas alejada del sectarismo partidista tradicional; de sus propias filas emergieron figuras nuevas, con una nueva metodología y con vocación más pluralista que cuestionan el sindicalismo partidario. La articulación de este conjunto de situaciones favoreció la expresión de otras fuerzas políticas; radicales, intransi-

gentes, comunistas, socialistas, de izquierda en general, peronistas independientes, lo que en una perspectiva futura tenderá a darle una dinámica distinta a las direcciones así constituidas.

Pero aún así, superando este primer nivel de análisis, es válido preguntarse: ¿Cuál es el grado de representatividad asignable a estas direcciones? ¿Y a los alineamientos en que la gran mayoría de estos dirigentes se ha alineado? ¿Constituyen organismos capaces de movilizar a las fracciones de trabajadores que dicen representar, o solamente se trata de acuerdos de dirigentes? ¿Y estos últimos, ejercen un liderazgo real sobre “sus” bases o son el resultado de un mero acto comicial, que los legaliza como dirigentes pero que no necesariamente los legitima como auténticos representantes de su clase.

Veamos una enumeración no exhaustiva que tal vez permita avanzar para una reflexión futura respecto de estos interrogantes.

- Resulta común identificar un criterio de representatividad ligado a la mayor o menor participación electoral, medida esta por la relación número de votantes/padrones oficializados. Sin embargo en aquellos sindicatos en que se presentaron más de una lista, los votos recogidos por la ganadora, en relación al padrón, pocas veces superan el 30 % del mismo.

Si la constitución de las conducciones se asentara sobre un criterio de proporcionalidad —cuestión sobre la que debería discutirse la operatividad futura— la representatividad en un contexto de alta participación electoral estaría garantizada; pero no siendo así queda al menos el beneficio de la duda.

Es posible ejemplificar lo que queremos significar. En el SMATA, que muestra una alta participación de votantes (69.7 %), la Lista Verde triunfó con el 50.1 % de los votos emitidos, pero éstos representan el 41 % del padrón (uno de los porcentajes más elevados), lo que le permite controlar 14 seccionales y 3 delegaciones; en tanto que la opositora Lista Azul y Blanca controla 19 seccionales y 3 delegaciones, pero está asentada en las grandes fábricas terminales, donde también hubo una buena votación antiburocrática, en tanto que el oficialismo tiene su fuerte en los pequeños talleres y concesionarias. Finalmente ninguna de las dos listas alcanza los 2/3 de los congresales necesarios para garantizar el manejo del gremio.

La Unión Ferroviaria, que tiene uno de los mecanismos electorales más complejos, muestra un cuadro aún más demostrativo. Votó el 47 % de los 142.345 empadronados, la Lista Verde ganó con el 23 % o sea con escasos 33.786 votos de los cuales 6.251 corresponden a trabajadores jubilados.

La relación de votos de las listas ganadoras respecto de los padrones es en UTA del 20 % ; en gráficos del 25.8 % ; en bancarios y en la construcción del 17 % ; y en ATE del 27 % .

Nunca como en esta oportunidad fue tan disputada la participación de los trabajadores pasivos, especialmente en gremios tradicionales. En SUPE, por ejemplo, el 33 % del padrón correspondía a jubilados, en tanto que en la Unión Ferroviaria el padrón de activos fue de 79.663 y el de pasivo alcanzó a 62.282, en el F.C. Belgrano el padrón de pasivos fue superior al de los trabajadores activos.

- El recurso de las listas únicas como mecanismo excluyente de toda oposición, a poco que se profundice el análisis, pasando del nivel nacional al seccional o regional, se muestra mucho más extendido que lo previsible.

UPCN, AOT, UOyEP, Marroquineros, incluso gremios importantes por su magnitud como la Asociación Bancaria, la Federación de Empleados de Comercio, o por su presencia política como Empleados del Tabaco y Sindicato del Caucho, fueron normalizados en épocas de la dictadura utilizando el método de la lista única.

El caso del gremio de obreros del vidrio (SOIVA) es por demás clarificador. El dirigente J. Luján, miembro de la Comisión de los "20", retuvo la titularidad sobre la base del triunfo en 10 seccionales donde sólo pudo presentarse la oficialista lista Azul y Blanca, en tanto que en el resto de las seccionales donde sí hubo confrontación ganaron, con excepción de la seccional Rosario, las listas opositoras.

Los casos del Sindicato Metalúrgico-Seccional capital y de obreros del plástico revisten una situación especial. Sus respectivos dirigentes, Lorenzo Miguel ("62 Organizaciones") y Jorge Triaca (CGyT) necesitaban triunfar holgadamente, no sólo para retener el control de sus respectivos sindicatos, sino porque estos aparatos constituyen la plataforma de su proyección política. Requerían

entonces del aval de representatividad que se supone les otorga un triunfo con muchos votos y una alta tasa de participación electoral. Y esto en gremios anquilosados desde hace muchos años, quebrada la relación con las bases, solo es posible excluyendo a la oposición, garantizando así la ausencia de fiscales de otras listas y facilitando el contubernio con la autoridad electoral.

Esta parece ser la razón del empeño del miguelismo en capital por excluir a una lista sin mayores posibilidades reales como la Celeste encabezada por el viejo dirigente Avelino Fernández, formado a la sombra de Augusto Vador y desplazado de la conducción del gremio luego de la muerte de éste.

- La representatividad que se asignan los agrupamientos en los que hoy aparecen alineados la mayoría de estos dirigentes ofrece también serios reparos en cuanto a la legitimidad y el sustento real de las bases a esas propuestas. Por empezar no es conocida ninguna asamblea general de afiliados, o convocatoria al cuerpo de delegados para discutir democráticamente las posiciones y las razones de cada agrupamiento, y recoger la opinión de los supuestos representados.

En lo inmediato estos alineamientos no parecieran ser otra cosa que acuerdos de dirigentes, constituidos por fracciones de la burocracia sindical que no se plantean la discusión en el plano de las ideas, alrededor de programas, propuestas y metodologías, sino que aparecen disputándose espacios de poder que en última instancia refieren a diversas formas de relacionarse con el Estado, y cuya capacidad de convocatoria está, cuando menos, entre paréntesis.

Un recorrido posible

La sociedad argentina muestra hoy, en diversos planos y con cambiantes características, claros síntomas de una compleja conflictividad social. Las clases dominantes están a la búsqueda y consolidación de un nuevo bloque de poder que garantice la explotación de la fuerza de trabajo y la acumulación y reproducción del capital por un nuevo período histórico, en tanto que la clase obrera ha retomado el camino de su reconstitución social y su autorganización democrática independiente, sin que aún aparezca una alternativa clara que refleje sus intereses y plantee con seriedad y responsabilidad una propuesta frente a la crisis y a la sociedad toda.

El retroceso impuesto a los trabajadores por la ofensiva generalizada y sostenida del gran capital nos muestra hoy cómo un sujeto con una larga tradición de lucha, fue capaz de darse programas como los de la Falda y Huerta Grande (1957-1959); que mostró toda su potencialidad en las tomas de fábrica de 1964 y en las Jornadas de Mayo de 1969 en Córdoba; que forjó estructuras alternativas como la CGT de los Argentinos (1969) y las Coordinadoras de Gremios en Lucha (1975); que se planteó alternativas clasistas como SITRAC-SITRAM (1971) y Villa Constitución (1975), aparece hoy con serios signos de desarticulación, acorralado por la debacle económica, la quiebra de los convenios colectivos y el mercado de trabajo, y el fantasma de la desocupación sin visualizar frente a sí mismo las formas políticas adecuadas para darse una alternativa de clase frente a la crisis y a la sociedad toda.¹⁷

En estas condiciones los trabajadores han enfrentado esta nueva etapa de su vida gremial, con las limitaciones impuestas por el Estado y el aparato burocrático. Intentamos aquí trazar en una breve síntesis algunos lineamientos políticos conclusivos, un balance preliminar de esta reorganización sindical. Tal vez resulten prematuros, o incompletos, ya que no hemos contemplado por falta de información los cambios operados en las organizaciones de primer grado a nivel regional que parecen destinadas a jugar un rol importante, y la normalización aún no ha conluido. Pero aún con este grado de provisoriedad creemos que hay algunos rasgos definidos que han de proyectarse con fuerza propia en los escenarios futuros de la crisis social y política argentina.

- La crisis del peronismo, expresada en el plano de la lucha de clases por la ruptura entre su base obrera y su dirección burguesa-burocrática, insinuada ya en 1975 y agudizada por el resultado electoral del 30 de octubre de 1983, ha puesto en cuestionamiento la identidad política de los trabajadores. Esta crisis de identidad no ha de resolverse en una violenta desperonización ni en una brusca ruptura con su pasado político inmediato, pero es indudable que incide e incidirá cada vez más en su comportamiento como sujeto político colectivo. Y estas elecciones no han escapado a esta realidad ni a esta tendencia.

¹⁷ Lucita, Eduardo, "La Instancia Democrática", mimeo., Buenos Aires, diciembre 1983.

- La crisis global que afecta a la sociedad argentina, en el marco de la crisis del capitalismo a escala mundial, va recortando cada vez con mayor intensidad los espacios para la conciliación de clases y los manejos y manipulación ideológica, al mismo tiempo que desnuda la creciente incapacidad de la vieja dirigencia obrera para conducir a los trabajadores en las condiciones impuestas por la irrupción de las formas democráticas de gobierno a partir del 10 de diciembre de 1983.
- En el corto plazo, y montada sobre la crisis económica y la incapacidad del gobierno radical para administrarla, no es de descartar que la burocracia recupere terreno e iniciativa (recomposición de la CGT, de las “62 Organizaciones”, y un nuevo Plan de Lucha). Pero en la medida en que permanezca vigente el régimen democrático representativo, que se estabilice aún en la inestabilidad de la crisis, se acentuará la democratización de la vida sindical argentina. La incorporación a la dinámica interna de las organizaciones gemiales de cuotas crecientes de democracia y participación social ha de significar para la vieja dirigencia sindical, estructurada sobre una base ideológica monolítica, verticalista en los procesos decisionales, autoritaria en sus manejos internos, serios riesgos de disgregación como conducción unitaria y tomará un nuevo impulso el movimiento de recuperación sindical y la construcción de una dirección de alternativa.
- El estallido de la estructura burocrática —su fragmentación interna con el correlato de proyectos diferenciados cuando no contrapuestos— ha abierto un espacio por el cual comenzará a expresarse en forma incipiente e inorgánica, aparentemente sin ningún tipo de programa o proyecto definido, lo que podría definirse como una corriente (resultante a su vez de la confluencia de viejas y nuevas tendencias) orientada hacia la constitución de esa dirección de alternativa, que irá ganando terreno en la sociedad sobre la base de definiciones democráticas, combativas y antiburocráticas, que en términos generales tiende a expresar con mayor intensidad y perspectiva de clase esa nueva síntesis de unidad social de los trabajadores argentinos que es el pluralismo político.
- Sin embargo, la consolidación y afianzamiento de esta corriente obrera, capaz de autoconvocarse a nivel de dirigentes y convocar a los trabajadores a nivel de las bases, estará supeditada al desarrollo y control de los tiempos políticos de la crisis por un lado, y

a la resolución de la problemática interna de las diferentes organizaciones gremiales recuperadas.

Este último aspecto, que a no dudarlo cumplirá un rol destacado en la futura reorganización democrática, no incluye solamente la selección y el recambio de los dirigentes. Será necesario reconstruir los aparatos administrativos, jurídicos y financieros; recrear los cuerpos orgánicos de la vida gremial; establecer una nueva dinámica de relaciones entre direcciones y bases; formar los cuadros intermedios, consolidar y apoyar los Cuerpos de Delegados y Comisiones Internas, toda una gama de tareas que tienden más que a justificar una representatividad a legitimar a las nuevas conducciones antiburocráticas surgidas de estas elecciones sindicales.

- Un primer paso en este sentido ha de ser el proceso ya iniciado de selección y elección de varias decenas de miles de representantes de base, en el corazón mismo de las unidades de producción donde el enfrentamiento obrero/patronal es más concreto y donde las relaciones entre el capital y el trabajo son más transparentes y no aparecen mediatizadas por los instrumentos de dominación ideológica del aparato estatal. Es aquí donde reside la fuerza real del sindicalismo, y de donde hay que partir para reconstruir los lazos de legitimidad entre bases y direcciones.¹⁸
- Sin embargo, aquella extensión del pluralismo político que hemos señalado, al mismo tiempo que impulsará la unidad y recomposición social de los trabajadores, hará aflorar las tendencias de

¹⁸ Esto nos remite a los niveles organizativos de la clase obrera, que se diferencian entre sí en la medida que abarcan fracciones cada vez más amplias de la clase, y también por los objetivos que se proponen.

Se puede distinguir un primer nivel de 'organización gremial' que expresa la lucha económica entre fracciones gremiales de la clase obrera y fracciones identificadas con la burguesía. Un segundo nivel está dado por la 'organización corporativa' que tiende a unificar las luchas económicas de la clase contra el conjunto patronal.

La interrelación de estos dos niveles reproduce sistemáticamente la coexistencia de enfrentamientos radicales, netamente clasistas, en el seno de las unidades de producción, con enfrentamientos no frontales, no clasistas, mediatizados frente al Estado y a las clases que éste representa.

La ruptura de esta combinación nos ubica en el tercer nivel de organización. El de la 'organización política' que tiende a reflejar la conciencia de clase, englobando la lucha económica en un claro contenido anticapitalista, pero eso ya escapa al contenido de este artículo.

los distintos partidos poniendo así en juego la capacidad de las nuevas direcciones, por lo general jóvenes y escasas de experiencia.

La amalgama y homogeneización de las diferentes corrientes políticas e ideológicas. Ponerse de acuerdo sobre los desacuerdos, y sobre esta base reconstruir la unidad social de los trabajadores en función de sus intereses de clase será un desafío a enfrentar en el futuro inmediato.¹⁹

- La presencia de listas opositoras en mayor número que en cualquier otro periodo anterior ha ido acompañada de la aparición de un numeroso activismo independiente sin gran experiencia, que más allá de su identidad política busca nuevas formas y canales de expresión para su militancia gremial. A diferencia de la “rebelión de las bases” de los años '60, en que los dirigentes y activistas surgían al calor del enfrentamiento antiburocrático, los actuales son producto de la democratización de la vida social y política argentina. Encauzar estas fuerzas en un sentido antipatronal y antiburocrático y de independencia frente al Estado, sobre la base de la unidad de clase, será una tarea que cubrirá buena parte de la etapa que se inicia.
- En síntesis esta confluencia de fuerzas y tendencias sociales, que se expresa en bases peronistas que cooptan en los niveles de conducción a dirigentes no peronistas, y activistas de izquierda capaces de llevar al frente de sus organizaciones gremiales a dirigentes peronistas, la que es capaz de representar el/o los niveles de la clase, en la medida en que expresa una suerte de síntesis de “populismo” y “clasismo” contenida por los trabajadores argentinos.

Es esa síntesis de unidad social de la clase que hoy ha hecho irrupción en la mayoría de las listas opositoras, la que constituye los cimientos de un sindicalismo no amarillo ni apolítico, pero sí apartidista, que da muestras de querer romper con viejos métodos y

¹⁹ La continuidad de la Lista Naranja en ATSA-capital, ganadora de las elecciones luego anuladas por el Ministerio de Trabajo, y finalmente postergadas para el 31 de julio próximo, que muestra en su composición todo el abanico de tendencias (“25”, PC, MAS., izquierda independiente) que ya lleva diez meses largos de enfrentamientos antiburocráticos y de resolución de los conflictos internos sobre la base del consenso y el respeto mutuos es tal vez un ejemplo concreto de como enfrentar estos desafíos y de formas de convivencia pluralista.

concepciones economicistas y que buscará formas de expresión orgánica.

En los escenarios futuros de la crisis argentina es donde los trabajadores jugarán su perspectiva democrática, avanzando en la hegemonía en la sociedad, democratizando la vida interna en las fábricas y lugares de trabajo, impulsando una política de participación que tienda a ocupar y recuperar los espacios perdidos.

La ampliación y consolidación de las perspectivas abiertas en esta etapa dependerán en gran parte de que los trabajadores avancen en su autorganización democrática y su independencia de clase, si son capaces de elaborar y presentarle a la sociedad su propio proyecto alternativo para enfrentar la crisis, y sobre todo si logran enlazar su lucha contra la explotación capitalista con una propuesta política democrática. Así será posible enfrentar este presente angustioso y construir un futuro esperanzado, con los trabajadores como protagonistas.

Buenos Aires, abril de 1985.

INDICE DE SIGLAS

- FEC - Federación Empleados de Comercio.
- FATSA - Federación Argentina de Trabajadores de La Sanidad.
- FGPICA - Federación Gremial Personal de la Industria de la Carne Argentina.
- FATLyF - Federación Argentina de Trabajadores de Luz y Fuerza.
- FSUPE - Federación Sindicatos Unicos Petroleros del Estado.
- FOECyT - Federación Obreros y Empleados de Correos y Telecomunicaciones.
- FOETRA - Federación Obreros y Empleados Telefónicos de la República Argentina.
- FTIA - Federación Trabajadores de la Industria de la Alimentación.
- FATRE - Federación Argentina de Trabajadores Rurales y Estibadores.
- FUVA - Federación Unica de Viajantes de la Argentina.
- FOEVA - Federación Obreros y Empleados Vitivinícolas y Afines.
- FEIPCQyA - Federación Empleados de la Industria del Papel, Cartones, Químicos y Afines.

- FNTCyOTAC** - Federación Nacional de Trabajadores Camioneros y otros Transportes Automotores de Cargas.
- FTOSN** - Federación Trabajadores de Obras Sanitarias de la Nación.
- FTER** - Federación Trabajadores de Edificios de Renta.
- FAPPyA** - Federación Argentina de Panaderos, Pasteleros y Afines.
- FTIC** - Federación Trabajadores de la Industria del Cuero.
- FTIQ y P** - Federación de la Industria Química y Petroquímica.
- FOCRA** - Federación Obrera Ceramista de la República Argentina.
- FATFA** - Federación Argentina de Trabajadores de Farmacia.
- FOCyA** - Federación Obrera de Trabajadores de Tabaco de la República Argentina.
- FTTRA** - Federación Trabajadores del Tabaco de la República Argentina.
- FSPP** - Federación Sindical de Petroleros Privados.
- SOPCPyA** - Federación Obreros Pasteleros, Confiteros, Pizzeros y Afines.
- FONPyP** - Federación Obrera Nacional de Peluqueros y Peinadores.
- FOMA** - Federación Obrera Mosaista Argentina.
- FOyEIAyA** - Federación Obreros y Empleados de la Industria Aceitera y Afines.
- A.B.** - Asociación Bancaria.
- ATE** - Asociación Trabajadores del Estado.
- AOT** - Asociación Obrera Textil.
- AOMA** - Asociación Obrera Minera Argentina.
- ASIMRA** - Asociación Supervisores Metalúrgicos de la República Argentina.
- AVIC** - Asociación Viajantes de Industria y Comercio.
- ATILRA** - Asociación Trabajadores de la Industria Lechera de la República Argentina.
- AATRA** - Asociación Argentina de Telegrafistas, Radiotelegrafistas y Afines.
- AAA** - Asociación Argentina de Actores.
- APBA** - Asociación Periodistas de Bs. As.
- APOPS** - Asociación Personal de Obras Previsionales y Sociales.
- UOM** - Unión Obrera Metalúrgica de la República Argentina.
- UOCRA** - Unión Obrera de la Construcción de la República Argentina.
- UPCN** - Unión del Personal Civil de la Nación.
- UDA** - Unión Docentes Argentinos.
- UF** - Unión Ferroviaria.
- UTGRA** - Unión Trabajadores Gastronómicos de la República Argentina.
- UOyEM** - Unión Obreros y Empleados Municipales.
- UTEDyC** - Unión Trabajadores de Entidades Deportivas y Civiles.
- UTA** - Unión Tranviaria Argentina.
- UOIM** - Unión Obrera de la Industria Maderera.
- UOyEP** - Unión Obreros y Empleados Plásticos.
- UTIC** - Unión Trabajadores de la Industria del Calzado.
- UOMA** - Unión Obrera Molinera Argentina.
- URGA** - Unión Recibidores de Granos de la República Argentina.

- UEJN - Unión Empleados Judiciales de la Nación.
- SMATA - Sindicato Mecánicos y Afines del Transporte Automotor.
- SCT - Sindicato Conductores de Taxis.
- SEITYA. - Sindicato Empleados de la Industria Textil y Afines.
- sds - Sindicato del Seguro.
- SUPA - Sindicato Unico Petroleros Argentinos.
- SUET - Sindicato Unico Empleados del Tabaco.
- SOMU - Sindicato Obreros Marítimos Unidos.

- SOC - Sindicato Obreros del Caucho.
- SOEME - Sindicato Obreros y Empleados de la Minoridad y Educación.
- SUTEP - Sindicato Unico de Espectáculos Públicos.
- SCA - Sindicato Gráfico Argentino.
- SUP - Sindicato Unico de la Publicidad.
- SUTIAGA - Sindicato Unico de Trabajadores de la industria de Aguas Gaseosas.
- SOIVA - Sindicato Obreros de la Industria del Vidrio.
- SEEN - Sindicato Electricistas y Electrocionistas Navales.
- SAT - Sindicato Argentino de Televisión.
- CTERA - Confederación de Trabajadores de la Educación de la República Argentina.
- C.G.T. - Confederación General del Trabajo.
- AFL.-CIO - American Federation of Labor Congress Industrial Organization.
- CMT - Confederación Mundial del Trabajo.
- CLAT - Central Latinoamericana de Trabajadores.
- CIOLS - Confederación Internacional de Organizaciones Sindicales Libres.
- ORIT - Organización Regional Interamericana del Trabajo.
- FSM - Federación Sindical Mundial.

BIBLIOGRAFÍA

NOTAS BIBLIOGRAFICAS

- Delich, Francisco, "Después del Diluvio la Clase Obrera", en *Argentina Hoy*, Siglo XXI, México, 1982.
- Delich, Francisco, "Desmovilización Social, Restructuración Obrera y Cambio Sindical", en *Crítica y Utopía*, núm. 6, marzo 1982.
- Torre, Juan, C., *Los sindicatos en el gobierno, 1973-1976*, CEDAL, núm. 30, 1983.

- Abós, Alvaro, *Las organizaciones sindicales y el poder militar (1976-1983)*, CEDAL, núm. 60, 1984.
- Godio, Julio, *El debate sindical internacional*, CEDAL, núm. 71, 1984
- Fernández, Arturo, "Reflexiones Sociológicas Sobre la Historia Sindial Argentina" en Techint - Boletín Informativo no. 223 - abril/junio 1984.
- Pegoraro, Juan, "Los Conflictos Laborales, 1973-1976", en *Cuadernos de Marcha*, núm. 2 México, julio-agosto 1979.
- Balvé, B., Mariconi, E. Lubliner, E. y Witt, M. "Los asalariados. Composición social y orientaciones organizativas. Materiales para su Estudio" Cuadernos de CICSO. 1975.
- Lucita, Eduardo, "La Instancia Democrática", mimeo, Buenos Aires, diciembre 1983.
- Lucita, Eduardo, "Consideraciones en Torno a la Reorganización del Movimiento Social y un Proyecto Alternativo", en *Cuadernos del Sur*, núm. 1, 1985.
- Japaz, Jorge, "Los 100 Días", mimeo, Mendoza,
- Monge, J. y Romano, N., "La oligarquía financiera nativa en el poder (un nuevo ciclo histórico y un nuevo modelo de acumulación)", mimeo, Buenos Aires, 1978.
- Marshall, Adriana, "El mercado de trabajo en el capitalismo periférico. El caso de Argentina". Cuadernos del PISPAL, El Colegio de México - 1981.
- Diéguez, H. y Gerchunoff, P., "La dinámica del mercado laboral urbano en Argentina, 1976-1981" en *Desarrollo Económico*, núm. 93, abril-junio 1984.
- Candia, José M. "Argentina: proceso militar y clase obrera", de próxima edición por Editorial Tierra del Fuego.
- Instituto Nacional de Estadísticas y Censo, "La Industria Manufacturera 1976-1981".
- "Informes Laborales" de DIL - Documentación e Información Laboral, núms. 218 a 223.
- Revista *Informe Industrial*, núms. 77 y 78, sept/octubre y nov./diciembre 1984.
- Diarios *Clarín* y *La Razón*; periódicos *Qué Pasa*; *Solidaridad Socialista* y *Prensa Obrera*.

GREMIOS SELECCIONADOS								
Fecha	Gremio	Empadronados	VOTANTES		Listas	RESULTADOS		% s/Padrón
			No.	%		Votos	%	
10/10	S.M.A.T.A. Nacional	54.000	43.200	69.7	Verde	21.623	50.1	41- Radicales
					Az. y Blanca	18.656	43.2	
					Naranja	3.000	7	
	Sec. Bs. As.	s/d	21.217		Verde	12.479	58.8	
					Az. y Blanca	6.637	32.0	
					Naranja	2.101	9.9	
	Córdoba	s/d	3.842		Az. y Blanca	1.533	39.9	
					Morada, BL.	1.288	33.5	
					Celeste (Verde)	819	21.3	
					Naranja	202	5.3	
26/11	U.O.M. Nacional	287.000	s/p		Miguelismo	159		Electores ..
					Guerrerismo	63		
					Calabrocismo	24		
	Sec. Cap. Sec. Avel.	46.304 33.544	33.401 22.481	72.1 67.0	Antiburocrat.	36		
					UNICA	33.401		
	Sec. Matanza	26.636	8.487	31.8	UNICA	s/d		
					Azul	3933	46.5	
					Celeste	2619	30.9	
					Cel. y BL.	1915	22.6	

SECTOR PRIVADO INDUSTRIA								
"25" - PC - PI			14 Seccionales - 3 delegaciones					
CGYT - Rad.,			19 Seccionales - 7 delegaciones					
Ex Marrón - MAS - PO								
Por Grandes Fábricas								
Gran Bs. As.				Córdoba				
	V	A/B	N		V	M/B	C	N
Ford	296	2047	1.399	Renault	808	688	361	104
Mercedes	399	574	128	Perdriel	108	65	9	18
VW - SJ	1171	131	99	Transax	24	78	145	5
VW - M.Ch.	35%	40%	25%	THOMS/RAMCO	84	118	5	15
DEUTZ	80%	20%		ILASA N.	62	40	93	5
ELECCION INDIRECTA - 282 Electores								
"62"			38 Seccionales					
CGYT			14 "					
			3					
			8					
Otros Seccionales Importantes								
	Quilmes		Campana	Villa Constitución				
Naranja	2.313			Marrón	4144			
Celeste	720		s/d	Az., Blanca	529			
Cel. y Blanca	540							

GREMIOS SELECCIONADOS								
Fecha	Gremio	Empadronados	VOTANTES		Listas	RESULTADOS		% s/Padrón
			No.	%		Votos	%	
7/12	S.G.A Cap. y G Bs. As.	18.890	8.808	46.6	verde azul violeta	4.875 2.287 1.646	55.3 26.0 18.7	25.8
28/12	S.T.I.A Nacional	16.200	8.004	49.4	Verde-Azul Cel. y Blanca violeta Blanca	2.904 2.422 1.874 715 89	36.3 33.0 23.4 8.9	17.9 anulados en blanco
11/4/85	U.O.C.R.A. Nacional	114.000	44.348	38.9	Blanca azul marrón naranja	18.169 13.109 8.578 4.492	40.9 29.6 19.3 10.1	15.9
	Secc. Capital	11.200	3.325	29.7	Blanca azul marrón naranja	2.299 550 230 246	69.1 16.5 6.9 7.4	20.5

SECTOR PRIVADO - INDUSTRIA							
pluralista - per - PI. -izq. MAS. PO. "62" "25". PC.							
Principales Talleres							
	Atlántida	Abril	Ciccone	Crónica	Clarín	La Nación	F. Financ.
verde	261	158	118	68	246	121	35
azul	7	8	1	56	25	9	175
violeta	17	125	31	16	22	27	80
"62" "25" PC - PI Per - MAS. "62"							
Principales Establecimientos							
	Suchard.	Bagley	Terrabusi	Canale	Noel	•	
	s/d	s/d	s/d	s/d	s/d		
CGT - "25" - "62" MAS - Per Revol - Indep.							
Otras Seccionales Inportantes							
	La Plata	Misiones	Corrientes	Neuquén	San Martín		
Blanca	227	275	194	150	130		
Azul	366	—	135	211	513		
Marrón	180	313	1.800	36	35		
Naranja	576	70	31	680	200		
Verde	—	941	—				

GREMIOS SELECCIONADOS								
Fecha	Gremio	Empadronados	VOTANTES		Listas	RESULTADOS		% s/Padrón
			No.			Votos	%	
31/10	Seguros Nacional	26.006	18.710	71.9	Cel. y BL. verde naranja	10.207	54.6	39.2
						7.604	40.6	
						899	4.8	
31/10	A.P.B.A. Cap.	4.700	3.112	66.2	tricolor Az. y Bl. verde Coprepren	1.355	43.5	28.8
						1.017	32.7	
						556	17.9	
12/12	U.T.A. Nacional	57.790	33.853	58.6	Cel. y BL. Violeta Az. y Amarilla Blanca verde	165	5.3	20.1 en blanco anulados
						11.595	34.3	
						1.938	5.7	
						6.414	18.9	
						10.038	29.7	
13/12	Bancarios Capital	77.039	46.665	60.6	1- Blanca 3- Marrón-Verde 5- Morada 7- Naranja 11- Granate	3.332	9.8	17.0 anulados blanco
						536		
						11.582	24.8	
						6.245	13.4	
						13.131	28.1	
						1.068	2.2	
						12.800	27.4	
						1.819		

SECTOR PRIVADO - SERVICIOS	
per. rad. indp. pluralista (per. PI. Rad. Soc.) MAS.	
pluralista P.C. "62" P.O.	Agrp. per. "7 de Junio" llamó a la abstención Agrp. per. "R. Walsh" libertad de acción.
"62" "62" (per. y rad.) "62" "62" responde a Herminio Iglesias pluralista (per. rad. PI. MAS. P.O.) apoyo "25"	
Rad. (MNR) Per., Soc. Dem. Apoyo "62" y "25" P.I. - MAS Rad. (coordinadora) Per. - PC. P.O. Rad. Per. - Desarr. - P.S.P.	

GREMIOS SELECCIONADOS								
Fecha	Gremio	Empadronados	VOTANTES		Listas	RESULTADOS		% s/Padrón
			No.			Votos	%	
31/10	Seguros Nacional	26.006	18.710	71.9	Cel. y BL. verde naranja	10.207 7.604 899	54.6 40.6 4.8	39.2
31/10	A.P.B.A. Cap.	4.700	3.112	66.2	tricolor Az. y Bl. verde Coprepren	1.355 1.017 556 165	43.5 32.7 17.9 5.3	28.8
12/12	U.T.A. Nacional	57.790	33.853	58.6	Cel. y BL. Violeta Az. y Amarilla Blanca verde	11.595 1.938 6.414 10.038 3.332 536	34.3 5.7 18.9 29.7 9.8	20.1 en blanco anulados
13/12	Bancarios Capital	77.039	46.665	60.6	1- Blanca 3- Marrón-Verde 5- Morada 7- Naranja 11- Granate	11.582 6.245 13.131 1.088 12.800 1.819	24.8 13.4 28.1 2.2 27.4 anulados blanco	17.0

SECTOR PRIVADO - SERVICIOS	
per. rad. indp. pluralista (per. PI. Rad. Soc.) MAS.	
pluralista P.C. "62" P.O.	Agrp. per. "7 de Junio" llamó a la abstención Agrp. per. "R. Walsh" libertad de acción.
"62" "62" (per. y rad.) "62" "62" responde a Herminio Iglesias pluralista (per. rad. PI. MAS. P.O.) apoyo "25"	
Rad. (MNR) Per., Soc. Dem. Apoyo "62" y "25" P.I. - MAS Rad. (coordinadora) Per. - PC. P.O. Rad. Per. - Desarr. - P.S.P.	

GREMIOS SELECCIONADOS								
Fecha	Gremio	Empadronados	VOTANTES		Listas	RESULTADOS		% s/Padrón
			No.	%		Votos	%	
6/11	A.T.E. Nacional	85.927	47.581	55.4	verde Azul y Blanca	23.244 17.635 6.702	48.2 37.1	27 anulados
	Secc. Capital	8.428	5.033	59.7	verde Azul y Blanca	3.957 1.014 62	78.6 20.1	46.9 anulados
12/11	S.U.P.E. Nacional	40.000 (13.500 jubilados)	21.589	54	celeste Azul	12.344 9.241	57.2 42.8	30.9
	Luz y Fuerza Gsp. y GBs. As.	18.500	16.155	87.3	marrón verde Blanca rosa celeste	7.484 5.612 1.434 977 648	46.3 34.7 8.9 6.0 4.0	40.5
	FOETRA Capital	20.000	13.205	66.0	marrón Celeste y BL. gris naranja azul	8.080 2.896 1.324 400 460 48	61.2 21.9 10.0 3.0 3.5	anulados

* Fuente: Elaboración propia según información proporcionada por los propios Sindicatos, o bien de informaciones periodísticas.

SECTOR PUBLICO						
pluralista (peronismo, radicales, comunistas, intransigentes, socialistas) apoyo de los "25" peronismo, colaboracionismo						
Otras seccionales importantes						
	S. Juan	Mendoza	Ensenda	Entre Rios	Sta. Rosa	V. Maria
verde	3.528	1.375	770	956	1.188	467
A/B	773	1.589	952	1.020	621	148
"62"						
MNRS - pluralista		22 seccionales 1 seccional		Otras seccionales importantes		
			Capital	Con. Riv.	Mendoza	Ensenada
		Celeste	1.568	1.027	2.206	2.108
		Azul	1.345	1.383	1.510	1.513
		Otras			313	
CGyT peron. - Rad. - (Taccone) per, Rad. soc, intransigentes social - MNRS MAS — Per - Rev.						
Pluralistas (per, Rad, pc, intr, Soc.) Ganó en todas las reparticiones salvo en una "62" CGyT. P.O MAS.						

CUADRO 1
Normalización Sindical
Organizaciones Gremiales que envían 5 o más delegados al Congreso de C.G.T.*

Gremio	Actividad	No. de Afiliados- **	Delegados en C.G.T.		Titular	Agrupamiento
			al Congreso	al C.C.C.		
F.E.C.	Comercio	450.000	145	3	s/n	"62 Org." per. s/n
F.A.T.S.A.	Sanidad	98.000	32	3		"62 Org." per. C.G. y T.
F.G.P.I.C.A.	Carne	83.000	28	3	L. Romero	"62 Org." per. Independientes
F.A.T.L. y F.	Luz y Fuerza	58.000	19	3	A Serrano	No encuadrado
F.S.U.P.E.	Petroleros	45.000	16	3	D. Ibáñez	"62 Org." per. s/n
F.O.E.C. y T.	Correos	42.000	14	2	A. Baldassini	No alineados
F.O.E.T.R.A.	Telefónicos	40.000	13	2	J. Guillán	Com. Nac. "25"
F.T.I.A.	Alimentación	40.000	13	2	L. Moran	Com. Nac. "25" C.G. y T.
F.A.T.R.E.	Rurales	25.000	8	2	A. Rodríguez	"62 Org." per. "
F.U.V.A	Viajantes	24.000	6	2	H. Diz Rey	
F.O.E.V.A.	Vitivinícolas	20.000	6	2	O. Moreira	
F.E.I.P.C.Q y A.	Papeleros	18.000	6	2	F. Donaires	
F.N.T.C. y O.T.A.C.	Camioneros	23.700	6	2	R. Pérez	
F.T.O.S.N.	Obras Sanitarias	17.000	5	2	R. Pereyra	
F.T.E.R	Edif. de Renta	16.400	5	2	O. Villafañe	
F.A.P.P. y A.	Panaderos	13.200	5	2	R. Ibarguren	

Federaciones

Continúa Cuadro 1

Federaciones	S.O.I.V.A.	Vidrio	13.000	5	2	J. Luján	Com. de los "20"
	F.T.I.C.	Cuero	10.500	5	2	I. Negrete	Independientes
	F.T.I.Q. y P.	Químicos	10.200	5	2	R. Valle	s/d
	F.O.C.R.A.	Ceramistas	8.000	5	1	C. Luna	"62 Org." per.
	F.A.T.F.A.	Farmacia	6.300	5	1	M. Reyes	Com. Nac. "25"
	F.O.C. y A.	Cerveceros	6.000	5	1	J. Barilache	"62 Org." per.
	F.T.T.R.A.	Tabaco	6.000	5	1	F. Lara Cono	Com. Nac. "25"
	F.S.P.P.	Petroleros	6.000	5	1	M. Alvarez	"62 Org." per.
	S.O.P.C.P. y A.	Pasteleros	5.500	5	1	A. Maldonado	Com. Nac. "25"
	F.O.N.P. y P.	Peluqueros	5.400	5	1	A. Hernández	"62 Org." per.
Asociaciones	F.O.M.A.	Mosaistas	5.100	5	1	A. Gasparri	s/d
	F.O. y E.I.A y A.	Aceiteros	8.000	5	1	A. Gaetani	s/d
	As. Banc.	Bancarios	155.320	55	3	N. Zanola	No encuadrado
	A.T.E.	Estatales	85.927	27	3	V. de Gennaro	Com. Nac. "25"
	A.O.T.	Textiles	68.000	22	3	P. Goyeneche	C.G. y T.
	A.O.M.A.	Mineros	20.000	6	2	C. Cabrera	Com. Nac. "25"
	A.S.I.M.R.A.	Superv. Metal	19.500	6	2	G. Díaz Oliveri	"62 Org." per.
	A.V.I.C.	Viajantes de Com	17.000	6	2	A. Estévez	Com. Nac. "25"
	A.T.I.L.R.A.	Lecheros	17.000	6	2	O. Troncoso	Independientes
	A.A.T.R.A.	Telegrafistas	10.500	5	2	J. Prado	"
Uniones	A.A.A.	Actores	5.000	5	1	O. Lovero	No encuadrado
	U.O.M.	Metalúrgicos	287.000	88	3	L. Miguel	"62 Org." per.
	U.O.C.R.A.	Construcción	114.000	85	3	A. Farias	"
	U.P.C.N.	Estatales	133.000	50	3	M. Candore	C.G. y T.
	U.D.A.	Docentes	89.000	33	3	M. Solinano	Independientes
	U.F.	Ferrovianos	142.345	58	3	R. Zárate	Com. Nac. "25"
	U.T.G.R.A.	Gastronómicos	80.000	27	3	s/n	s/n

Continúa Cuadro 1

Uniones							
U.O. y E.M.	Municipales	65.000	21	3	P. Datarmine	"62 Org." per.	
U.T.E.D. y C.	Entid. deport	60.000	20	3	V. Dileo	"	
U.T.A.	Tranviarios	60.000	20	3	J. Palacios		
U.O.I.M.	Madereros	33.000	11	2	A. Petrucci	C.G. y T.	
U.O. y E.P.	Plásticos	20.000	6	2	N. Brun	"62 Org." per.	
U.T.I.C.	Calzado	20.000	6	2	A. Marcuse	Com. de los "20"	
U.O.M.A.	Molineros	10.000	5	2	R. Soberano	"62 Org." per.	
U.R.G. y A.	Rec. de granos	8.000	5	1	J. Amar		
Sindicatos							
S.M.A.T.A.	Mecánicos	54.000	20	3	J. Rodríguez	Com. Nac. "25"	
S.C.T.	Taxistas	50.000	20	3	R. García	"	
S.E.I.T. y A.	Empl. textiles	30.000	10	2	R. Amono	"62 Org." per.	
S.d.S.	Seguros	26.000	8	2	R. Valle	No encuadrado	
La fraternidad	Maq. ferroviarios	22.000	8	2	L. Etchezar	Independientes	
S.U.P.A.	Portuarios	22.000	7	2	C. Loza	"62 Org." per.	
S.U.E.T.	Tabaco	15.000	6	1	R. Digón	Com. Nac. "25"	
S.O.M.U.	Marítimos	13.200	5	2	J. Pascual	"62 Org." per.	
S.O.C.	Caucho	10.600	5	2	O. Borda	Com. Nac. "25"	
S.O.E.M.E.	Min. y Educación	10.100	5	2	J. Contreras	"62 Org." per.	
S.U.T.E.P.	Espect. públicos	6.000	5	1	P. Álvarez	Independientes	

Fuente: Elaboración propia

** Los datos sobre afiliaciones no están disponibles en el Min. de Trabajo, los que aquí se exponen han sido tomados de artículos periodísticos o bien directamente en los Sindicatos. — Su confiabilidad es relativa.

De 500 a 2000	afiliados	1 Delegado
" 2001 a 5000	"	2 "
" 5001 a 15000	"	5
Más de 15000		1 Delegado c/3000 o fracción mayor de 2000

•El listado es incompleto

CUADRO 2
Agrupamientos Político-Sindicales*
por sector económico y por tipo de actividad

Agrupamientos	Actividad	SECTOR ECONOMICO			ACTIVIDAD		Observaciones
		Público	Privado	Productiva	De ser- vicios		
"62 Organizac." peronistas (m i g u e l i s m o)							
F.G.P.I.C.	Carne		x	x			Seccionales importantes del Cordon Industrial respon- den a Gestión y Trabajo, en tanto que 8 sec. son decidi- damente antiburocráticas y clasistas.
U.O.M.	Metalúrgicos		x	x			
U.O. y E.M.	Municipales	x			x		
S.U.P.E. (estatales)	Petróleos	x		x			
S.U.P.A.	Portuarios		x		x		
S.O.M.U.	Marítimas		x				
S.O. y E.I.M.	Madereros		x	x			
S.T.I.A.	Alimentación		x	x			
U.R.G.A.	Rec. de grano		x		x		
U.T.A.	Tranviarios		⊗		x		
S.U.T.E.R y H.	Edificios		x			x	La lista violeta (clasista) obtuvo casi el 10 % de votos y ganó en subterráneos de Bs.As. y en media docena de líneas
No Alineados							
U.T.C. y D.R.A.	Carga y Descarga		x			x	
F.U.V.A.	Viajantes		x			x	

Continúa Cuadro 2

Comisión Nac. de los "25"				19 Secc. responden a Gestión y Trabajo. En la Secc. Bs. As. La Lista naranja obtuvo el 10% de los votos. Las listas clasistas tienen importante representación en numerosas seccionales. La lista azul y blanco (participacionalista) ganó en 21 Secc. En mayo se normalizarán las 16 Seccs. restantes.	
S.M.A.T.A.	Mecánicos				
U.F.	Ferrovianos	x		x	x
A.T.E.	Estatales	x			(x)
S.T.G. del E.	Gas del estado	x			x
S.C. Taxis	Taxistas		x		x
S.U.E.T. (empleados)	Tabaco		x	x	
A.O.M.A.	Mineras		(x)	x	
S.Ch.C. y A.	Camioneros		x		x
S.O.C.	Caucho		x	x	
F.A.T.F.A.	Farmacia		x		x
^a					
No Encuadrados					
A.B.	Bancarios		(x)		x
S.d.S.	Seguros		x		x
U.O.C.R.A.	Construcción		x	x	
S.U.P.	Publicidad		x		x
S.G.A.	Gráficos		x	x	
F.O.E.T.R.A.	Teléfonos	x			x
A.P.B.A.	Periodistas		x		x
A.P.O.P.S.	Previsionales	x			x
U.E.J.N.	Judiciales	x			x
C.T.E.R.A.	Docentes	(x)			x
U.D.A.	Docentes	(x)			x

* Incluye solamente a las organizaciones gremiales de mayor peso político y corporativo.

** Las cruces circunvaladas indican que el gremio participa de las dos actividades o sector económico. En estos casos la ubicación en la columna indica el rasgo predominante

Fuente: elaboración propia.



Continuidad y cambio en el movimiento sindical argentino

Hugo del Campo

1. En la historia del movimiento sindical argentino hay una inflexión evidente, que se produce hacia 1943-46.

Hasta entonces, éste no llegaba a reunir más que a una minoría de los asalariados. Sus organizaciones, independientes del Estado, eran más toleradas que reconocidas por el mismo. Dividido en corrientes ideológicas de origen europeo, sólo algunas de ellas estaban vinculadas con un partido político (comunista y, en forma más laxa, socialista), mientras que otras (anarquistas, “sindicalistas”¹) rechazaban por principio esa vinculación. El peso de ese movimiento obrero en la vida política nacional era mínimo.

Desde entonces, por el contrario, creció rápidamente hasta incorporar a la mayor parte de los trabajadores. Primero fue absorbido por el aparato estatal peronista y luego, aunque alternando entre el oficialismo y la oposición, se mantuvo siempre extremadamente conectado con el Estado, que ya no pudo desconocer su importancia ni aún durante los periodos en que lo proscribió. Encontró su identidad política, abrumadoramente mayoritaria, en el peronismo y, convertido en el eje de ese movimiento, desempeñó un papel siempre decisivo en la política nacional.

Pero esta inflexión ha sido magnificada y explicada de tal manera que parece que se tratara de dos movimientos sindicales diferentes, sin relación entre sí, separados por un súbito cataclismo donde desaparece sin dejar rastros todo el sindicalismo anterior y emerge de la nada uno absolutamente nuevo, sin vínculos con el pasado. Más que inaugurar una nueva etapa en el desarrollo de un mismo proceso, esos años marcarían entonces un corte radical que separaría dos fenómenos cualitativamente diferentes.

¹ Como la palabra tiene una acepción amplia —referente a la actividad sindical en general— y una restringida —relativa a los partidarios del “sindicalismo revolucionario” o “anarco-sindicalismo”—, la pondremos entre comillas cuando la usemos en el segundo sentido.

2. Hay dos explicaciones más o menos canónicas de ese corte que, aunque provengan de ópticas opuestas, coinciden en lo fundamental.

Según una, entre esos años apareció un sindicalismo nuevo, inspirado por Perón. “Nacional” y de orientación “humanista y cristiana” — por oposición al anterior, internacionalista y dominado por ideologías foráneas —, supo atraer a la masa de los trabajadores nativos, sobre todo a los recién llegados del interior, y generó espontáneamente sus propios dirigentes. Este nuevo sindicalismo, plenamente reconocido e institucionalizado durante el gobierno peronista, se convirtió desde entonces en la “columna vertebral” del movimiento.

Según la otra, lo que realmente ocurrió fue que los “auténticos” sindicatos fueron destruidos; sus dirigentes, perseguidos y encarcelados. El lugar de ambos fue ocupado por organizaciones y dirigentes creados desde el gobierno, y que se convirtieron en meros apéndices del mismo, dentro de un proyecto de corte fascista tendiente a implantar el control estatal sobre la clase trabajadora. El estado de “disponibilidad” de los migrantes internos, llegados a la ciudad y a la industria sin identidad política ni tradición sindical, permitió que la demagogia de Perón tuviera éxito y que se incorporaran en masa a los nuevos sindicatos.

Las dos versiones coinciden en que hubo un corte radical en el desarrollo del movimiento obrero; en que la presencia de una masa de trabajadores “nuevos” tuvo una influencia decisiva sobre el cambio de orientación; y en que la causa determinante de ese cambio fue Perón.

No se puede negar que esta interpretación, en sus dos variantes, refleja hechos reales. Pero los historiadores tenemos una desconfianza instintiva frente a esquemas tan simples. Pero los historiadores tenemos una desconfianza instintiva frente a esquemas tan simples; sospechamos que en todo proceso de cambio hay también elementos de continuidad, y que, por poderosa que sea la influencia de un personaje, éste no puede sino combinar de una manera nueva los materiales que encuentra dados en la realidad, y no crearlos de la nada.

Sin embargo, aunque la interpretación “catastrofista” ya había sido cuestionada hace más de diez años², no fue sino hasta fecha muy reciente que aparecieron los frutos de investigaciones más detalla-

² Miguel Murmis y Juan Carlos Portantiero. *Estudios sobre los orígenes del peronismo*. 1. Buenos Aires, Siglo XXI, 1971.

das que hoy permiten discutirla con mayor fundamento empírico³. Es sobre la base de esos nuevos aportes, que confirman en gran medida nuestras sospechas, que intentaré aquí sintetizar mis puntos de vista sobre el tema.

3. Por empezar, es un hecho comprobado que casi todos los dirigentes sindicales que apoyaron a Perón en su ascenso al poder eran ya dirigentes más o menos importantes antes de 1943. Un Cipriano Reyes, lejos de ser la norma, es más bien una excepción.

La mayoría de esos dirigentes tenía, por el contrario, una larga trayectoria sindical, como el presidente del Partido Laborista, Luis F. Gay —secretario de la Federación de Obreros y Empleados Telefónicos desde 1928—, o su rival Angel Borlenghi —que dirigía la Federación de Empleados de Comercio desde 1931—.

Muchos de ellos provenían, por otra parte, de las filas del Partido Socialista o de las organizaciones vinculadas con él, y los sindicalistas de esa tendencia que se mantuvieron fieles a la línea anti-peronista del partido fueron los menos. También en este caso, un Pérez Leirós es más bien la excepción que confirma la regla; la mayoría de los dirigentes sindicales socialistas se hicieron peronistas y aportaron los principales cuadros a esa nueva orientación.

El único grupo de sindicalistas que no sufrió diserciones importantes fue el que respondía al Partido Comunista.

4. Otro tanto puede decirse de las organizaciones sindicales.

Es cierto que las dirigidas por los comunistas fueron perseguidas y destruidas, y reemplazadas por sindicatos paralelos fomentados desde el gobierno (aunque algunos de ellos, como la Unión Obrera Metalúrgica o la Unión Obrera de la Construcción habían sido fundados inicialmente por socialistas opositores a la mayoría comunista de esos gremios).

Peor, del resto, una sola fue intervenida con la intención de cambiar sus dirigentes: la Unión de Obreros y Empleados Municipales, controlada por Pérez Leirós desde 1919. Los otros dos sindicatos intervenidos durante esos años —la Unión Ferroviaria y La Fraternidad— lo fueron antes de que Perón empezara a manejar a la política sindical, y él los devolvió rápidamente a sus autoridades anteriores.

³ En 1984 apareció la obra de Hiroshi Matsushita *Movimiento obrero argentino, 1930-45. Sus proyecciones en los orígenes del peronismo*. Buenos Aires. Siglo Veinte, y mi libro *Sindicalismo y peronismo. Los comienzos de un vínculo perdurable*. Buenos Aires. CLACSO. Aunque producto de investigaciones independientes y partiendo de diferentes hipótesis, ambos trabajos coinciden en algunos puntos claves.

Todos los demás sindicatos conservaron sus autoridades o las renovaron normalmente, y, de ellos, sólo dos organizaciones importantes no se hicieron peronistas: La Fraternidad —aunque después de algunas vacilaciones— y la Federación Gráfica Bonaerense. Sugestivamente, los dos gremios eran considerados como la “aristocracia obrera” de la época.

Pero esto no quiere decir, como pretende otro de los mitos relacionados con el tema, que hayan sido los sectores más sumergidos, desorganizados e inexpertos de la clase obrera los que siguieron a Perón.

Si nos atenemos a los hechos vemos que, por el contrario, el papel clave en la iniciación de una corriente sindical pro-peronista fue desempeñado por los ferroviarios: gremio relativamente privilegiado y, sin duda, el mejor organizado de la época, con una sólida tradición sindical y que era visto como guía y modelo por los demás. Y los que se le fueron sumando no eran menos tradicionales ni menos representativos del movimiento sindical de los años 30: tranviarios, estatales, empleados de comercio...

Los sindicatos nuevos —como la Federación Obrera Tucumana de la Industria Azucarera, o el autónomo de la carne— desempeñaron un papel importante en movilizaciones populares como la del 17 de octubre, pero las *estructuras* sindicales sobre las que se apoyó Perón fueron sustancialmente las mismas que existían en 1943, con los mismos dirigentes a la cabeza.

5. Podría pensarse que la renovación se produjo en la base de esas organizaciones, obligando a sus dirigentes a adecuarse a las demandas de una masa importante de nuevos afiliados. Pero eso tampoco ocurrió.

El aumento del número de trabajadores organizados entre los censos sindicales de 1941 y 1945 fue de un 20 %, porcentaje casi idéntico al que se dio entre 1936 y 1941 y que revela más bien un crecimiento continuo que una súbita irrupción.

Además, la mayor parte del aumento se registra en los sectores en que se fundaron nuevos sindicatos, de modo que la renovación de los tradicionales fue todavía menor. Y todos los sindicalistas de la época —por ejemplo, los entrevistados en el Proyecto Historia Oral del Instituto Di Tella— coinciden en afirmar que el ingreso masivo de los “cabecitas negras” en los sindicatos sólo se produjo después de 1946.

6. En suma, entonces, hoy se puede afirmar que el movimiento sindical que apoyó a Perón en su ascenso al poder fue esencialmente el mismo que existía en 1943. Pero ésta es, en todo caso, una consta-

tación, que investigaciones más detalladas podrán confirmar o desmentir. Resulta más difícil encontrar una explicación.

Para ello quizá deberíamos empezar por revisar la imagen habitual que tenemos del sindicalismo pre-peronista. Este estaría compuesto por obreros ideológicamente “esclarecidos” —es decir, más o menos revolucionarios—, democráticamente organizados, con dirigentes idealistas y abnegados y, sobre todo, muy celosos de la independencia de sus organizaciones frente al poder político.

Pero esta imagen, que resulta más o menos adecuada para reflejar el sindicalismo de 1915, tiene poco que ver con el que existía treinta años después. Porque entre esos años se habían ido desarrollando en el movimiento obrero una serie de tendencias que podemos resumir en tres; a la burocratización; al reformismo pragmático; a la vinculación con el poder político.

7. La primera es consecuencia casi inevitable del crecimiento de las organizaciones. Recordemos que la Unión Ferroviaria tenía alrededor de 100.000 afiliados y la CGT más de 300.000; organismos de esa magnitud ya no se pueden manejar por asamblea. Los cuerpos directivos adquieren un amplio margen de autonomía y, dentro de ellos, un grupo de dirigentes rentados y estables —que maneja los fondos y la prensa sindical— tiende a controlar el conjunto de la organización.

Por otra parte, el control de semejantes organismos significa poder. Entonces, no es extraño que esos dirigentes buscaran perpetuarse, tendieran a constituir una capa diferenciada del resto de los afiliados y a desarrollar intereses propios, el principal de los cuales sería mantener ese poder.

Para eso no dejarán de utilizar, sobre todo a partir de 1930, una serie de recursos que generalmente creemos más modernos; expulsión de opositores; manipulación de congresos; fraude en las elecciones; pedidos de intervención al gobierno e, incluso, la violencia física (como en la ocupación del local de la CGT en 1935 o en el tiroteo con que se impidió un hecho similar frente a la Unión Ferroviaria al año siguiente). Esos métodos, por cierto, no eran monopolio de ninguna tendencia en particular; si los “sindicalistas” postergaron la convocatoria del Congreso Constituyente de la CGT durante cinco años, los socialistas —que, utilizando ese argumento, los destituyeron mediante un “golpe de Estado”— retardaron a su vez la convocatoria del Comité Central Confederal —que estatutariamente debía reunirse cada cuatro meses— durante dos años y medio cuando las condiciones les parecieron desfavorable.

Por otra parte, si hasta entonces los enfrentamientos internos del movimiento obrero podía explicarse por motivos ideológicos, desde

el 30 es cada vez más difícil hacerlo. la división de la CGT en 1935 sólo responde parcialmente a las disidencias entre “sindicalistas” y socialistas detrás de eso está la puja entre dos facciones, dos grupos de dirigentes nucleados alrededor de dos caudillos sindicales — Tramonti y Domenech — cuyas relaciones con esas corrientes ideológicas son, por lo menos, ambiguas. Y en 1943 los que se disputan la dirección de la CGT y producen su división son dos afiliados socialistas. Los dirigentes sindicales ya no luchaban sólo por imponer sus ideas; luchaban también por el poder.

8. Ese papel decreciente del factor ideológico en el ámbito sindical se ve confirmado por la escasa diferencia entre la orientación de las dos tendencias mayoritarias: socialistas y “sindicalistas”. Ambas parecen coincidir, en la práctica, en lo que —a falta de una mejor definición— podemos llamar el “reformismo pragmático”, para distinguirlo a la vez del reformismo doctrinario de los socialistas y del simple economicismo.

El objetivo fundamental del movimiento obrero se fue limitando paulatinamente a la obtención de mejoras concretas e inmediatas, dejando en un segundo plano cada vez más olvidado la cuestión de los fines últimos —revolución o reforma de la sociedad—. Pero, al mismo tiempo, se desarrolló una conciencia cada vez más clara de que esas mejoras no dependían tanto de la confrontación económica directa con los patrones, sino que decisiones más generales del poder político y de la capacidad del movimiento sindical para presionar sobre el mismo.

Esta actitud predominante sobre todo en el interior de la corriente “sindicalista” y que ya se advierte en el programa mínimo de la CGT de 1931, terminó por teñir toda la ideología del movimiento obrero —con la excepción de los comunistas— durante la década del 30.

9. Y esto nos lleva a la última de las tres tendencias mencionadas. Para conseguir esas mejoras dependientes del poder político, o el reconocimiento necesario para poder gestionarlas legalmente, el movimiento sindical exhibirá una actitud cada vez más moderada frente al Estado; de no oposición e incluso de colaboración con todos los gobiernos. Recordemos, por ejemplo, que la única huelga general de la década, en 1936, no contó con el apoyo de la central.

A cambio de eso, la CGT y los sindicatos más importantes fueron obteniendo un reconocimiento creciente por parte del Estado; sus dirigentes tenían acceso fácil y frecuente al presidente, los ministros y otros altos funcionarios; participaban en comisiones mixtas, al lado de patrones y delegados estatales, como representantes de los trabajadores, etc.

Pero este reconocimiento implicaba también un cierto grado de control; no es casual que en 1936 se levante el primer censo de asociaciones profesionales. La intervención del Estado, que ya se había hecho rutinaria en los conflictos laborales, comenzaba también a manifestarse en el interior del ámbito sindical. Los dirigentes comunistas, por ejemplo, eran abiertamente discriminados en sus gestiones ante el Departamento Nacional del Trabajo, como lo serían más tarde en la Secretaría de Trabajo y Previsión. En cambio, tanto el presidente de ese Departamento como el ministro de Obras Públicas y hasta el propio presidente Ortiz intervinieron activamente en las negociaciones que llevaron a la reunificación de la Unión Ferroviaria cuando ésta se dividió: ése era un sindicato “de orden”, cuya integridad interesaba al Estado conservar porque evitaba la proliferación de conflictos en un medio que era vital para la economía de la época.

10. Y había también otro motivo, igualmente precursor; Ortiz apoyaba a una de las facciones que se disputaban el sindicato —la de Tramonti y los “sindicalistas”—, que a su vez lo habían respaldado durante la campaña electoral. Porque, siguiendo el ejemplo de Yrigoyen —que ya se había relacionado con dirigentes sindicales desde 1916—, Ortiz no desdeñó buscar ese tipo de alianzas.

Pero tampoco estaba dispuesto a llegar demasiado lejos: como no pudo salvar a sus aliados pese a su intervención directa, tuvo que conformarse con el alejamiento de Domenech, que lideraba la facción rival: ya no podía dirigir la Unión Ferroviaria alguien que no tuviera buenas relaciones con el presidente de la nación.

Los “sindicalistas”, por su parte, no habrán titubeado demasiado en vincularse con Ortiz. Después de haber sido claramente pro-yrigoyenistas hasta 1930, ya habían suscripto una declaración de apoyo a Uriburu en ese año y otra de respaldo a Justo tres años después. Y aunque esa actitud pro-oficialista fue otro de los argumentos utilizados para desalojarlos de la conducción de la CGT, sus sucesores socialistas tampoco dejaron de organizar un acto de apoyo a Ortiz cuando un escándalo financiero lo obligó a presentar su renuncia, ni de mantener las mejores relaciones con el gobernador Fresco en la provincia de Buenos Aires.

11. Vale decir que durante la década del 30 el movimiento sindical fue acercándose cada vez más al Estado, y que sus dirigentes buscaban vincularse con los gobernantes, ofreciéndoles apoyo político a cambio de una actitud receptiva para las demandas de sus gremios e, incluso, de un respaldo directo que reforzara su poder sindical.

Y así vemos cómo convergen y se anudan las tres tendencias de que hablamos: la burocratización y el reformismo pragmático impulsaban hacia la vinculación con el poder político y eran a su vez reforzadas por ésta.

Llegamos entonces a la antesala del peronismo; para que éste aparezca sólo falta que alguien, desde las esferas del poder, reconozca y recoja estas tendencias del movimiento sindical y sepa combinarlas con su propio proyecto político.

Porque si ese paulatino acercamiento entre el movimiento sindical y el Estado no llegó más lejos antes del 43 no fue porque los dirigentes sindicales no estuvieran dispuestos a hacerlo, sino porque no le interesaba mayormente a quienes controlaban el Aparato Estatal. Es sintomático que el único presidente de la década del 30 que buscó cierto apoyo en el movimiento obrero sea el que proyectaba terminar con el sistema del fraude electoral; los demás no necesitaban votos reales. Como les decía Fresco a los dirigentes sindicales, su preocupación por los trabajadores era totalmente desinteresada, porque él los votos los conseguía de otra manera...

12. Es con estos elementos que se encontró Perón al empezar su carrera política, y es sobre ellos que operó su talento creador y su originalidad.

El buscaba, como todo político, conservar y aumentar el poder que había alcanzado —en su caso, gracias a su influencia en el seno del ejército—. Para eso, necesitaba legitimarlo y asentarlo sobre una base más amplia. Lo que lo diferencia de todos los otros políticos de su tiempo fue su descubrimiento de que el movimiento sindical existente podría ser el medio más eficaz para lograrlo. Otros habían entrevisto la posibilidad de utilizarlo como apoyo, pero ninguno tuvo la sagacidad de valorarlo en toda su importancia ni la audacia de transformarlo en el eje y principal base de sustentación de un movimiento político más amplio.

El genio político de Perón no consistió, entonces, en crear algo de la nada, sino en haber sabido captar las características y las tendencias del movimiento sindical existente; en haber sido el único en intuir la fuerza política potencial que éste encerraba, y en haber logrado articular esa fuerza con otras no menos importantes, como el ejército y la Iglesia.

13. Para la mayoría de los trabajadores, por su parte —empezando por los dirigentes sindicales—, la identificación con Perón significaba la posibilidad concreta e inmediata de ver hacerse realidad muchas de las aspiraciones por las que bregaban desde

hacía décadas: de ver plenamente reconocidos e institucionalizados sus sindicatos y —sobre todo— de verlos convertirse en una fuerza política de primera magnitud, capaz de llegar al poder, cosa que nunca habían podido ofrecerle socialistas ni comunistas.

Había, pues, una coincidencia objetiva entre los proyectos políticos de Perón y las tendencias del movimiento sindical. Pero para que esa coincidencia llegara a concretarse tuvo que intervenir también ese humilde personaje de la historia —tan despreciado por nuestros colegas de formación más teórica, politicólogos y sociólogos pero que los historiadores no podemos darnos el lujo de olvidar—, la coyuntura. Y es ella la que explica, en buena medida, la forma específica que adquirió el producto de esa convergencia.

14. Perón intentó al principio —como lo demuestran todos sus actos y palabras de la época— ganarse al mismo tiempo el apoyo de la clase obrera y de un sector relativamente marginado de la clase dominante: la burguesía industrial. Pero el rechazo que encontró por parte de los representantes de esta última, así como el éxito que tuvo con los de la primera, no le dejó otra alternativa que apoyarse únicamente en ellos. De lo contrario, tanto el peronismo como cuarenta años de historia argentina hubieran sido diferentes.

Ahora, contar solamente con el respaldo de la clase obrera —o, más precisamente del movimiento sindical— significaba una gran debilidad frente a la poderosa coalición de fuerzas opositoras que se formaba. Recordemos que allí estaban todos los partidos políticos tradicionales, del conservador al comunista; todas las organizaciones patronales; casi toda la prensa; la “intelligentzia” la Universidad... y todo ello con el respaldo de la primera potencia mundial.

Además, sin contrapeso, un apoyo exclusivamente obrero hubiera llevado probablemente a Perón mucho más allá de lo que él se proponía.

De modo que tuvo que compensar la falta de un ala empresaria con dos fuerzas sustitutas, pero no menos importantes: el ejército y la Iglesia. El “corporativismo” que caracterizaría en lo sucesivo la vida política argentina estaba en marcha.

Pero sabemos en qué medida estos dos factores de poder, relativamente autónomos respecto a las clases sociales, responden a motivaciones ideológicas. Para lograr su incorporación o su permanencia en la alianza era necesario entonces transformar la ideología dominante en el movimiento sindical —todavía más o menos socializante pese a los avances del reformismo pragmático— en una ideología “nacional” y cristiana.

Sin embargo, esto no podía lograrse de un día para el otro, y lo que Perón hizo al comienzo —atendiendo a la necesidad prioritaria de ganarse a la clase obrera— fue todo lo contrario: transformar su propio discurso ideológico inicial, de resonancias fascistoides, en un lenguaje cada vez más socializante, como se ven en los discursos que pronunció entre 1943 y 1946.

Es cierto que la abierta intervención del Departamento de Estado norteamericano fue exacerbando el tono nacionalista de la campaña electoral hasta llegar a sintetizar la disyuntiva en la fórmula “Braden o Perón”. Pero analizando los discursos de Perón vemos que la temática social —y socializante— predomina netamente sobre los aspectos nacionalistas y “cristianos” hasta 1946. Sólo después de esa fecha comenzaría a operarse lentamente el viraje ideológico de unos sindicatos cada vez más subsumidos en el aparato estatal y a los que ahora sí se incorporaba una masa creciente de trabajadores “nuevos”, sin tradición sindical y que no se habían formado en las ideologías tradicionales del movimiento obrero.

15. Al mismo tiempo, los antiguos dirigentes iban siendo reemplazados por otros, cada vez más sumisos a la conducción autoritaria y personalista de Perón. Porque si ésta había logrado legitimar su poder gracias a los sindicalistas de la vieja guardia, que habían organizado el Partido laborista y la campaña electoral —una vez en la presidencia no tardaría en liberarse de esos aliados, que amenazaban con trabar su libertad de movimientos y obstaculizar sus planes políticos.

Por un lado, Perón insistiría —y esta vez con más éxito— en atraerse el apoyo de un sector de la clase dominante; por el otro, debía conservar el sostén del ejército siempre desconfiado del militar obrerista. Para ambas cosas era necesario que el poder alcanzado por los sindicatos y sus dirigentes estuviera estrictamente controlado. De ahí la orden de disolución del Partido laborista y la paulatina subordinación de la CGT a la autoridad de Perón, que culmina en 1947 con la maniobra que obliga a renunciar a Luis F. Gay. Ya el poder carismático de Perón y su comunicación directa con las masas hacía innecesaria la intermediación de los dirigentes sindicales tradicionales.

16. De modo que la transición de un sindicalismo independiente y socializante a un sindicalismo estatal, “nacional” y cristiano —la pérdida de autonomía y la conversión ideológica del movimiento sindical—, fueron mucho menos bruscas de lo que habitualmente se piensa: preparada en muchos aspectos durante la década del 30, se prolonga también bastante después de 1946.

Para muchos de sus protagonistas habrá resultado, entonces, casi insensible. Si en el caso de los migrantes internos —sobre el que tanto se ha insistido— el paso del autoritarismo paternalista del patrón rural o del caudillo local al liderazgo carismático de Perón no representaba una profunda ruptura, en el caso de los “viejos” trabajadores urbanos la transferencia de lealtades desde sus dirigentes tradicionales más o menos burocratizados y vinculados con el poder político— hacia un dirigente sindical único, que *detentaba* el poder político y que lo ejercía en beneficio de los trabajadores, tampoco resultaría excesivamente traumático, ya que además se mantenía dentro del marco de la estructura sindical existente y de la ya predominante ideología del reformismo pragmático.

17. Perón no se apoyó entonces —como pretenden las dos versiones canónicas de las que hablábamos al comienzo— ni solamente ni principalmente sobre los trabajadores “nuevos”. Estos pudieron aportar su presencia en las movilizaciones populares y su voto en las elecciones del 46, pero las estructuras sindicales que permitieron canalizar ese apoyo inorgánico y lo llevaron al triunfo fueron las que habían organizado, componían y dirigían los trabajadores con más larga duración urbana y sindical.

El llamado de Perón fue entonces recibido y respondido por todos los sectores de la clase obrera de la época. porque respondía a sus aspiraciones y expectativas concretas y reflejaba el nivel real de conciencia que habían alcanzado. Y porque, además, del otro lado estaban claramente alineados todos los enemigos tradicionales y visibles: la Sociedad Rural, la Unión Industrial, las demás organizaciones patronales...

Paradójicamente, partiendo del propósito declarado de “suprimir la lucha de clases”, la actuación política de Perón había desencadenado un proceso que culminó en 1945-46 en una situación de “clase contra clase” imposible de evadir. Fue en esas condiciones que se produjo la unificación de la clase obrera en torno a la figura de Perón y su irrupción en la escena política como una fuerza decisiva.

18. En suma, pensamos que —lejos de ser la antítesis del sindicalismo peronista y de desaparecer de la escena histórica barrido por éste— el sindicalismo pre-peronista fue la matriz que engendró a su sucesor, al cual además se incorporó mayoritariamente. Perón no hizo más que acelerar y dar la oportunidad de concretarse a las tendencias que venían operando desde mucho antes en el movimiento sindical y, en este sentido, es tanto su renovador como su producto.

Sólo así se comprende que la nueva etapa de la historia del movimiento obrero argentino inaugurada en esos años durara casi tanto como todas las anteriores juntas: si dejamos de lado la “prehistoria” del movimiento sindical en el siglo pasado, vemos que en el actual, frente a quince años de predominio anarquista, veinte de mayoría “sindicalista” y nueve o diez de orientación socialista y comunista, hay cuarenta años de sindicalismo peronista. Este sobrevivió a la pérdida del poder, a la muerte de su líder, a las campañas de “desperonización”, a todas las proscripciones y persecuciones... ¿Hubiera sido así si no expresara tendencias fuertemente arraigadas en la clase trabajadora?

En cambio, las innovaciones que no provenían de tendencias propias del movimiento obrero, sino que fueron impuestas por necesidades políticas de la coyuntura en que se formó el peronismo — como la conversión ideológica y el control estatal — se han mostrado mucho menos duraderas y profundas. El control estatal sobre los sindicatos, aunque variando el ritmo de las situaciones políticas nunca volvió a ser igual que en 1946-55, y la doctrina “nacional” y cristiana sólo sirvió generalmente para adornar con su retórica y presentar en forma más potable y tranquilizadora para los factores de poder a la verdadera ideología del reformismo pragmático.

19. Somos concientes de que esta interpretación abre más interrogantes que los que pretende contestar. ¿Por qué se desarrollaron esas tendencias en el movimiento obrero de la década del 30? ¿Por qué los partidos socialista y comunista no lograron encauzar más eficazmente las aspiraciones del movimiento sindical y vincularse más solidamente con él? ¿Por qué los sectores patronales rechazaron de plano y en bloque los intentos iniciales de Perón por incorporarlos a su movimiento y transformaron así la opción del 45-46 en un enfrentamiento de clases? ¿Estuvo el movimiento sindical totalmente sometido al aparato estatal durante la década peronista? Y, de ser así, ¿cómo se explica su resurgimiento frente a un gobierno hostil después de 1955? Y, fundamentalmente, la gran pregunta: ¿cómo se explica que el peronismo haya seguido constituyendo la identidad política de la casi totalidad del movimiento sindical durante cuarenta años?

Si las ideas aquí expuestas sirvieran para incitar — además de las críticas que espero — a buscar una respuesta a esas preguntas, este trabajo habrá cumplido su objetivo.

París, septiembre de 1984

La economía argentina durante la crisis de los años ochenta

Carlos Abalo

Segunda parte

Los cambios en la industria

Desde el punto de vista de su modernización, el principal problema de la industria argentina residía en la escasa concentración de la producción por establecimiento, que, en promedio, era aproximadamente diez veces inferior al nivel internacional. Esta baja concentración promedio, que daba lugar a una productividad reducida y dificultaba la incorporación de nuevas tecnologías, coexistía al mismo tiempo con una alta concentración de la producción en pocos establecimientos, cuyo tamaño, sin embargo, era más reducido que el de la industria concentrada de los países capitalistas industrializados o de los de industrialización reciente.

En la posguerra y hasta 1975 la industria fue el sector más dinámico de la economía, con un crecimiento promedio de más de 5 % anual. La alta protección arancelaria permitía una estructura de precios internos relativos elevados, que también eran altos desde el punto de vista de la comparación internacional. La protección arancelaria permitía la coexistencia de salarios reales y tasas de ganancia también elevadas. La industria era, en ese momento, el sector más beneficiado con el desplazamiento de la renta agraria.

En 1959 se reducen los salarios reales y como hay una elevada protección arancelaria y los precios son altos, los industriales obtienen una tasa de ganancia mayor, que acrecienta su capacidad de acumulación. La modificación del perfil del consumo (por la reducción del poder adquisitivo obrero) modifica la estructura productiva en favor de la fabricación de bienes intermedios y de consumo durable. Asimismo, se debilita considerablemente el crédito proveniente del sistema financiero y la industria debe aumentar su capacidad de autofinanciamiento y aprovechar el endeudamiento fiscal y previsional (especialmente en las fases de recesión), con lo que se convierte en un factor de incremento del déficit presupuestario. Al finalizar el decenio de los sesenta, la demanda industrial depende también de las inversiones públicas.

La industria argentina ingresa al decenio de los setenta con una mayor incorporación de capital extranjero, que aportó nuevas tecnologías y permitió el desarrollo de nuevas ramas de producción intermedia. En 1973, la industria había logrado una expansión continuada de casi diez años, sus precios relativos eran menores por el incremento del tamaño medio de los establecimientos y, según la opinión del Banco Mundial, se había logrado un comportamiento "sorprendentemente bueno"¹ en materia de exportaciones. En efecto, de 1970 a 1974, las exportaciones de productos manufacturados habían crecido 125% y en el último año mencionado representaban 6.7% de la producción industrial (contra 3.7% en 1970). En 1970, las exportaciones industriales apenas superaban los 200 millones de dólares, pero en 1974 ya estaban holgadamente por encima de los 800 millones, una cifra equivalente al 21% sobre el total de las exportaciones. En ese año, las exportaciones sumaron más de 3.000 millones de dólares; el 48% estaban constituidas por bienes primarios, el 30% por productos de base agropecuaria de escaso valor agregado y el resto por manufacturas.

Por ese entonces, las ramas más dinámicas eran la metalmecánica, la química y la petroquímica. En contradicción con lo que se afirmaría dos años después, en 1974 la actividad industrial había aumentado su eficiencia, había elevado su productividad, había reducido sus precios relativos y se proyectaba con bastante dinamismo hacia el mercado mundial. En el periodo 1973-1975 dicha conformación se combinaba con una modificación en el perfil de la demanda, que volvió a incentivar los bienes de consumo no durable, debido al aumento de los salarios reales que tuvo lugar durante el gobierno peronista, luego interrumpido por el golpe de estado militar de marzo de 1976.²

Durante el periodo de la dictadura militar hay que señalar tres etapas diferenciadas en la evolución industrial: la que va de 1976 a 1978, la que se inicia en 1979 y finaliza en marzo de 1981 (cuando concluye la etapa presidencial de Jorge Videla con José A. Martínez

¹ Banco Mundial, "Argentina. Economía Memorandum", 2 volúmenes, Washington, 1985.

² ONU-CEPLA, Documento de Trabajo, Núm. 13, Bernardo P. Kosacoff, "El proceso de industrialización en la Argentina en el periodo 1976-1983", revisión preliminar (mimeo), Buenos Aires, 1984.

de Hoz como Ministro de Economía) y la que sigue desde esa fecha hasta el fin de la dictadura, en diciembre de 1983.

De 1976 a 1978 se produjo una brutal distribución regresiva de los ingresos, que se tradujo en la pérdida de alrededor de 15 puntos en el ingreso nacional por parte de los asalariados. La traslación de ingresos hacia los capitalistas incrementó la tasa de inversión y hubo una recuperación en la producción de bienes de consumo durable y de capital. Al finalizar ese periodo, la industria estaba en condiciones de dar un salto hacia adelante. Sin embargo, en 1979 empezó a operar la combinación del retraso cambiario con la apertura comercial y las elevadas tasas de interés internas. El enfoque monetario de la balanza de pagos, la presunta búsqueda de la *convergencia* entre la tasa de inflación nacional y la mundial y los precios internacionales como orientadores de la actividad interna constituyeron, en realidad, el disfraz teórico con que se encubrió un proceso de desindustrialización que se continuó en la etapa siguiente debido a la crisis financiera. La lucha antiinflacionaria y las políticas de ajuste para llevarlas a cabo no terminaron con los aumentos de los precios, sino que prepararon las condiciones para una inflación continuada y dieron lugar a un retroceso del producto industrial de 20 % con relación a 1970, una caída de 35 % en la ocupación industrial y un descenso de seis puntos en la participación del producto industrial sobre el producto total (28.4 % en 1974, contra 22.4 % en 1981).

El resultado de la política encaminada a hacer más eficiente el sector industrial elevó la capacidad ociosa a un 35 % y dificultó cualquier tipo de reconversión industrial. Ello se debe a la desarticulación del aparato productivo, los estrangulamientos en la cadena de producción, las restricciones en la oferta de manufacturas, el desmontaje y la obsolescencia de equipos, la desvinculación del personal especializado, las restricciones a la acumulación por los elevados costos financieros, las limitaciones a la importación por el peso de la deuda externa y la exportación subsidiada de productos manufacturados debido a la gravitación de los costos fijos, que requieren un tipo de cambio alto, paralizante del mercado interno.

Con todo, existió una reestructuración industrial, cuyo significado trataremos de enunciar al final de este trabajo. El reordenamiento practicado hizo que la industria operara con más intensidad de capital y con establecimientos de mayor escala de producción. La ofensiva desindustrializadora disfrazada de política antiinflacionaria apuntó, en realidad, a eliminar una estructura industrial que, en las condiciones de una actividad exportadora basada fundamental-

mente en los bienes primarios, tendía a crear las bases para una periódica reaparición de una alianza social y de un bloque de poder cuestionaba la economía basada en la exportación de bienes primarios. La reforma financiera, la pasada vigencia de un tipo de cambio retrasado y la apertura comercial terminaron con el modo de acumulación dual, apoyado alternativamente en el sector agropecuario y en la industria. Esta dualidad era incompatible con un proceso de concentración y centralización del capital tendiente a afirmar a la oligarquía tradicional en la nueva alianza de poder, dentro de una mayor integración al mercado mundial, pero la crisis industrial y el endeudamiento externo obstaculizan todavía el camino hacia la incorporación de las manufacturas a un modo de acumulación homogéneo, porque esa cuestión divide el frente interno de la burguesía. La crisis financiera de 1980 y 1981 fue el escenario en que se libró la última gran batalla para modificar la presente inserción de la industria. En aquella ocasión, el Estado empleó su capacidad de regulación (frente a las quiebras de bancos y empresas) con un marcado criterio selectivo en favor del sector dominante de poder. A partir de entonces, la mayor parte de los grupos industriales vinculados al mercado interno empezaron a revisar su estrategia y a sumarse a las presiones destinadas a lograr un tipo de cambio más elevado y a tratar de recuperar ventas por medio de la exportación. Una parte cada vez mayor de la burguesía anteriormente interesada en el mercado interno se pasa a la perspectiva exportadora y a la práctica de la negociación con divisas.

Pareciera que las empresas extranjeras de producción industrial no aprovecharon en forma inmediata el cambio en el modo de acumulación que se fue imponiendo a partir de 1976 y mantuvieron inicialmente su estrategia de apoyo al desarrollo del mercado interno. Contaron con un tratamiento incomparablemente más favorable a sus intereses con la nueva legislación de inversiones extranjeras, de transferencia de tecnología, de promoción industrial y, sobre todo, con la reforma financiera, ya que ellas tenían más facilidad para conectarse con el mercado financiero internacional. Aunque usaron esas ventajas para obtener mayor rentabilidad y mejores condiciones operatorias, no expandieron considerablemente su producción. Su presencia se manifestó en las actividades financieras, pero el capital extranjero localizado en la industria, que representaba en forma directa el 31.2 % de la facturación en 1973, se redujo a 28.3 % en 1981. Como en el caso de la burguesía vinculada al mercado interno, más tarde se readaptaron a la nueva situación, lo que fue evidente en la producción de automotores.

De 1976 a 1983, los grupos empresarios más dinámicos fueron las grandes empresas de capital nacional, dedicadas a la producción de bienes intermedios. El sector más concentrado mantuvo un nivel estable de ventas en moneda constante, que contrasta con la caída de 20 % en el producto industrial registrado entre 1976 y 1982 para el conjunto de las actividades manufactureras; pero, además, hubo un pequeño núcleo de empresas que experimentó una alta tasa de crecimiento anual. La disparidad de comportamiento parece haber estado vinculada a las relaciones con el sector financiero (disponibilidad de crédito, sobre todo externo, y costo de financiación) y con la casta dominante (para usufructuar el poder de compra del Estado o aprovechar otras ventajas). Las empresas nacionales oligopólicas con mejor comportamiento estuvieron vinculadas a la producción siderúrgica, a la de papel, a la de cemento, a la de aluminio y a la petroquímica, se generalizó la formación de conglomerados y hubo inversiones externas. Las actividades más castigadas fueron la industria de la madera y la fabricación de muebles, los textiles, la ropa y el calzado y los bienes de capital.³

El Estado y el sistema financiero

El Estado, mediante la política económica, regula el proceso de producción, es decir, le confiere una dirección determinada, que generalmente consiste en profundizar o bien en limitar el alcance de los movimientos cíclicos que el sistema capitalista provoca espontáneamente, o en sincronizar estos movimientos con el ciclo del capital en escala mundial. En la Argentina, el Estado reguló las políticas que contribuyeron a sostener el modo de acumulación dual que existía antes del golpe militar de 1976. La burguesía más concentrada aspiraba en los años setenta a producir una gran concentración y centralización del capital, y por ello exigía que la regulación estatal se orientara en este último sentido. La política económica incorporó elementos de ajuste en esa dirección, pero para eso había que superar una larga tradición política argentina, que hace que las regulaciones estatales están profundamente influidas por políticas populistas, que eluden la centralización y tienden a recrear la acumula-

³ Véase CISEA, Jorge Schvarser, "Cambios en el liderazgo industrial argentino en el periodo de Martínez de Hoz", Buenos Aires, 1983. y Juan Sourrouille y Jorge Lucán-geli, "Apuntes sobre la historia reciente de la industria argentina", Boletín Techint, No. 219, Buenos Aires, 1980.

ción dual. Esto se debe a que la derecha no tiene un partido político capaz de controlar el Estado. Por consiguiente, cuando surge un régimen democrático, el Estado se encuentra parcialmente en manos de partidos pequenoburgueses, centristas o populistas, que instauran políticas que mediatizan los intereses del *establishment*.

La dictadura militar utilizó el Estado para regular la economía en favor de la oligarquía y el capital financiero internacional, porque se trataba de centralizar el capital e integrarse más profundamente al sistema capitalista mundial. Para ello bajó los salarios y en 1976 y 1981 manipuló el tipo de cambio hacia la sobrevaluación de las divisas (para favorecer las exportaciones agrarias y reducir los salarios reales). En 1979 y 1980 sobrevaluó el peso (para mantener en el país los capitales especulativos y para alentar el endeudamiento externo y las importaciones) y practicó en forma casi continuada una política de altas tasas de interés, dispuso la licuación generalizada de los pasivos de las empresas en dificultades y nacionalizó la deuda externa privada, cargándosela al Estado y a la sociedad. La dictadura, en definitiva, utilizó el Estado para vaciarlo de recursos, pero proclamó la teoría de la subsidiaridad, que consiste en limitar estrictamente sus funciones, para evitar las regulaciones populistas.

Una de las piezas fundamentales de la regulación estatal es la política monetaria y de crédito. Cuando la regulación del Estado promueve la centralización y la concentración salvaje de los capitales puede pasar la responsabilidad de esa regulación al sector privado más concentrado. En ese caso, el Estado renuncia a la gestión de la moneda y del crédito y la traspasa al mercado financiero, alentando incluso la creación de un mercado no institucional, no sujeto a las regulaciones más elementales, que son las impuestas por la práctica de los bancos centrales.

Desde la primera reforma financiera que sucedió al peronismo (en 1977) se promovió el desarrollo de la gestión privada del crédito. Durante la dictadura militar de Juan Carlos Onganía se echaron las bases para el desarrollo de los mercados privados de crédito no institucionalizados, es decir, no sometidos al control del Banco Central. Al mismo tiempo, se facilitó el desarrollo del capital ficticio y el Estado incrementó la deuda pública. El capital ficticio está constituido por las acciones y las obligaciones: representan al capital efectivo, pero crecen con más velocidad que éste, por lo que constituyen —en realidad— valores ficticios destinados a la especulación. Por su lado, el Estado financió parte de su déficit presupuestario con títulos de la deuda pública. Estos títulos devengan intereses a los inversores privados y a los bancos que los adquieren, por lo que el Esta-

do, al aumentar el déficit fiscal, alimenta con los intereses a los capitalistas y bancos privados. Estos títulos públicos, además, se convierten en respaldo del crédito privado no institucionalizado.

La reforma financiera de 1977 liberó las tasas de interés (o sea, quitó la regulación directa por el Estado), concedió garantía del Estado a los depósitos efectuados a esas tasas libres, liberó el ingreso al sistema financiero de nuevas instituciones y estableció una forma de regulación de la creación de dinero por parte de los bancos, mediante la política de encajes. La política de altos encajes, propia de la restricción monetaria, reduce el ritmo de actividad y disminuye la rentabilidad operativa de las instituciones, porque éstas no pueden utilizar plenamente los depósitos en el otorgamiento de créditos. Para compensar la menor rentabilidad derivada de la política de encajes, se creó la cuenta de Regulación Monetaria. Mediante esta cuenta, el Banco Central remuneraba a los bancos por los encajes sobre los depósitos a interés, pero les gravaba la capacidad prestable originada en los depósitos en cuentas corrientes. Las compensaciones otorgadas a los bancos mediante la Cuenta de Regulación Monetaria fueron considerablemente mayores que los cargos, y de esa manera esta cuenta fue generando un déficit fiscal complementario. Finalmente, con la posterior selección de los directores del Banco Central, el gobierno virtualmente privatizó su dirección y los mismos bancos pasaron a dirigirlo: por supuesto, se aflojaron completamente los controles.

La reforma financiera de 1977, la apertura comercial, la restricción monetaria, la apertura del mercado financiero y la regulación estatal de un dólar barato agudizaran la desindustrialización durante 1979 y 1980. Las empresas se vieron enfrentadas a la necesidad de sobrevivir mediante el crédito y, al resultar más barato contratarlo en el exterior, hubo un endeudamiento externo creciente, de tal manera que el porcentaje de la deuda había llegado en 1980 a 30 % sobre el producto bruto interno. De 1978 a 1981 la deuda externa total creció a una tasa anual de 42 % acumulativo, y la privada lo hizo a 56 % . Por otro lado, las empresas que estaban en condiciones de solicitar créditos o que podían contratarlo en el exterior trataron de financiar de esa manera la concentración y la centralización de los capitales, que era lo que podía asegurar su capacidad competitiva futura. Y por último, las que solicitaban créditos por otros motivos utilizaron la combinación del dólar barato con las tasas de interés elevadas y la libertad cambiaria para fugar capitales, depositarlos en el exterior o traerlos en calidad de autopréstamo disimulado, con lo que blanqueaban el importe y sacaban legalmente del país

el monto de los servicios por préstamos. También hubo préstamos a empresas inexistentes, que constituyeron grandes vaciamientos, y en todos los casos la especulación desenfrenada estuvo amparada por la garantía estatal de los depósitos.⁴

En marzo de 1980 se presentó la primera oleada de la crisis financiera, mediante la quiebra del Banco de Intercambio Regional (BIR), que había llegado a ser la principal institución financiera privada del país. La acumulación de créditos, unida a la recesión del mercado y a las dificultades con la rentabilidad ponían a numerosas empresas en situación de quiebra o iliquidez. Esto, a su vez, repercutía sobre los bancos, volviéndolos insolventes. La quiebra de una parte del aparato productivo no fue el único responsable de la insolvencia de numerosos bancos: también hubo una supervisión inadecuada y numerosas operaciones delictivas, como las vinculadas a los vaciamientos y a las masivas fugas de capitales. La crisis financiera amenazaba convertirse en una crisis monetaria, pero en ese momento existían elevadas reservas en el Banco Central. De cualquier manera, el gobierno contrarrestó la fuga de divisas con el endeudamiento externo del Tesoro y de las empresas del Estado, que obtenían de esa manera las divisas que requería el sector privado. Así se postergó el estallido de la crisis.

El endeudamiento y la especulación no se frenaron. A fines de 1981 sobrevino otra crisis financiera. El gobierno refinanció las deudas privadas con subsidios, con lo que la licuó, traspasándola al déficit del Estado y de ahí a la inflación.

La licuación de la deuda trajo aparejada la necesidad de congelar el crédito institucionalizado, por lo que se intensificó el crecimiento de las operaciones de crédito extrabancarias o interempresarias. Esas operaciones empezaron a garantizarse con Bonos Externos, que son títulos del gobierno en dólares. El globo de crédito siguió creciendo sobre la base de empresas quebradas o con grandes dificultades y sin capacidad de liquidar sus obligaciones. Como la insolvencia empresarial se trasladaba a los bancos, se dictó una ley de consolidación del sistema financiero que permitía realizar aportes de capital para normalizar la situación patrimonial y de liquidez de la banca, lo que facilitaba la concentración y el avance del capital financiero internacional.

⁴ CET-IPAL (Centro de Economía Transnacional-Instituto para América Latina), Ernesto Feldman, Juan Sommer, Carlos Bonvecchi, "El impacto de la reforma financiera y de la apertura externa en la economía argentina (1976-1981)", Buenos Aires, 1983.

El saneamiento de la banca propicia la concentración y la centralización del capital, de la misma manera que la prolongación de la recesión en medio de la crisis financiera y la restricción monetaria aceleran la depuración de las ramas industriales y someten a las empresas al control de los grupos oligopólicos dominantes. Desde la reforma financiera de 1977 hasta fines de 1984 se calculó que la sociedad realizó transferencias y subsidios al conjunto del sistema financiero por un valor equivalente a los 42.000 millones de dólares.⁵ El Banco Mundial, por su parte, señala que las líneas de crédito subvencionadas y las garantías cambiarias para apoyar a las instituciones financieras privadas costaron al Banco Central el equivalente de 1 % y 2 % del producto interno en 1981 y 1982.

El gobierno radical afronta ahora la herencia del globo de la deuda a punto de estallar. El país está al borde de un crac financiero, porque esa deuda no puede ser absorbida en forma inmediata y el Estado no puede salir a financiarla porque simplemente ya no cuenta con recursos para hacerlo. Al mismo tiempo, los bancos acreedores exigen que las deudas en dólares del Banco de Italia, que acaba de quebrar, sean transferidas a la deuda externa, que ya es imposible de pagar, aun con una recesión de larga duración. Precisamente la quiebra del Banco de Italia es una muestra elocuente del parasitismo y del grado de delincuencia del *establishment*. El banco fue vaciado por integrantes de cuatro de los cincuenta grupos empresarios más relevantes del país, que se turnaron en los últimos tiempos en su dirección. Una investigación a fondo de las operaciones ilícitas del banco develaría muchos de los misterios de la *patria financiera*, y se entendería cómo la crisis argentina y su inflación insostenible se deben especialmente a la modalidad de acumulación y a las prácticas de saqueo de su burguesía, lo que serviría para colocar en el banquillo de los acusados a muchas de las familias más respetables del país.

La crisis y el futuro

El análisis económico no es suficiente para explicar la crisis. Los cambios en el comportamiento agropecuario e industrial y la profundidad de la crisis financiera sólo pueden entenderse recurriendo a la discusión del modo de acumulación en su conjunto, a sus antece-

⁵ Clarín, Buenos Aires, enero 4 de 1985.

dentes históricos y a la articulación de la formación social argentina en la economía mundial.

La integración mundial es uno de los aspectos nodales de la crisis. Argentina es un país capitalista periférico que antes de la crisis de los años treinta estuvo completamente integrado al mercado mundial. Dicha crisis aflojó sus vínculos de integración y desde entonces no pudo recomponerlos en forma definitiva, aunque por muchos años haya podido resolver de una manera relativamente satisfactoria el problema del crecimiento industrial.

La integración pasa en primer lugar por la cuestión agraria, ya que Argentina es un país exportador de cereales y otros productos de base agraria. El retraso de las exportaciones agropecuarias de la pampa húmeda, en los cincuenta años que van desde los veinte hasta los setenta, estuvo marcado por la negativa de la burguesía terrateniente a transferir la renta agraria mediante instrumentos impositivos y por la incapacidad del Estado para lograrlo. Fue imposible evitar de otra manera la parálisis productiva de este sector cuando se le impuso una traslación forzada de la renta agraria. Dicho desplazamiento se produjo en los 40 y los 50 por la correlación de las fuerzas políticas y la situación del mercado mundial, pero se revirtió a fines de los sesenta y con la crisis política del gobierno peronista, en 1974.

La propiedad agraria es un obstáculo al desarrollo del capital, porque la renta de la tierra inmoviliza un excedente que de otra manera se destinaría a la acumulación. Cuando la burguesía terrateniente fue obligada a trasladar una parte de la renta agraria a la industria y al consumo de los asalariados, estancó la producción y no modificó la tecnología de una manera capaz de producir un incremento en la productividad por hectárea. Es posible que la innovación tecnológica posterior haya provenido de cambios sociales, de la presión de los monopolios cerealeros y de los proveedores de semillas híbridas vinculados a la expansión del mercado, y de la disponibilidad de créditos del Estado. La innovación más notable fue la de las semillas híbridas, pero este aporte tecnológico vino acompañado de una traslación de renta hacia las empresas transnacionales comercializadoras y los proveedores de semillas. La burguesía terrateniente, que habría adoptado una especie de *vía prusiana sui generis* de reformas,⁶ trata ahora —ante la baja de precios— de resarcirse

⁶ Llamamos *vía prusiana sui generis* a los importantes cambios ocurridos en la economía agraria argentina porque, a diferencia de los que tuvieron lugar hace más de un siglo en Alemania, y que prepararon el camino para el desarrollo capitalista de ese país, los que tienen lugar en Argentina se realizan en subordinación al capital financiero internacional. Por ese motivo la renta agraria no intensifica la acumulación interna, sino que se desplaza hacia las transnacionales comercializadoras y hacia el circuito financiero internacionalizado.

del desplazamiento de la renta agraria mediante una parcial desgravación de los impuestos a la exportación. Si esa renta desplazada se hubiera empleado antes en insumos industriales capaces de elevar la productividad, y si se hubiese mantenido la comercialización estatal de los granos y el desarrollo tecnológico del Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA), el país habría dispuesto de un gran fondo de acumulación. La propuesta de nacionalizar el comercio exterior y de movilizar al INTA es inseparable de la apropiación de la renta y del desarrollo del mercado interno.

Así como el bloqueo de la renta agraria y su actual desbloqueo en forma de beneficio comercial de las transnacionales cerealeras y de renta tecnológica de los proveedores de semillas obstaculizó el desarrollo del capital, la explotación del petróleo y del gas pueden seguir un curso parecido. La renta petrolera, como la renta agraria, *tiende* a desaparecer con el desarrollo del capitalismo. Interesa saber en qué manos queda: si en poder de un centro dinámico difusor nacional (por ejemplo YPF) o del capital extranjero. La defensa del petróleo como posible instrumento de desarrollo no pasa por la discusión de la presencia de las empresas transnacionales, sino por la lucha para apropiarse de la renta minera y utilizarla para financiar el desarrollo. Y esa lucha se define en los precios de los contratos de explotación. La posesión de la renta agraria y minera se determina por la correlación de fuerzas y por la evolución de los precios y del comercio mundial.

La integración mundial se combinó con la exigencia de una fuerte concentración y centralización del capital en el espacio nacional. La concentración y la centralización, además, son imposibles de eludir ante la caída de la tasa de ganancia, que se fundamenta en el estrechamiento del mercado interno y se expresa en la agudización del proceso inflacionario. En efecto, los mayores requerimientos de capital y la caída de la rentabilidad en la actividad productiva se traducen en un proceso continuado de inflación de precios y en un empleo mayor y por diferentes vías de los recursos del Estado para subsidiar indirectamente la valorización del capital, lo que desemboca en un mayor gasto público y, por vía del déficit, en un acrecentamiento de la tasa de inflación. La inflación trata de reponer la caída de la tasa de ganancia y hacer frente a las mayores exigencias de capital. Se llega a esa situación por los límites que impone el mercado y la propia magnitud del capital. La concentración y la centralización de los capitales es, por consiguiente, un intento necesario para romper la barrera de los límites del mercado y de la magnitud del capital individual. En esa escala de magnitud, los capitales nacionales aislados son impotentes para resolver el problema y re-

quieren el concurso de otros capitales internacionales. Por ese motivo, todas las crisis económicas y financieras del presente se destacan por el hecho de que las fuerzas productivas desbordan el Estado nacional. Una burguesía que no resolvió el problema de la captación de la renta agraria local, difícilmente pueda afrontar sola semejante cometido.

Hasta aquí hemos planteado el problema de la crisis en su aspecto más general. En un sentido más particular, la no difusión de la renta agraria impidió modernizar no sólo el agro, sino también la industria. Cuando el agro empezó a modernizarse, sólo pudo hacerlo cediendo una parte de la renta al capital transnacional, vale decir, quitándola del espacio nacional, impidiendo su utilización por la industria y enfrentando una mayor subordinación a las transnacionales comercializadoras. Dado que la Argentina es un país agroexportador, la no resolución de este problema le hizo perder puntos en relación con otros países latinoamericanos. Ese retraso, propio de una sociedad en conflicto, también profundizó el fenómeno inflacionario, porque de esa manera no se desarrolló en el país un modo de acumulación capitalista homogéneo y centrado en la industria, sino un modo de acumulación dual e inestable, altamente dependiente de la exportación de bienes primarios bajo cultivo extensivo y atrasado, mientras se disputaba en forma permanente la definición del eje de la acumulación. En tales condiciones, la disputa por los salarios empujó a la burguesía industrial y a los terratenientes a luchar por sus ingresos mediante los precios y la manipulación del tipo de cambio.

La no resolución del desplazamiento de la renta agraria profundizó la crisis. La reconversión del aparato productivo exige por eso mismo, desde el punto de vista del capital, formas más avanzadas de acumulación a partir de una menor dotación de capital, lo que agudiza la inflación y eleva los requerimientos de una asociación más estrecha (y necesariamente más subordinada) con el capital financiero internacional.

Sin claras posibilidades de inversión reproductiva, los excedentes de capital tratan de revalorizarse en la forma de capital dinero, creando una instancia especial en el circuito de la acumulación.

Después de la aplicación de las reformas financieras de 1977 y de la apertura del mercado, el capital se incorporó plenamente a la valorización internacional con los resultados que están a la vista. Como sucedió con otros países de América Latina, la integración culminó con la exportación de capital (en forma de fugas y de servicios), hacia los centros del capitalismo mundial. Entre mercados no

iguales, la plena integración se resuelve en una corriente neta de salida de capitales, porque no hay *equilibrio* posible en un mercado en que se desvalorizan los patrimonios y se subutilizan los equipos.

El grupo productivo más integrado de la oligarquía es el de la burguesía terrateniente de la pampa húmeda. Es, por ese motivo, un componente ineludible del bloque dominante. Ahora es más fuerte por su mayor participación en la exportación de granos en el mercado mundial y por el incremento de su producción. Pero en la burguesía argentina hubo una articulación de grupos mucho más amplia, orientada a formar conglomerados y a establecer nexos entre conglomerados. La consolidación de ese frente interburgués hizo posible la dictadura militar. La interrelación y la conglomeración es posible que hayan sido más intensas en los grupos predominantemente industriales o predominantemente financieros. De cualquier manera, la burguesía terrateniente, ya entrelazada desde antes con la industria y las finanzas, es posible que haya encontrado en una situación de mayor complementación nuevos motivos para afirmarse en su espacio de valorización agrario e introducir nuevas tecnologías.

Los intensos procesos de integración y entrelazamiento capitalistas que tuvieron lugar en la sociedad argentina en los últimos diez años sólo se explican como expresión de una concentración y centralización de capitales muy fuerte, frente a la relativa lentitud que estos procesos habían tenido en el pasado, y, sobre todo, porque se lanzaron en medio de una apertura financiera internacional. Los grupos tuvieron que resguardarse de otros grupos nacionales y extranjeros y en muchos casos debieron estructurarse en función de la integración con unos y otros. Para ello tuvieron que echar mano de los fondos de acumulación del Estado. El saqueo de las finanzas del Estado explica gran parte de los elevados déficit fiscales y la inflación, de la misma manera que otra fase de la misma circulación de los capitales, el endeudamiento externo, ayuda también a comprender las inversiones externas de la mayoría de los grupos, propia del proceso de internacionalización, de la posesión de importantes excedentes de capital y de la existencia de un espacio relativamente estrecho de acumulación en el mercado nacional. La internacionalización implica la oposición a la utilización populista de la regulación del Estado (cualquier intento de replantear la acumulación dual). El saqueo del Estado explica también el endeudamiento de las empresas públicas, que de esa manera quedan sin autonomía, sin posibilidad de política propia dentro de su área y convertidas en posibles

candidatas de la privatización, que eventualmente podría producirse después de que el Estado tome a su cargo las pérdidas.

Con todo, el bloque dominante no pudo concluir la etapa de la dictadura militar con una organización civil del régimen que expresara los intereses del conjunto del bloque y contara con cierto apoyo social. La crisis no ofrecía perspectivas políticas para hacerlo y el radicalismo podría completar ahora esta tarea, si implanta una política económica que en cierta medida continúe la de la dictadura militar y afiance la internacionalización del mercado financiero.

El fondo de acumulación del Estado (derivado después parcialmente hacia los grupos privados), el endeudamiento interno y externo, los gastos militares y la acumulación privada se alimentaron en gran medida con un desplazamiento de 12 a 15 puntos de los ingresos de los asalariados en las cuentas nacionales, lo que representa para el periodo 1976-1983 una suma que puede oscilar entre los 78.500 y los 98.200 millones de dólares de 1980. Una política de continuidad requerirá un apoyo político institucional que la dictadura no pudo lograr, para reducir aún más el nivel de los salarios: en oposición a la política económica radical aparecen planteos provinciales o proyectos desarrollistas, que tratan de encarar un periodo de expansión sin cuestionar el problema del pago de los servicios de la deuda, que bloquea cualquier salida. En las condiciones actuales de la economía y la sociedad argentina, un proyecto desarrollista o de acumulación intensiva requeriría un gobierno dictatorial. Por el momento, esa perspectiva no es la del capital financiero internacional (Henry Kissinger la asimila a un proyecto similar al de Muhammad Khadafi), que teme otra desviación nacionalista en el frente militar, después de la experiencia de las Malvinas y por el momento apoya el gobierno de Raúl Alfonsín.

La deuda externa es hija de la integración al capital financiero internacional y conduce a él, porque con los servicios de la deuda, el excedente comercial tradicional argentino es impotente para financiar los servicios. En ese caso, el crecimiento depende de más capitales, o sea de más endeudamiento. La formación social argentina estaría de esa manera imposibilitada de cuestionar la valorización de la renta agraria y minera y la renta financiera, ya que el precario equilibrio de permanente tributación y de debilidad del mercado interno estaría dictada por la subsistencia de la economía basada en el bien primario de exportación. Cualquier posibilidad de expandir las fuerzas productivas más allá de estos límites no sólo tendría que vencer los intereses internos ligados a la exportación y a la especulación, más los posibles futuros intereses vinculados al petróleo, sino

también las presiones externas de la banca acreedora y del Fondo Monetario Internacional. El reaseguro internacional de los intereses del *establishment* tradicional ha llegado a ser, por este camino y por obra y gracia de la dictadura militar y de sus técnicos y expertos, verdaderamente fabuloso, porque cuestionarlo sería como hacer temblar la estantería del sistema del capitalismo internacional. Sin embargo, esa estantería se va a mover igual y lo mismo va a suceder con el globo del endeudamiento que aplasta al sistema financiero argentino, a sus saqueadas, vaciadas y quebradas instituciones. Precisamente por ese motivo, todo empieza por cuestionar el pago de la deuda. Inmediatamente después, se abre un nuevo interrogante: ¿qué hacer un segundo más tarde? ¿cuáles son, en definitiva, las estrategias y las medidas concretas que ofrecen las fuerzas del campo popular a una eventualidad de ese tipo?

Julio 1985



Los intelectuales y la clase obrera

Erik Olin Wright

Los intelectuales han tenido casi siempre un estatuto ambiguo tanto en cuanto actores en la historia del marxismo como en cuanto categorías en el seno de la teoría marxista. Por una parte, la contribución de los intelectuales a los movimientos sociales es innegable: como teóricos, polemistas, dirigentes revolucionarios. Los avances más importantes de la teoría revolucionaria han sido realizados por hombres y mujeres de considerable educación, que dedicaron gran parte de su tiempo a actividades intelectuales. Si bien resulta indiscutiblemente cierto que sus ideas fueron alimentadas por el contacto con las masas, especialmente en el transcurso de luchas sociales, es igualmente cierto, no obstante, que las más importantes aportaciones a la teoría revolucionaria no fueron hechas por proletarios o campesinos. Fueron hechas por intelectuales, y el desarrollo sistemático de la teoría revolucionaria es imposible de imaginar sin su contribución.

Por una parte, el hecho mismo de que la mayor parte de los intelectuales no pertenezcan de forma inequívoca a la clase obrera ha tenido como resultado que siempre hayan sido vistos con cierta sospecha en el seno de los movimientos revolucionarios. Aunque como individuos los intelectuales puedan estar totalmente comprometidos en un proyecto revolucionario, como categoría social los intelectuales ocupan posiciones privilegiadas en el seno de las relaciones ideológicas burguesas, y a menudo también ocupan posiciones de privilegio en el seno de las relaciones económicas burguesas. La designación común por los marxistas de los intelectuales como “pequeñoburgueses” refleja la realidad de estos privilegios. El resultado es que, si bien los intelectuales como individuos han resultado indispensables para los movimientos revolucionarios, los intelectuales como categoría social han interpretado un papel a menudo ambiguo en la lucha de la clase obrera por el socialismo.

Este ensayo intentará explorar la relación de los intelectuales con la clase trabajadora y la lucha de clases. La discusión se centrará sobre dos preguntas: 1, *¿cuál es la posición de los intelectuales en el*

seno de la estructura de clase de las sociedades capitalistas avanzadas? 2, *¿cuáles son las consecuencias de esta posición de clase para el papel de los intelectuales en el seno de la lucha por el socialismo?*

La primera parte se centrará fundamentalmente en la primera de estas preguntas. Tras examinar brevemente las principales formas distintas en las que los marxistas han intentado comprender la posición de clase de los intelectuales, propondré el punto de vista de que los intelectuales han de ser vistos como situados en una posición compleja y contradictoria en el seno de las relaciones de clase. La premisa de la discusión es que para analizar el papel de los intelectuales en las luchas sociales es necesario partir de un planteamiento provisional de su posición objetiva en el seno de las relaciones de clase. La segunda parte del artículo intentará ligar el análisis de la posición de clase de los intelectuales con una discusión acerca de su papel como mediadores de la relación entre la teoría y la práctica socialista. Se prestará particular atención a la situación contradictoria de los intelectuales marxistas en el seno de la universidad burguesa, aunque el análisis resultará relevante también para otras categorías de intelectuales.

I. LA POSICION DE CLASE DE LOS INTELECTUALES¹

Antes de continuar es necesario definir con mayor precisión cómo pretendo utilizar la expresión “intelectual” a lo largo de toda esta discusión. El término “intelectual” tiene tres significados interconectados: en primer lugar, “intelectual” designa *una característica general de toda actividad humana*, ya que toda actividad supone de una u otra forma la utilización del intelecto, de la mente. Toda actividad, no importa lo rutinizada que pueda estar, comprende ciertos procesos mentales. En segundo lugar, “intelectual” designa *una forma especial de actividad laboriosa*; actividad que de una forma u otra está relacionada con la elaboración y la difusión de ideas (y no con el simple uso de las ideas). En tercer lugar, “intelectual” designa

¹ Esta primera parte aparecerá bajo el título «Intellectuals and the class structure of capitalist society» en Pat Walker, comp., *Between capital and labor*, Boston, South End Press, 1978. Originalmente fue presentada, en una versión más breve, en la V Conferencia Anual de Ciencias Sociales de la Costa Oeste, en Nevada City, California, en mayo de 1977.

una *categoría de personas*: personas cuya actividad fundamental es la elaboración y difusión de ideas.²

Una de las características centrales de la división del trabajo en la sociedad capitalista es la tendencia a que los intelectuales como categoría de personas reemplacen a la intelectualidad como tipo de actividad laboriosa. Esto se expresa habitualmente por la tendencia a la separación progresiva del trabajo mental y el trabajo manual en el seno de la sociedad capitalista; esto es, a una separación progresiva de las actividades de planificación, diseño, organización, conceptualización respecto a las actividades de ejecución, producción, transformación directa de la naturaleza. En lugar de convertirse la elaboración y difusión de ideas en parte de la actividad laboral de todas las personas, van quedando tendencialmente restringidas a una categoría específica de personas: los intelectuales.

El análisis de las páginas siguientes se centrará en la tercera utilización del concepto de intelectual: los intelectuales como categoría social. El objetivo básico, por tanto, será desentrañar la posición de clase de los individuos cuya actividad o función primordial es la elaboración y difusión de ideas.

En el seno de la teoría marxista existen al menos cinco amplias líneas de interpretación acerca de la posición de clase de los intelectuales. 1, todos los intelectuales que son asalariados pertenecen a la clase obrera; 2, los intelectuales pueden dividirse en tres categorías: aquellos que están ligados a la burguesía y aquellos que están ligados a las clases precapitalistas; 3, los intelectuales constituyen un segmento de la pequeña burguesía, a veces llamado “nueva” pequeña burguesía; 4, los intelectuales entran en gran parte en la “clase de los profesionales y directivos”, que es una clase aparte, separada tanto de la clase obrera como de la pequeña burguesía; 5, los intelectuales deberían ser considerados como situados en posiciones contradictorias en el seno de las relaciones de clase a nivel económico e ideológico. Yo argumentaré que cada una de estas interpretaciones cubre parte de la realidad de los intelectuales en la sociedad capitalista,

² Gramsci distinguió entre los dos primeros tipos de intelectuales y el tercero al decir que «todos los hombres son intelectuales; pero no todos los hombres tienen en la sociedad la función de intelectuales». *Selections from the Prison Notebooks*, comp. por Quintin Hoare y Geoffrey Nowell Smith, Nueva York, International Publishers, 1971, p. 9 [*Antología*, Madrid, Siglo XXI, 1974, p. 391]. La «función de los intelectuales» se refiere a la tercera de estas definiciones: personas cuya actividad fundamental es la elaboración y difusión de ideas.

pero que la quinta interpretación suministra la base más amplia para una comprensión rigurosa de los intelectuales.

1. *Todos los intelectuales son obreros.* En esta interpretación, el criterio definitorio esencial para la clase obrera es el trabajo asalariado. Los obreros son definidos como aquellas personas que no poseen sus propios medios de producción, que carecen de propiedad y que, por tanto, deben buscar empleo por parte del capital o el Estado para poder vivir. Al margen de las actividades concretas que lleven a cabo una vez que están empleados, todos aquellos que no tienen nada que vender excepto su fuerza de trabajo son obreros. En esta perspectiva, si bien los intelectuales pueden constituir un estrato privilegiado de la clase obrera en términos de ingresos, estatus, seguridad en el trabajo y otros privilegios, en términos de relaciones fundamentales de clase ocupan la misma posición que los asalariados industriales.³

Existe una cierta cualidad atractiva en esta visión polarizada de la estructura de clases de las sociedades capitalistas y en el tratamiento de los intelectuales como obreros. Lo que capta es la tendencia inmanente en el capitalismo hacia la polarización. La dinámica fundamental del modo de producción capitalista está enraizada en la relación polarizada del trabajo con el capital, y a un elevado nivel de abstracción se pueden ver todas las posiciones de clase en las sociedades capitalistas como tendencialmente atraídas hacia una posición polar u otra. Pero como visión histórica del carácter de clase de los intelectuales asalariados, el punto de vista de que los intelectuales están firmemente insertos en las filas del proletariado resulta inadecuado por muchas razones. Tal vez la cuestión más importante en el contexto actual sea el supuesto de que la compleja relación entre el capital y el trabajo pueda ser captada por una única dimensión, un único criterio: la compraventa de la fuerza de trabajo. La relación entre el capital y el trabajo está determinada fundamentalmente por lo que los marxistas llaman las relaciones sociales de producción, y la compraventa de la fuerza de trabajo constituye tan sólo un aspecto —si bien un aspecto importante— de estas relaciones. Otras dos dimensiones de las relaciones sociales de producción resultan especialmente importantes: las relaciones sociales de control sobre el

³ Una defensa reciente de esta posición puede encontrarse en un artículo de Francesca Freedman, "The internal structure of the American Working class", *Socialist Revolution*, 26, 1975.

trabajo de otros en el seno del proceso de trabajo, y las relaciones sociales de control sobre el propio trabajo en el seno del proceso de trabajo. Si las relaciones sociales de producción representan una compleja combinación de varias dimensiones de relaciones sociales, entonces los obreros no pueden ser definidos simplemente como asalariados, sino como asalariados que además no controlan el trabajo de otros en el seno de la producción y no controlan la utilización de su propia fuerza de trabajo en el seno del proceso de trabajo. En estos términos, muchos intelectuales quedarían excluidos de la clase obrera, aunque vendan su fuerza de trabajo como mercancía.

2. *Los intelectuales pertenecen a varias clases diferentes.* Esta postura está íntimamente asociada con la obra de Antonio Gramsci⁴. Gramsci identifica tres categorías de intelectuales: aquellos que son intelectuales orgánicos de la clase obrera, aquellos que son intelectuales orgánicos de la burguesía y aquellos a los que él llama “intelectuales tradicionales”, intelectuales típicamente orgánicos de la aristocracia feudal. Más que considerar que en cuanto categoría global los “intelectuales” poseen una unidad de clase genuina, como parte de la clase obrera o de alguna otra clase, Gramsci identifica el carácter de clase de los intelectuales con la función específica que tienen en la lucha de clases. Aquellos intelectuales que contribuyen a la hegemonía de la ideología burguesa comprenden el estrato intelectual de la clase burguesa; aquellos intelectuales que combaten la ideología burguesa y contribuyen a la contrahegemonía del proletariado forman parte de la clase obrera, y aquellos intelectuales que encarnan a una nostálgica cultura precapitalista que refleja la visión del mundo de la aristocracia feudal constituyen el estrato tradicional de los intelectuales. En el transcurso del desarrollo capitalista, los de esta última categoría tienden a ser absorbidos por el sistema capitalista como intelectuales orgánicos de la burguesía, y así existe una tendencia general a la polarización en dos campos.

La concepción de los intelectuales de Gramsci tiene el considerable mérito de subrayar la naturaleza dinámica y no estática de las relaciones de clase: la posición de clase debe ser siempre conceptualizada en términos de la lucha de clases, no simplemente en términos de una estructura de posiciones. No obstante, tiene una serie

⁴ Véase en particular el importante ensayo de Gramsci “On intellectuals” en *Selections from the Prison Notebooks*, *op. cit.* [“La formación de los intelectuales” en Antología, *op. cit.*]

de importantes limitaciones. En particular, al argumentar que todos los intelectuales cuya actividad reproduce la hegemonía de la burguesía pertenecen a la propia clase burguesa, Gramsci tiende a minimizar el antagonismo objetivo entre muchos de estos intelectuales y la burguesía. Mientras que puede ser cierto, por ejemplo, que los enseñantes contribuyen a la hegemonía ideológica de la burguesía, es también cierto que muchas categorías de enseñantes se ven oprimidas de diversas formas por la burguesía. Algunos enseñantes, de hecho, son explotados por el capital en el sentido técnico de que producen plusvalor.⁵ Así, si bien los enseñantes pueden ser *funcionalmente* intelectuales orgánicos de la burguesía, *estructuralmente* en general no pertenecen a la clase burguesa.

Esta combinación de definiciones funcionales y estructurales tiende a oscurecer las relaciones sociales concretas en el seno de las cuales se realiza el trabajo intelectual. Una cosa es argumentar, por ejemplo, que el director de una cadena de noticias o de una universidad forma parte de la clase burguesa, y otra argumentar que los redactores y los enseñantes forman parte de la burguesía. Resulta de una importancia fundamental distinguir entre aquellos intelectuales que controlan el aparato de producción de ideas (ideología) y aquellos que meramente trabajan en estos aparatos. Una vez hecha esta distinción, resulta posible hablar de la proletarianización del trabajo intelectual, de la pérdida progresiva de todo control sobre las condiciones inmediatas de su trabajo por los trabajadores asalariados intelectuales. Y esto a su vez hace posible hablar de la creciente base *estructural* para la unidad de clase entre ciertas categorías de intelectuales y la clase obrera, aunque en términos funcionales puedan seguir siendo "intelectuales orgánicos de la burguesía".⁶

⁵ Marx señala este punto en un famoso pasaje de *El capital* en el que compara a los maestros con los trabajadores de una fábrica de embutidos: «un maestro de escuela, por ejemplo, es un trabajador productivo cuando, además de cultivar las cabezas infantiles, se mata trabajando para enriquecer al empresario. Que este último haya invertido su capital en una fábrica de enseñanza en vez de hacerlo en una fábrica de embutidos no altera en nada la relación". *Capital*, vol. 1, Londres Penguin/NLR. 1976, p. 644 [*El capital*, Madrid, Siglo XXI, 1975-1979, libro 1. p. 616].

Tales maestros podrían funcionar aún como intelectuales orgánicos de la burguesía a pesar de estar explotados directamente por el capital. Esto ilumina la diferencia entre el análisis de la estructura de las relaciones de clase y los papeles funcionales en la lucha de clases. La complejidad del análisis de clase del trabajo intelectual, como veremos al discutir las posiciones de clase contradictorias, proviene precisamente de la disparidad entre posición estructural y su posición funcional dentro de las relaciones de clase.

⁶ Este punto se ampliará más adelante al discutir las posiciones contradictorias en el seno de las relaciones de clase.

Con esto no pretendemos rechazar el valor de las percepciones de Gramsci acerca del papel de los intelectuales en el seno de la lucha de clases, y en particular su insistencia en la importancia de los intelectuales orgánicos de la clase obrera para cualquier movimiento revolucionario. La cuestión es que tal análisis de las relaciones funcionales de los intelectuales con la lucha de clases no puede sustituir a un descifrado crítico del carácter objetivo de clase de las posiciones estructurales determinadas ocupadas por los intelectuales.

3. *Los intelectuales forman parte de la pequeña burguesía.* La insatisfacción con el punto de vista de la polarización simple de la lucha de clases ha llevado a muchos marxistas a tratar a los intelectuales como un segmento de la pequeña burguesía. Para distinguirlos de la pequeña burguesía tradicional de los tenderos y artesanos, la pequeña burguesía intelectual ha sido, a menudo, considerada parte de la “nueva pequeña burguesía”. Uno de los autores que más sistemáticamente abogan por esta posición actualmente es Nicos Poulantzas especialmente en su libro *Las clases sociales en el capitalismo actual* [Madrid, Siglo XXI, 1977].

El punto de vista de que los intelectuales constituyen una nueva pequeña burguesía se apoya en dos afirmaciones complementarias; primero, que los intelectuales no pueden ser considerados como parte de la clase obrera; y segundo, que comparten una similitud fundamental en cuanto a su posición de clase con la pequeña burguesía tradicional.

Para apoyar la primera afirmación se utilizan una serie de argumentos; aparte de descartar el trabajo asalariado como criterio único para definir al proletariado, Poulantzas y otros han argumentado que los intelectuales deberían ser excluidos de la clase obrera debido a que son generalmente trabajadores improductivos⁷ y que no realizan trabajo manual. Mientras que estoy de acuerdo con Poulantzas en que los intelectuales (o al menos la mayor parte de los intelectuales) no son parte integrante de la clase obrera, no estoy de

⁷ Se habla aquí de trabajo improductivo en el sentido técnico marxista de trabajo que no produce plusvalor. Esto incluiría el trabajo de los empleados de banca, la mayor parte de los vendedores, burócratas de la administración, etc. Decir que el trabajo es improductivo en este sentido no quiere decir que no sea útil, sino simplemente que no produce nuevo valor (plusvalor) para el capital. Para una discusión más elaborada del trabajo improductivo véase James O'Connor, “Productive and unproductive labor” *Politics and Society*, vol. 5, 3, 1975.

acuerdo con los argumentos que utiliza para defender esta tesis.⁸ Examinemos cada uno de estos argumentos por separado.

Para hacer la afirmación de que el trabajo improductivo corresponde globalmente a una clase diferente que el trabajo productivo es necesario establecer que esta división corresponde a una división de intereses de clase *fundamentales*.⁹ El método esencial para valorar tales divisiones de los intereses fundamentales de clase es descifrar rigurosamente las relaciones sociales de producción y analizar las posiciones de categorías específicas de trabajadores en el seno, de esas relaciones. Las categorías de trabajadores que ocupan posiciones similares en el seno de las relaciones sociales de producción comparten, a nivel económico, los mismos intereses fundamentales de clase. En estos términos es muy difícil mantener que el trabajo improductivo ocupa una posición tajantemente diferente en el seno de las relaciones de producción respecto al trabajo productivo: como los trabajadores productivos, muchos trabajadores improductivos carecen por completo de control sobre sus procesos de trabajo, están completamente subordinados al capital, carecen de capacidad para controlar el trabajo de otros, etc. Ahora bien, puede ser cierto que la mayor parte de los intelectuales no entran dentro de la clase trabajadora, en estas dimensiones de las relaciones sociales (de hecho esto es lo que argumentaré al hablar de las posiciones contradictorias), pero es a causa de su posición en estas dimensiones y no por su estatus como trabajadores improductivos *per se* por lo que deben ser considerados como exteriores a la clase trabajadora.

El otro argumento de Poulantzas para excluir a los intelectuales de la clase obrera, el hecho de que son trabajadores mentales, resulta

⁸ Para una exposición y una crítica mucho más detalladas del análisis de las clases de Poulantzas, véase Erik Olin Wright, "Class boundaries in advanced capitalist societies", *New Left Review*, 98, 1976. Este ensayo ha sido revisado sustancialmente y publicado como capítulo 2 de mi *Class, crisis and the State*, Londres, NLB, 1978 [trad. española: Madrid, Siglo XXI].

⁹ Los intereses *fundamentales*, deben ser contrastados con los intereses *inmediatos*. Los intereses inmediatos son intereses definidos estrictamente en el marco de un modo de producción determinado. Son intereses que aceptan como un hecho el modo de producción. En el seno de la clase obrera, tales intereses inmediatos vienen definidos principalmente en términos de relaciones de mercado. Por otra parte, los intereses fundamentales son intereses definidos al nivel del modo de producción. Son intereses que ponen en tela de juicio el propio modo de producción, planeado la elección entre relaciones sociales de producción alternativas. Decir que las divisiones de clase básicas vienen definidas por los intereses fundamentales implica que las clases se ven definidas en última instancia por sus intereses en diferentes modos de producción, diferentes tipos de relaciones sociales.

más complejo. Para Poulantzas, la división entre el trabajo intelectual y el manual constituye la relación básica de dominación subordinación ideológica en la sociedad capitalista (es decir, el trabajo manual está subordinado al intelectual a nivel ideológico). Dado que las clases han de ser definidas tanto a nivel ideológico como a nivel económico, se sigue de ello, insiste Poulantzas, que dado que el trabajador intelectual domina al manual a nivel ideológico no puede formar parte de la clase obrera. Dado que los intelectuales son una categoría de los trabajadores mentales, también se sigue que los intelectuales no pertenecen a la clase obrera.

Si bien es posible que Poulantzas fuerce un tanto su análisis —argumentando que incluso las secretarías y los vendedores rutinizados son trabajadores mentales, y por tanto dominan ideológicamente a la clase obrera—, no obstante la línea central de su argumento me parece sustancialmente correcta. Yo sólo modificaría su posición en un aspecto importante: no es suficiente ser simplemente un trabajador intelectual para dominar a la clase obrera (incluso a nivel ideológico). Es también necesario ocupar una posición de dominio en el seno de los aparatos ideológicos. Un trabajador mental (tal como una secretaria) que carece de control sobre el proceso de producción ideológica no domina ideológicamente a la clase obrera. En estos términos, la mayor parte de los intelectuales —personas que se ocupan de la elaboración y la difusión de ideas— tendrían una cierta medida de control sobre la producción de ideología, y por tanto ocuparían una posición de dominación ideológica con respecto a la clase obrera. Este punto será desarrollado más exhaustivamente en la discusión de las posiciones contradictorias en el seno de las relaciones de clase, más adelante.

Resulta insuficiente, por supuesto, establecer simplemente que los intelectuales no forman parte de la clase obrera; resulta igualmente importante comprender a qué clase pertenecen. Se han utilizado dos tipos de razonamiento para apoyar la afirmación de que los intelectuales comparten una posición común de clase con la pequeña burguesía. En primer lugar, como argumentaban Judah Hill, se puede considerar que ciertas categorías de intelectuales —especialmente los profesionales— “poseen” sus propios medios de producción incluso cuando están empleados por el capital. Es decir, tales intelectuales poseen unas intangibles habilidades intelectuales (especialmente cuando tales habilidades vienen certificadas por títulos y diplomas), y dado que estas habilidades constituyen los “medios de producción” clave de los intelectuales, éstos deberían ser

considerados como propietarios exactamente igual que la pequeña burguesía tradicional.¹⁰

La dificultad básica de esta posición es que confunde un análisis de clase en términos de relaciones de mercado con una definición de las clases a nivel de las relaciones de producción. Mientras que es cierto, como argumentaba Weber hace sesenta años, que los intelectuales poseen ciertas habilidades especiales que les ofrecen algunas ventajas en el mercado, no tienen por qué tener necesariamente control sobre la *utilización* de esas habilidades intelectuales en el seno de la producción. Excepto en el caso de los profesionales liberales, la mayor parte de los intelectuales ceden un grado considerable de control sobre el uso de sus “medios de producción” intelectuales al aceptar un empleo del capital o el Estado. Por tanto, para mantener que ciertas categorías de asalariados intelectuales “poseen” genuinamente sus propios medios de producción es necesario examinar sistemáticamente el proceso de trabajo al que se incorporan como trabajadores intelectuales y ver hasta qué punto conservan de hecho la dirección de su producción intelectual. En general, los asalariados intelectuales tendrían mucho menos control sobre su proceso de trabajo que la pequeña burguesía tradicional.

El segundo argumento que apoya la afirmación de que los intelectuales forman parte de la pequeña burguesía se centra en una hipotética unidad ideológica entre la nueva y la vieja pequeña burguesía. Este tema ha sido subrayado por Poulantzas en diversos trabajos. Poulantzas argumenta que el propio carácter del trabajo intelectual, y las estructuras organizativas en el seno de las cuales es realizado en la sociedad capitalista, garantizan que los intelectuales se vean caracterizados por los elementos esenciales de la ideología pequeñoburguesa: individualismo, veneración del Estado, arribismo, etc. A pesar de que el trabajo asalariado intelectual está implicado en unas relaciones sociales de producción enteramente diferentes de las de la pequeña burguesía a nivel económico —la pequeña burguesía está constituida por productores independientes en el seno de unas relaciones de producción mercantiles simples, mientras que los intelectuales están directamente subordinados al capital en el seno de las relaciones de producción capitalistas—, no obstante, argumenta Poulantzas, la congruencia de sus ideologías es tan fuerte como para fundirlos en una sola clase.

¹⁰ Véase Judah Hill, “Class analysis: the United Sintes in the 1970”, P. O. Box 8494, Emeryville (California), 1975.

De nuevo, como en la visión de los intelectuales en términos de una simple polarización, existe un atractivo especial en este análisis. Ciertamente, en términos de conciencia de clase existen claras tendencias en muchas sociedades capitalistas a que los intelectuales tengan visiones del mundo similares a las de la pequeña burguesía, y, al menos en ciertas circunstancias, a que adopten las mismas orientaciones políticas. Y aun así, el punto de vista de que los intelectuales se insertan firmemente en la pequeña burguesía resulta tan insatisfactorio como el punto de vista de que son parte de la clase obrera. Para empezar, la afirmación de que la ideología de los asalariados intelectuales es esencialmente idéntica a la de la pequeña burguesía tradicional requiere una interpretación extremadamente limitada de la ideología. Por ejemplo, mientras que ambas categorías pueden mantener ideologías altamente individualistas, el individualismo de la pequeña burguesía tradicional (sé tu propio jefe, individualismo a machamartillo) es totalmente antitético del individualismo de los intelectuales empleados (competitividad organizativa, arribismo). El igualar ambos es oscurecer las relaciones sociales fundamentalmente diferentes en el seno de las cuales operan estas ideologías individualistas.

Aún más importante; aunque se diera el caso de que las ideologías de los intelectuales y de la pequeña burguesía tradicional fueran idénticas, resultaría insatisfactorio desde una perspectiva marxista otorgar tanto peso a la conciencia y a la ideología como para que puedan obliterar por completo las diferencias fundamentales en las relaciones económicas que caracterizan a la mayor parte de los intelectuales y a la pequeña burguesía tradicional. Mientras que el trabajo asalariado puede no ser un criterio suficiente para definir una clase, es desde luego un criterio importante, ya que determina el contorno básico de la relación con el capital. Esta diferencia en cuanto a la relación con el capital significa que existen diferencias básicas —no simplemente marginales— en la relación de la pequeña burguesía y los asalariados intelectuales con las luchas de la clase obrera y las luchas por el socialismo. Específicamente, dado que son pequeños propietarios, la pequeña burguesía tiene una relación mucho más contradictoria con el socialismo que los intelectuales asalariados. Esto no quiere decir que los intereses de clase de los intelectuales y la clase obrera sean idénticos —de hecho, si lo fueran diríamos que el trabajo intelectual forma parte de la clase obrera—, sino, sencillamente, que sus intereses son en general menos opuestos que los de la clase obrera y la pequeña burguesía tradicional.

4. *Los intelectuales forman parte de una clase de profesionales y directivos.* Si los intelectuales no deberían ser considerados en general como parte de la clase obrera, y si tampoco forman parte de la pequeña burguesía, tal vez entonces deberían ser considerados como parte de una clase completamente diferente, una clase distinta a la clase obrera, la pequeña burguesía y la burguesía. Esta es esencialmente la afirmación de Bárbara y John Ehrenreich en su análisis de la clase profesional-directiva. Definen la CPD como

Una clase formada por aquellos trabajadores mentales asalariados que no poseen los medios de producción y cuya principal función en la división social del trabajo puede ser descrita, a grandes rasgos, como la reproducción de la cultura capitalista y las relaciones de clase capitalistas. ("The professional managerial class", *Radical America*, vol. II, 2, 1977, p. 13.)

La mayor parte de los intelectuales asalariados entrarían en esta clase, dada su definición. La cuestión entonces se convierte en saber si la CPD puede ser realmente considerada como una "clase" en el mismo sentido en que la burguesía y el proletariado son clases, o si lo que los Ehrenreich llaman clase debería ser considerado como algún otro tipo de realidad social. Una cosa es argumentar que las diversas categorías agrupadas bajo las siglas CPD tienen una cierta unidad interna, y otra identificar la lógica de esa unidad con una unidad de clase.

Los Ehrenreich utilizan dos argumentos básicos para apoyar la tesis de que la CPD es de hecho una clase. En primer lugar argumentan que la CPD está "caracterizada por una relación común con los fundamentos económicos de la sociedad, los medios de producción y los esquemas socialmente organizados de distribución y consumo" (p. 12). En segundo lugar argumentan que la CPD es una clase porque está "caracterizada por una existencia social y cultural coherente", esto es, que sus miembros "comparten un estilo de vida, una base cultural, unas redes de parentesco, unos esquemas de consumo, unos hábitos de trabajo y unas creencias comunes" (p. 12). Este segundo argumento depende claramente del primero, dado que muchas otras categorías sociales que no constituyen una clase se ven caracterizadas por una existencia cultural y social coherente (por ejemplo, los granjeros, los leñadores, los marineros). Tan sólo si se establece que los componentes de la CPD mantienen, de hecho, una "relación común con la base económica de la sociedad" podrá considerarse que este segundo argumento refuerza su existencia como clase.

¿Sobre qué base argumentan entonces los Ehrenreich que la CPD constituye una posición distintiva respecto a los medios de producción? Su argumento esencial es que la CPD viene definida por una *función* distintiva en la división social del trabajo, a saber, la función de reproducir las relaciones de clase. El concepto de una relación común con los “fundamentos económicos” de la sociedad se identifica, por tanto, con una función común en la división del trabajo, y las posiciones que realizan una función común se consideran entonces como una clase.¹¹

Como en el análisis de Gramsci, el análisis funcional de los Ehrenreich resulta extremadamente importante para una comprensión adecuada de los intelectuales (o cualquier otro miembro de la CPD), particularmente en términos de su función en la lucha de clases. No obstante, una identificación tan simplista de la posición de clase de los intelectuales con su función en la división social del trabajo tiende a fusionar los aspectos funcionales y estructurales de clase en una sola dimensión, y esto oscurece el carácter de clase esencial del trabajo intelectual asalariado, en lugar de clarificarlo. Esto es así por dos razones básicas: 1, el problema de la no coincidencia de las posiciones estructurales con las funciones, y 2, la necesidad de comprender las relaciones sociales internas a la realización de las funciones. Echemos una breve ojeada a estas cuestiones.

Las funciones en el seno de una sociedad, incluyendo la función de reproducción de las relaciones de clase, han de ser comprendidas como *dimensiones* de las relaciones sociales, no como *categorías* posicionales. Si bien es desde luego cierto que algunas categorías están más “especializadas” que otras en la función de reproducción, *todas* las posiciones determinadas por las relaciones capitalistas de producción contribuyen en mayor o menor medida a la reproducción de esas relaciones. El análisis de Marx del fetichismo de la mercancía, por ejemplo, es, en parte, un análisis de la forma en que la reproducción de las relaciones de producción capitalistas se enraíza en el mismo carácter de estas relaciones, no siendo, por tanto, responsabilidad de una ocupación especializada. Así, los trabajadores manuales de la cadena de producción también realizan la “función” de reproducir las relaciones capitalistas de producción, por el mero hecho de participar en la producción capitalista.

¹¹ Para una amplia defensa teórica de tales definiciones funcionales de las relaciones de clas, véase G. Carchedi, *On the economic identification of social classes*, Londres, Rouladge and Kegan Paul, 1977.

A pesar de esto, es cierto que algunas posiciones se especializan en esta función de reproducción. Pero es igualmente cierto que incluso estas posiciones reproductivas especializadas, en general, no son exclusivamente reproductivas. Los ingenieros, por ejemplo, no funcionan simplemente para reproducir las relaciones de clase capitalistas. También diseñan puentes y, de otra manera, realizan funciones claramente productivas. ¿Por qué se debería definir su posición de clase exclusivamente por su función reproductiva? ¿Sobre qué base es posible establecer qué función es “más” importante? E incluso aunque esto pudiera determinarse, ¿por qué debería tener la función dominante en potencial definitivo para la determinación de la posición de clase? Estas preguntas ilustran algunas de las dificultades que existen para identificar simplemente clase y función.

El problema de esta simple identificación resulta aún más claro cuando examinamos las relaciones sociales en el seno de las cuales se da la función especializada de reproducir las relaciones de clase. Si examinamos algún aparato ideológico —un colegio, un periódico, una iglesia— queda inmediatamente en claro que no todas las posiciones dentro del aparato tienen la misma relación estructural con respecto a las funciones del aparato en cuestión. Algunas posiciones están implicadas en el control de la totalidad del aparato. Otras comprenden el control sobre actividades específicas en el seno del aparato, tal vez simplemente la propia actividad de la posición, peor ningún control en absoluto sobre el aparato en su totalidad. Y finalmente, algunas posiciones están completamente excluidas de control alguno sobre el aparato o sobre actividades determinadas dentro de él. En términos de su relación con la estructura de clase como un todo, todas las posiciones comprendidas dentro de un aparato ideológico sirven a la “función” de reproducir las relaciones capitalistas de clase, ya que el propio aparato ideológico sirve para esto. Pero está claro que las diferentes posiciones en el seno del aparato tienen relaciones estructurales enteramente diferentes con respecto a la función de éste.

Los Ehrenreich son perfectamente conscientes de estas gradaciones posicionales en el seno de un único aparato funcional, y esto les lleva a argumentar que ciertas posiciones en el seno de la CPD están “más cercanas” a la clase obrera, mientras que otras están “más cercanas” a la burguesía. Una enfermera diplomada, por ejemplo, constituye una posición en el seno de la CPD cercana a la clase obrera; un directivo medio-alto de una gran empresa constituye una posición dentro de la CPD cercana a la burguesía. Los Ehrenreich subra-

¿Sobre qué base argumentan entonces los Ehrenreich que la CPD constituye una posición distintiva respecto a los medios de producción? Su argumento esencial es que la CPD viene definida por una *función* distintiva en la división social del trabajo, a saber, la función de reproducir las relaciones de clase. El concepto de una relación común con los “fundamentos económicos” de la sociedad se identifica, por tanto, con una función común en la división del trabajo, y las posiciones que realizan una función común se consideran entonces como una clase.¹¹

Como en el análisis de Gramsci, el análisis funcional de los Ehrenreich resulta extremadamente importante para una comprensión adecuada de los intelectuales (o cualquier otro miembro de la CPD), particularmente en términos de su función en la lucha de clases. No obstante, una identificación tan simplista de la posición de clase de los intelectuales con su función en la división social del trabajo tiende a fusionar los aspectos funcionales y estructurales de clase en una sola dimensión, y esto oscurece el carácter de clase esencial del trabajo intelectual asalariado, en lugar de clarificarlo. Esto es así por dos razones básicas: 1, el problema de la no coincidencia de las posiciones estructurales con las funciones, y 2, la necesidad de comprender las relaciones sociales internas a la realización de las funciones. Echemos una breve ojeada a estas cuestiones.

Las funciones en el seno de una sociedad, incluyendo la función de reproducción de las relaciones de clase, han de ser comprendidas como *dimensiones* de las relaciones sociales, no como *categorías* posicionales. Si bien es desde luego cierto que algunas categorías están más “especializadas” que otras en la función de reproducción, *todas* las posiciones determinadas por las relaciones capitalistas de producción contribuyen en mayor o menor medida a la reproducción de esas relaciones. El análisis de Marx del fetichismo de la mercancía, por ejemplo, es, en parte, un análisis de la forma en que la reproducción de las relaciones de producción capitalistas se enraíza en el mismo carácter de estas relaciones, no siendo, por tanto, responsabilidad de una ocupación especializada. Así, los trabajadores manuales de la cadena de producción también realizan la “función” de reproducir las relaciones capitalistas de producción, por el mero hecho de participar en la producción capitalista.

¹¹ Para una amplia defensa teórica de tales definiciones funcionales de las relaciones de clas, véase G. Carchedi, *On the economic identification of social classes*, Londres, Rouladge and Kegan Paul, 1977.

A pesar de esto, es cierto que algunas posiciones se especializan en esta función de reproducción. Pero es igualmente cierto que incluso estas posiciones reproductivas especializadas, en general, no son exclusivamente reproductivas. Los ingenieros, por ejemplo, no funcionan simplemente para reproducir las relaciones de clase capitalistas. También diseñan puentes y, de otra manera, realizan funciones claramente productivas. ¿Por qué se debería definir su posición de clase exclusivamente por su función reproductiva? ¿Sobre qué base es posible establecer qué función es “más” importante? E incluso aunque esto pudiera determinarse, ¿por qué debería tener la función dominante en potencial definitivo para la determinación de la posición de clase? Estas preguntas ilustran algunas de las dificultades que existen para identificar simplemente clase y función.

El problema de esta simple identificación resulta aún más claro cuando examinamos las relaciones sociales en el seno de las cuales se da la función especializada de reproducir las relaciones de clase. Si examinamos algún aparato ideológico —un colegio, un periódico, una iglesia— queda inmediatamente en claro que no todas las posiciones dentro del aparato tienen la misma relación estructural con respecto a las funciones del aparato en cuestión. Algunas posiciones están implicadas en el control de la totalidad del aparato. Otras comprenden el control sobre actividades específicas en el seno del aparato, tal vez simplemente la propia actividad de la posición, peor ningún control en absoluto sobre el aparato en su totalidad. Y finalmente, algunas posiciones están completamente excluidas de control alguno sobre el aparato o sobre actividades determinadas dentro de él. En términos de su relación con la estructura de clase como un todo, todas las posiciones comprendidas dentro de un aparato ideológico sirven a la “función” de reproducir las relaciones capitalistas de clase, ya que el propio aparato ideológico sirve para esto. Pero está claro que las diferentes posiciones en el seno del aparato tienen relaciones estructurales enteramente diferentes con respecto a la función de éste.

Los Ehrenreich son perfectamente conscientes de estas gradaciones posicionales en el seno de un único aparato funcional, y esto les lleva a argumentar que ciertas posiciones en el seno de la CPD están “más cercanas” a la clase obrera, mientras que otras están “más cercanas” a la burguesía. Una enfermera diplomada, por ejemplo, constituye una posición en el seno de la CPD cercana a la clase obrera; un directivo medio-alto de una gran empresa constituye una posición dentro de la CPD cercana a la burguesía. Los Ehrenreich subra-

yan que la CPD no es una clase homogénea, sino que está caracterizada por una jerarquía interna de estratos que refleja una gama de posiciones estructurales en el seno de la función común de reproducir las relaciones sociales capitalistas.

Ahora bien, afirmar que tanto una enfermera diplomada como un directivo medio-alto son miembros de la misma clase (si bien están en diferentes “extremos” de la clase) implica que están más “cerca” uno de la otra de lo que lo están respecto a cualquier otra clase. Si no fuera éste el caso —si de hecho las enfermeras diplomadas estuvieran “más cercanas” a los obreros que a los directivos medios-altos—, entonces no tendría sentido considerarles miembros de la misma clase. Una enfermera diplomada y un directivo medio-alto pueden, no obstante, tener algo en común en el terreno de las relaciones de clase, pero no se puede entender que esos rasgos comunes les definan como miembros de una única clase coherente. Este no es un problema de la ambigüedad de las “fronteras” entre las clases, sino de la propia lógica de designar a una serie de posiciones en el seno de la división social del trabajo como una clase.¹²

La cuestión de si la CPD puede ser considerada una clase ha de ser planteada, por tanto, de la siguiente manera: ¿tiene sentido considerar a una serie de posiciones, que en algún sentido están situadas “entre” la clase obrera y la burguesía, y entre las que algunas están más cerca de la burguesía y otras más próximas a la clase obrera, como una “clase”, en el mismo sentido en que son clases la burguesía y el proletariado? Existe una fuerte tradición en el seno del marxismo de asumir que todas las posiciones en el seno de la división social del trabajo deben encajar firmemente en una u otra clase. Si se acepta este supuesto, entonces, por omisión, todas las posiciones entre la clase obrera y la burguesía tienen, necesariamente, que constituir una clase.

Pero existe una alternativa: en vez de insistir en que todas las posiciones en el seno de la división social del trabajo encajen firmemente en una clase, algunas posiciones pueden considerarse *objetivamente escindidas entre las clases*. Si se entiende por clases relaciones sociales, y no cosas, esto implica que ciertas posiciones tienen un ca-

¹² A pesar de todas las dificultades para definir rigurosamente las “fronteras” entre clase capitalista y la clase obrera, nadie sugiere que la aristocracia obrera (por ejemplo) esté más “cerca” de la clase capitalista que un obrero calificado. La metáfora espacial es simple y llanamente inadecuada para la discusión de las relaciones de clase. Un trabajador altamente privilegiado puede estar más integrado en la sociedad capitalista, puede aceptar la hegemonía ideológica de la burguesía más profundamente y así sucesivamente, pero no está más cercano a los capitalistas como clase.

rácter contradictorio en el seno de esas relaciones sociales. En ciertas dimensiones de las relaciones de clase comparten las características de la burguesía; en otras comparten las características de la clase obrera. Si se adopta esta postura, resulta muy fácil ver en qué sentido algunas de estas posiciones pueden ser consideradas “más próximas” a la clase obrera que otras. Están más cercanas precisamente en el sentido de que su posición en el seno de las relaciones sociales de producción comparte más características de la clase obrera que de la burguesía. Desde este punto de vista, en vez de ver a los intelectuales como parte de una clase distinta, con su propia coherencia y unidad, podemos verlos situados en una posición contradictoria en el seno de las relaciones de clase.

5. *Los intelectuales ocupan posiciones contradictorias en el seno de las relaciones de clase.* Permítaseme explicar más rigurosamente lo que quiero decir exactamente con la expresión “posiciones contradictorias en el seno de las relaciones de clase”. En cierto sentido, por supuesto, todas las posiciones de clase en la sociedad capitalista son “contradictorias”, dado que el propio concepto de clase expresa relaciones fundamentalmente antagónicas. Algunas posiciones, no obstante, son contradictorias en un doble sentido: en primer lugar reflejan las relaciones antagónicas de clase básicas de la sociedad capitalista, y en segundo lugar están desgarradas objetivamente entre las clases antagonistas de tal sociedad. Tales posiciones no tienen una identidad de clase por derecho propio; su carácter de clase se ve estrictamente determinado por su posición entre dos clases. Es a causa de esta naturaleza derivada de su posición de clase por lo que tales posiciones son llamadas posiciones contradictorias en el seno de las relaciones de clase.

Dado que las clases en la sociedad capitalista no pueden ser definidas simplemente en términos de relaciones económicas, tampoco pueden serlo las posiciones contradictorias. Resulta esencial especificar el carácter contradictorio de ciertas posiciones tanto al nivel de las relaciones políticas e ideológicas de clase como al nivel de las relaciones sociales de producción. En el caso de los intelectuales, resultará especialmente importante examinar su posición de clase a nivel ideológico. El resultado, como veremos, es que los *intelectuales ocupan típicamente una localización contradictoria de clase entre la clase obrera y la pequeña burguesía a nivel económico, pero entre la clase obrera y la burguesía a nivel ideológico.*

yan que la CPD no es una clase homogénea, sino que está caracterizada por una jerarquía interna de estratos que refleja una gama de posiciones estructurales en el seno de la función común de reproducir las relaciones sociales capitalistas.

Ahora bien, afirmar que tanto una enfermera diplomada como un directivo medio-alto son miembros de la misma clase (si bien están en diferentes “extremos” de la clase) implica que están más “cerca” uno de la otra de lo que lo están respecto a cualquier otra clase. Si no fuera éste el caso —si de hecho las enfermeras diplomadas estuvieran “más cercanas” a los obreros que a los directivos medios-altos—, entonces no tendría sentido considerarles miembros de la misma clase. Una enfermera diplomada y un directivo medio-alto pueden, no obstante, tener algo en común en el terreno de las relaciones de clase, pero no se puede entender que esos rasgos comunes les definan como miembros de una única clase coherente. Este no es un problema de la ambigüedad de las “fronteras” entre las clases, sino de la propia lógica de designar a una serie de posiciones en el seno de la división social del trabajo como una clase.¹²

La cuestión de si la CPD puede ser considerada una clase ha de ser planteada, por tanto, de la siguiente manera: ¿tiene sentido considerar a una serie de posiciones, que en algún sentido están situadas “entre” la clase obrera y la burguesía, y entre las que algunas están más cerca de la burguesía y otras más próximas a la clase obrera, como una “clase”, en el mismo sentido en que son clases la burguesía y el proletariado? Existe una fuerte tradición en el seno del marxismo de asumir que todas las posiciones en el seno de la división social del trabajo deben encajar firmemente en una u otra clase. Si se acepta este supuesto, entonces, por omisión, todas las posiciones entre la clase obrera y la burguesía tienen, necesariamente, que constituir una clase.

Pero existe una alternativa: en vez de insistir en que todas las posiciones en el seno de la división social del trabajo encajen firmemente en una clase, algunas posiciones pueden considerarse *objetivamente escindidas entre las clases*. Si se entiende por clases relaciones sociales, y no cosas, esto implica que ciertas posiciones tienen un ca-

¹² A pesar de todas las dificultades para definir rigurosamente las “fronteras” entre clase capitalista y la clase obrera, nadie sugiere que la aristocracia obrera (por ejemplo) esté más “cerca” de la clase capitalista que un obrero calificado. La metáfora espacial es simple y llanamente inadecuada para la discusión de las relaciones de clase. Un trabajador altamente privilegiado puede estar más integrado en la sociedad capitalista, puede aceptar la hegemonía ideológica de la burguesía más profundamente y así sucesivamente, pero no está más cercano a los capitalistas como clase.

rácter contradictorio en el seno de esas relaciones sociales. En ciertas dimensiones de las relaciones de clase comparten las características de la burguesía; en otras comparten las características de la clase obrera. Si se adopta esta postura, resulta muy fácil ver en qué sentido algunas de estas posiciones pueden ser consideradas “más próximas” a la clase obrera que otras. Están más cercanas precisamente en el sentido de que su posición en el seno de las relaciones sociales de producción comparte más características de la clase obrera que de la burguesía. Desde este punto de vista, en vez de ver a los intelectuales como parte de una clase distinta, con su propia coherencia y unidad, podemos verlos situados en una posición contradictoria en el seno de las relaciones de clase.

5. *Los intelectuales ocupan posiciones contradictorias en el seno de las relaciones de clase.* Permítaseme explicar más rigurosamente lo que quiero decir exactamente con la expresión “posiciones contradictorias en el seno de las relaciones de clase”. En cierto sentido, por supuesto, todas las posiciones de clase en la sociedad capitalista son “contradictorias”, dado que el propio concepto de clase expresa relaciones fundamentalmente antagónicas. Algunas posiciones, no obstante, son contradictorias en un doble sentido: en primer lugar reflejan las relaciones antagónicas de clase básicas de la sociedad capitalista, y en segundo lugar están desgarradas objetivamente entre las clases antagonistas de tal sociedad. Tales posiciones no tienen una identidad de clase por derecho propio; su carácter de clase se ve estrictamente determinado por su posición entre dos clases. Es a causa de esta naturaleza derivada de su posición de clase por lo que tales posiciones son llamadas posiciones contradictorias en el seno de las relaciones de clase.

Dado que las clases en la sociedad capitalista no pueden ser definidas simplemente en términos de relaciones económicas, tampoco pueden serlo las posiciones contradictorias. Resulta esencial especificar el carácter contradictorio de ciertas posiciones tanto al nivel de las relaciones políticas e ideológicas de clase como al nivel de las relaciones sociales de producción. En el caso de los intelectuales, resultará especialmente importante examinar su posición de clase a nivel ideológico. El resultado, como veremos, es que los *intelectuales ocupan típicamente una localización contradictoria de clase entre la clase obrera y la pequeña burguesía a nivel económico, pero entre la clase obrera y la burguesía a nivel ideológico.*

burguesía a nivel económico, pero entre la clase obrera y la burguesía a nivel ideológico.

A nivel de las relaciones sociales de producción existen tres posiciones contradictorias básicas en el seno de las relaciones de clase en la sociedad capitalista:

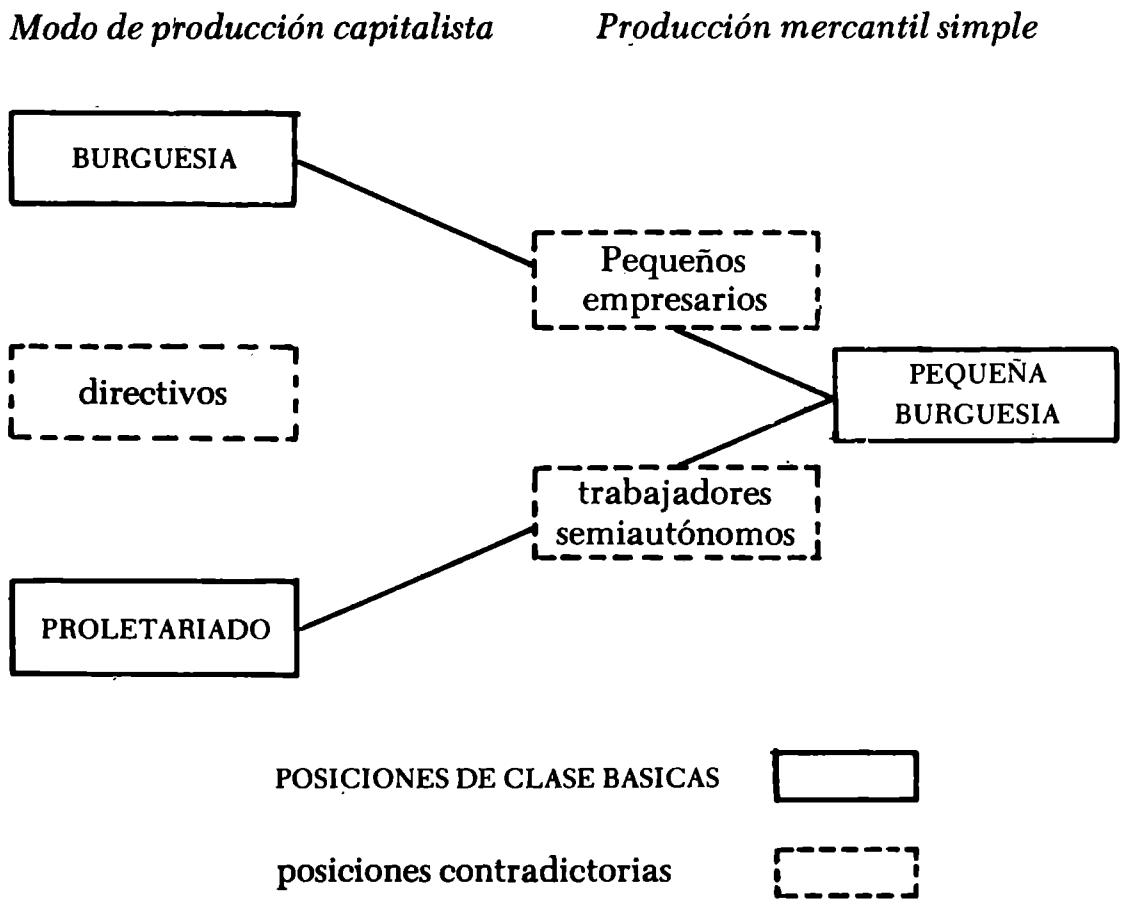
1. Los *directivos* ocupan una posición contradictoria entre la clase obrera y la burguesía.

2. Los *pequeños empresarios* ocupan una posición contradictoria entre la burguesía y la pequeña burguesía.

3. Los *trabajadores semiautónomos* ocupan una posición contradictoria entre la pequeña burguesía y la clase obrera.

Estas tres posiciones de clase se ven ilustradas esquemáticamente en la gráfica. La tercera categoría es especialmente importante en el contexto actual, dado que gran cantidad de trabajo asalariado inte-

POSICIONES CONTRADICTORIAS DENTRO DE LAS RELACIONES DE CLASE A NIVEL DE LAS RELACIONES SOCIALES DE PRODUCCION



lectual entra dentro de esta posición. Observémosla un poco más atentamente.¹³

Para comprender la categoría de trabajador semiautónomo —la posición de ~~clase~~ contradictoria entre la pequeña burguesía y el proletariado— necesitamos observar el proceso de trabajo característico de la pequeña burguesía y el proletariado. La característica distintiva del proceso de trabajo de la pequeña burguesía es que el productor pequeñoburgués controla directamente el proceso de trabajo. En palabras sencillas, el pequeñoburgués es su propio jefe. El ritmo de trabajo, las herramientas y procedimientos utilizados, la programación del trabajo, el producto resultante, etc., están todos ellos bajo el control del productor directo. Por otra parte, en la producción capitalista el trabajador tiene en el mejor de los casos un control marginal sobre el proceso de trabajo inmediato. En el caso extremo de la cadena de producción regulada por los principios de la dirección científica, el trabajador se convierte en una máquina humana sin autonomía ninguna. En estos términos, los trabajadores semiautónomos son trabajadores asalariados que, por una serie de razones, mantienen niveles elevados de genuino control sobre su proceso de trabajo. Como trabajadores están empleados por el capital (o el Estado), como trabajadores deben vender su fuerza de trabajo para sobrevivir, y como trabajadores no controlan el aparato de producción en su conjunto. Pero a diferencia de los obreros y al igual que la pequeña burguesía, sí tienen un control real sobre gran parte de su propio proceso de trabajo. Esta es a menudo la situación del trabajador intelectual asalariado. Tal vez el ejemplo más claro sea un profesor adjunto, al menos en una

¹³ A causa de las limitaciones de espacio no discutiremos sistemáticamente el caso de los directivos y pequeños empresarios en este ensayo. Para una discusión detallada de estas posiciones contradictorias de clase, véase Erik O. Wright, *Class, crisis and the State*, *op. cit.*, especialmente el capítulo 2. El carácter esencial de estas posiciones puede ser resumido muy brevemente de la siguiente manera: los pequeños empresarios son similares a los capitalistas en la medida en la que explotan a la fuerza de trabajo, pero son similares a la pequeña burguesía en cuanto que ellos y los miembros de sus familias se incorporan directamente a la producción, de tal forma que gran parte del plus trabajo generado en la producción procede directamente de su trabajo y no simplemente del de sus trabajadores. Los directivos son similares a los capitalistas en cuanto controlan directamente la actividad laboral de los trabajadores en el seno de la producción y pueden controlar la utilización del capital físico, y en algunas circunstancias también del capital monetario. Son similares a los trabajadores en cuanto están controlados por los capitalistas. Se ven excluidos del control del proceso de acumulación global y venden al capital su fuerza de trabajo como una mercancía.

burguesía a nivel económico, pero entre la clase obrera y la burguesía a nivel ideológico.

A nivel de las relaciones sociales de producción existen tres posiciones contradictorias básicas en el seno de las relaciones de clase en la sociedad capitalista:

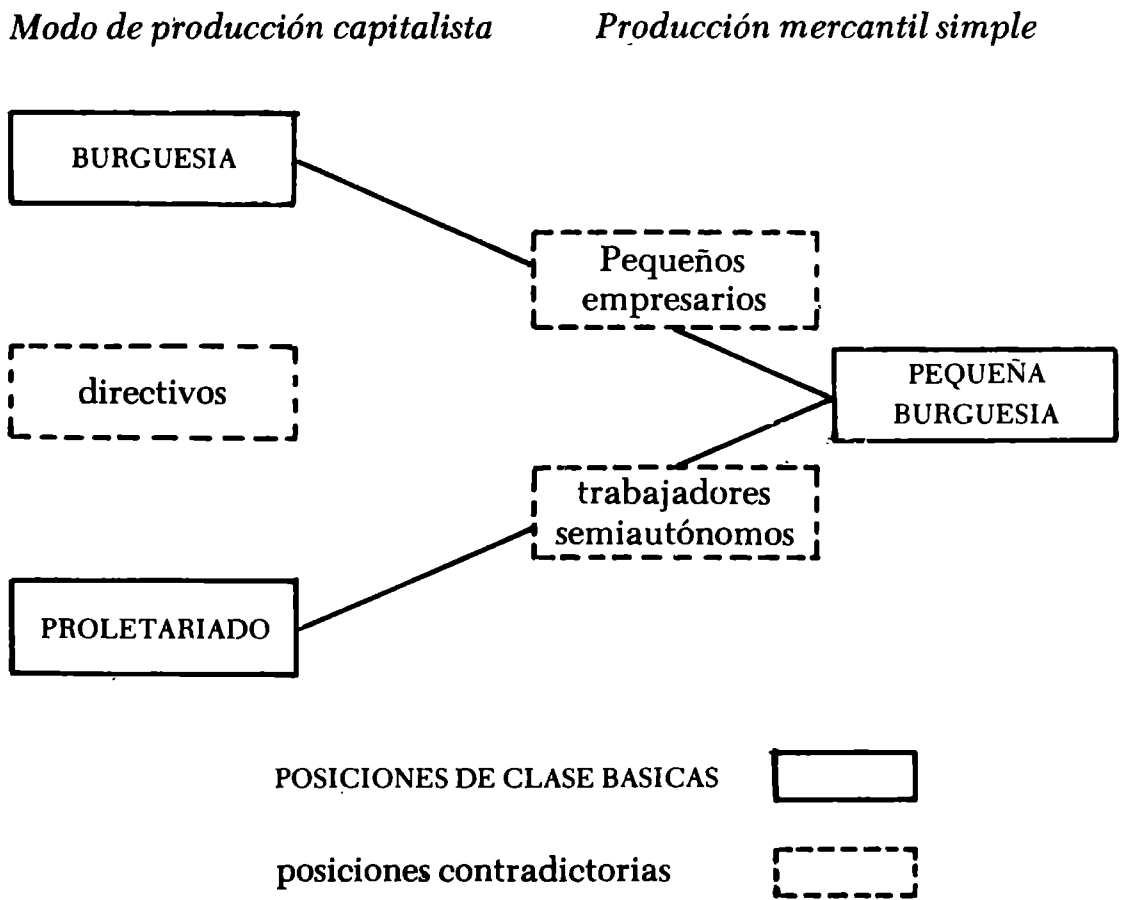
1. Los *directivos* ocupan una posición contradictoria entre la clase obrera y la burguesía.

2. Los *pequeños empresarios* ocupan una posición contradictoria entre la burguesía y la pequeña burguesía.

3. Los *trabajadores semiautónomos* ocupan una posición contradictoria entre la pequeña burguesía y la clase obrera.

Estas tres posiciones de clase se ven ilustradas esquemáticamente en la gráfica. La tercera categoría es especialmente importante en el contexto actual, dado que gran cantidad de trabajo asalariado inte-

POSICIONES CONTRADICTORIAS DENTRO DE LAS RELACIONES DE CLASE A NIVEL DE LAS RELACIONES SOCIALES DE PRODUCCION



lectual entra dentro de esta posición. Observémosla un poco más atentamente.¹³

Para comprender la categoría de trabajador semiautónomo — la posición de ~~clase~~ contradictoria entre la pequeña burguesía y el proletariado — necesitamos observar el proceso de trabajo característico de la pequeña burguesía y el proletariado. La característica distintiva del proceso de trabajo de la pequeña burguesía es que el productor pequeñoburgués controla directamente el proceso de trabajo. En palabras sencillas, el pequeñoburgués es su propio jefe. El ritmo de trabajo, las herramientas y procedimientos utilizados, la programación del trabajo, el producto resultante, etc., están todos ellos bajo el control del productor directo. Por otra parte, en la producción capitalista el trabajador tiene en el mejor de los casos un control marginal sobre el proceso de trabajo inmediato. En el caso extremo de la cadena de producción regulada por los principios de la dirección científica, el trabajador se convierte en una máquina humana sin autonomía ninguna. En estos términos, los trabajadores semiautónomos son trabajadores asalariados que, por una serie de razones, mantienen niveles elevados de genuino control sobre su proceso de trabajo. Como trabajadores están empleados por el capital (o el Estado); como trabajadores deben vender su fuerza de trabajo para sobrevivir, y como trabajadores no controlan el aparato de producción en su conjunto. Pero a diferencia de los obreros y al igual que la pequeña burguesía, sí tienen un control real sobre gran parte de su propio proceso de trabajo. Esta es a menudo la situación del trabajador intelectual asalariado. Tal vez el ejemplo más claro sea un profesor adjunto, al menos en una

¹³ A causa de las limitaciones de espacio no discutiremos intensamente el caso de los directivos y pequeños empresarios en este ensayo. Para una discusión detallada de estas posiciones contradictorias de clase, véase Erik O. Wright, *Class, crisis and the State*, op. cit., especialmente el capítulo 2. El carácter esencial de estas posiciones puede ser resumido muy brevemente de la siguiente manera: los pequeños empresarios son similares a los capitalistas en la medida en la que explotan a la fuerza de trabajo, pero son similares a la pequeña burguesía en cuanto que ellos y los miembros de sus familias se incorporan directamente a la producción, de tal forma que gran parte del plusvalor generado en la producción pertenece directamente de su trabajo y no simplemente del de sus trabajadores. Los directivos son similares a los capitalistas en cuanto controlan directamente la actividad laboral de los trabajadores en el seno de la producción y pueden controlar la utilización del capital fijo, y en algunas circunstancias también del capital monetario. Son similares a los trabajadores en cuanto están controlados por los capitalistas. Se ven excluidos del control del proceso de acumulación global y venden al capital su fuerza de trabajo como una mercancía.

universidad de élite. Mientras que los profesores adjuntos carecen desde luego de control sobre el aparato educativo en su totalidad, sí tienen un grado sustancial de control sobre lo que enseñan, qué tipo de investigaciones realizan, cómo distribuyen su tiempo, etc.

Describir una posición de clase como una posición contradictoria entre la pequeña burguesía y la clase obrera significa que tal posición comparte *simultáneamente* ciertos intereses de la clase obrera y la pequeña burguesía, pero no tiene intereses idénticos a los de ninguna de ellas. Está objetivamente desgarrada entre las dos clases. Para tales posiciones de clase, el socialismo promete simultáneamente una liberación genuina de las distorsiones y la dominación del capital y una reducción de la autonomía *individual* que experimentan bajo las condiciones del capitalismo. Es decir, en una sociedad socialista el proceso de trabajo es controlado colectivamente por los trabajadores, en vez de serlo por el capital o por los trabajadores individuales. Esto quiere decir que en muchos casos, especialmente para gran parte de los trabajadores intelectuales, el socialismo implica una reducción del control individual sobre la actividad laboral inmediata. En este sentido el trabajador asalariado intelectual, en mayor o menor medida, ocupa una posición de clase contradictoria entre la clase obrera y la pequeña burguesía.¹⁴

El trabajo intelectual, no obstante, no puede ser analizado exclusivamente en términos de las relaciones sociales de producción. Como subrayan correctamente los Ehrenreich, los intelectuales tienen papeles clave en la reproducción de la cultura y las relaciones sociales capitalistas, y esto quiere decir que es esencial analizar su posición de clase a nivel ideológico.

Para hacer esto debemos identificar primero las relaciones de clase básicas a nivel ideológico. Sin entrar en demasiados detalles sobre

¹⁴ Las palabras "en mayor o menor medida" son de considerable importancia en esta afirmación. Las diferentes categorías intelectuales disfrutarán de diferentes grados de autonomía en el seno del proceso de trabajo, y así, en consecuencia, estarán más cerca del proletariado o de la pequeña burguesía. En última instancia por supuesto, resulta un tanto arbitrario el lugar en el que se traza la divisoria y se dice; ésta es una situación en la que la autonomía se ha visto reducida hasta tal punto que ya no estamos ante una posición contradictoria de clase. Inevitablemente se darán posiciones de clase que sean no sólo contradictorias, sino ambiguas; es decir, es posible dar una clasificación abstracta y *a priori* de tales posiciones. Lo que esto indica es la limitación inevitable de un análisis puramente estructural de las clases y las relaciones de clase. En último término, lo que determina exactamente la forma en que tales posiciones ambiguas se organizarán en clases no es la precisión teórica del analista, sino más bien el curso histórico de las luchas de clases.

esta cuestión pueden identificarse tres posiciones de clase básica a nivel ideológico:

1. La posición *de clase burguesa* a nivel ideológico reside en aquellas posiciones que comprenden el control del proceso de producción ideológica en su totalidad, es decir, el control sobre los *aparatos* ideológicos burgueses.

2. La posición *de clase contradictoria* a nivel ideológico comprende aquellas posiciones que están implicadas en la elaboración y difusión de la ideología burguesa, pero no en el control global de los aparatos ideológicos burgueses.¹⁵

3. la posición *de clase obrera* a nivel ideológico comprende aquellas posiciones que se ven excluidas tanto del control de los aparatos en su conjunto como de la elaboración y difusión de la ideología en el seno de los citados aparatos.

En términos del sistema educativo, por ejemplo, la posición burguesa podría ser la de los altos funcionarios de la enseñanza (directores, rectores, gerentes); las posiciones contradictorias serían típicamente las de los enseñantes, y la posición de clase obrera sería la de las secretarías, los bedeles, los camareros de los comedores o cafeterías, etc.¹⁶

¹⁵ En esta discusión estoy restringiendo la noción de "elaboración y difusión" de ideología burguesa a los procesos activos de elaboración/difusión, esto es, a los procesos en los que el contenido de hecho de la actividad está directamente implicado en la formación de ideología (por ejemplo, escribir textos publicitarios, impartir clases, hacer investigación sociológica, etc.). Es posible extender la noción de elaboración/difusión de ideología de modo que incluya también los procesos pasivos, es decir, los procesos en los que la forma de la relación de la posición de clase con respecto a la clase obrera reproduce la ideología burguesa al margen del contenido específico de la actividad de la posición. Por ejemplo, a causa de la ideología que mantiene que tan sólo los "expertos" pueden tomar decisiones técnicas, la relación entre expertos y obreros reproduce directamente la subordinación ideológica de la clase obrera, incluso si el experto diseña puentes en vez de propaganda. Esta distinción entre las formas activas y pasivas de la elaboración/difusión de ideología es muy similar a la que los Ehrenreich establecen entre los papeles "explícitos" y "ocultos" en el proceso de reproducción de las relaciones de clase capitalistas y de la cultura capitalista.

¹⁶ Es importante recordar durante esta discusión que estamos hablando acerca del carácter de clase de ciertas *posiciones*, y no necesariamente de la afiliación de clase de los individuos que ocupan esas posiciones. Por ejemplo, un enseñante puede estar comprometido a fondo con las luchas de la clase obrera, e incluso impartir ideas marxistas en el aula, pese a que la posición de enseñante sea una posición contradictoria a nivel ideológico. Por supuesto, en la mayor parte de las circunstancias existe una relación sistemática entre la afiliación de clase de los individuos y el carácter de clase de sus posiciones. Dé hecho, la mayor parte de los enseñantes imparten ideología burguesa. Si llegara a ocurrir que como resultado de las luchas de clases una gran proporción de

Intentemos ahora combinar estos dos niveles de análisis —las posiciones contradictorias a nivel de relaciones de producción y a nivel de relaciones ideológicas— para comprender el carácter de clase del trabajo intelectual. Para evitar que esta discusión sea demasiado abstracta, me concentraré específicamente en la posición de clase de los enseñantes, aunque el análisis se podría aplicar por igual a otras muchas clases de intelectuales. En general los enseñantes se encuentran en una posición contradictoria entre la pequeña burguesía y la clase obrera al nivel de las relaciones de producción. Históricamente, los enseñantes han tenido un grado razonable de control sobre su propio proceso de trabajo, pero en general han tenido poco que ver con el control global del sistema educativo.¹⁷ A nivel ideológico, por otra parte, los enseñantes ocupan una posición contradictoria entre la burguesía y la clase obrera, dado que la posición de enseñante es crítica para la difusión y la elaboración de la ideología burguesa. Así los enseñantes se ven situados simultáneamente entre la clase obrera y la pequeña burguesía y entre la clase obrera y la burguesía.

Esta *desarticulación* entre su posición de clase a nivel ideológico y económico tiene importantes consecuencias para el papel potencial de los enseñantes (y otras categorías de intelectuales) en la lucha de clases. En la medida en la que los enseñantes tienen un cierto grado de autonomía al nivel de las relaciones sociales de producción (educativa) pueden potencialmente subvertir la ideología burguesa al nivel de las relaciones ideológicas. Existe así una contradicción potencial entre la posición económica e ideológica de clase de los trabajadores de enseñanza, y esta contradicción plantea ciertas amenazas reales a la burguesía.

enseñantes en el seno de los aparatos educativos burgueses empezaran a poner en tela de juicio la ideología burguesa, habría una seria crisis de hegemonía ideológica. Bajo tales circunstancias podrían esperarse luchas extremadamente enconadas en el seno del aparato, al realizarse intentos por reimponer la ideología burguesa a los enseñantes.

¹⁷ En un estudio extremadamente interesante de las luchas de clases en el campo de la enseñanza en Chicago, Julia Wriggley muestra cómo en la primera parte de este siglo los enseñantes de Chicago intentaron establecer consejos de padres y profesores que tuvieran un control efectivo sobre la política educativa. Estos intentos fueron conscientemente reprimidos por la burocracia educativa y el aparato político. Muchos maestros fueron despedidos, y quedó claro que los maestros carecerían de papel organizado alguno en la elaboración de la política educativa. (*The politics of education in Chicago: social conflicts and the public schools*, tesis doctoral, Departamento de Sociología, Universidad de Wisconsin, 1977).

Esta contradicción potencial es más aguda en las instituciones de enseñanza superior. En los Estados Unidos, al menos, los profesores de enseñanza primaria y secundaria tienen mucha menos autonomía en todos los aspectos que los profesores de enseñanza superior, y en particular tienen menos autonomía en términos del contenido ideológico de lo que enseñan. En la mayor parte de los Estados Unidos, un profesor de escuela primaria que intentara seriamente difundir ideas comunistas en su clase se encontraría casi con toda seguridad sin trabajo. En la universidad la situación es más compleja, y la autonomía de los enseñantes es más una realidad. A pesar de su función ideológica como apoyo del liberalismo y para la creación de una imagen de discusión libre y abierta, la “libertad académica” en el seno de la universidad crea de hecho un mayor espacio para las ideas que ponen en tela de juicio la ideología burguesa. Este es precisamente el motivo por el que los regímenes autoritarios en las sociedades capitalistas se esfuerzan tanto por imponer controles ideológicos estrictos en el seno de las universidades. Si la relativa autonomía de los enseñantes no contradijera su función a nivel ideológico, no habría necesidad de purgas tan sistemáticas de las universidades y escuelas superiores por parte de los gobiernos de derecha. Los conservadores pueden ser de hecho un tanto paranoicos en su valoración de la capacidad de los profesores de izquierda para “envenenar” la mente de los jóvenes, pero sigue siendo cierto que la autonomía relativa de los enseñantes crea la posibilidad de una resistencia real a la ideología burguesa.¹⁸

Si este análisis es correcto, podríamos perfectamente preguntar: ¿por qué entonces la clase capitalista no se limita a eliminar esta autonomía “pequeñoburguesa” de los profesores de universidad y de otras categorías de trabajadores asalariados intelectuales? Ha habido ocasiones, por supuesto, en las que ha ocurrido precisamente esto. El caso extremo es el de los Estados burgueses autoritarios en los que se dicta desde las alturas el contenido detallado de la enseñanza, pero también se dan formas menos extremas (tales como el *macarthismo* en los Estados Unidos) en las democracias burguesas. No obstante, en la mayor parte de las circunstancias los profesores uni-

¹⁸ Es importante tomar este argumento en perspectiva. No pretendo que la autonomía de los enseñantes sea un determinante primario de la fuerza o debilidad de la ideología socialista o comunista, ni en la sociedad en su totalidad ni en la universidad. Sigue siendo la fuerza de la clase obrera, particularmente como fuerza política organizada, lo decisivo para determinar la fuerza de la ideología socialista/comunista en la universidad. La cuestión es que las relaciones sociales internas en el seno de la universidad facilitan la penetración y consolidación de ideologías antiburguesas.

versitarios han disfrutado de una cierta autonomía en las sociedades capitalistas avanzadas, y esto requiere una explicación. Hay varios factores que parecen especialmente importantes. En primer lugar, mientras que la relativa autonomía de los profesores universitarios y otros intelectuales en el seno de las relaciones sociales de producción plantea una amenaza potencial contra la burguesía, esta autonomía también resulta útil para la burguesía. La fuerza de la ideología burguesa se basa en parte sobre la afirmación de las libertades liberales, y esta afirmación se encarna en la autonomía relativa de los intelectuales, incluyendo a los profesores. Más aún, la clase burguesa necesita producción intelectual, necesita investigación científica y reformulaciones imaginativas de la ideología burguesa, y una producción intelectual de tales características requiere un cierto grado de autonomía para ser efectiva. Finalmente, la burguesía se vería enfrentada potencialmente con una resistencia considerable de ciertos sectores de intelectuales, así como de la clase obrera, si la autonomía del trabajo intelectual fuera atacada seriamente. La clase capitalista puede desear erosionar la autonomía de los intelectuales, pero en algunas circunstancias los costos ideológicos y políticos podrían ser simplemente demasiado elevados.

Como resultado de estos factores, el grado de autonomía de los enseñantes en el seno de las relaciones sociales de producción varía enormemente en el tiempo y el espacio. Mientras que los enseñantes en general ocupan una posición de clase contradictoria entre la clase obrera y la pequeña burguesía a nivel económico, en determinados momentos y lugares ciertas posiciones en la enseñanza están mucho más cerca de la clase obrera, y otras muchos más cerca de la pequeña burguesía. Por tanto, demostrar que los enseñantes ocupan posiciones de clase contradictorias es tan sólo un primer paso en el análisis. Es igualmente importante especificar la gama de variación de esas relaciones y examinar los procesos de cambio de la posición de clase de determinadas categorías de enseñantes.

En el caso de los Estados Unidos, parece que en la última década, y en especial a partir de los años 70, ha habido una considerable proletarización de muchos segmentos de enseñantes en la enseñanza superior. El número de clases ha aumentado, el contenido de los cursos viene impuesto de forma más administrativa, los enseñantes ya no determinan los horarios, los nombramientos en propiedad han sido reemplazados por contratos de corta duración sin seguridad en la conservación del puesto, etc. Estas transformaciones han producido una bifurcación bastante profunda en la situación de clase de los

profesores universitarios: en las universidades de élite la proletarianización se ha dado a un ritmo mucho menor, o en algunos casos no se ha producido; en los *junior colleges* y *community colleges*, así como en algunas universidades estatales orientadas a estudios de licenciatura [*undergraduate*], la erosión de la autonomía de los enseñantes en el seno del proceso de trabajo ha progresado muy rápidamente. Así, muchos profesores de tales instituciones se han visto llevados muy cerca del polo de la clase obrera en la posición contradictoria entre la clase obrera y la pequeña burguesía, mientras que los profesores de las universidades de élite permanecen mucho más próximos al polo pequeñoburgués. Como resultado, se podrían esperar modelos de comportamiento de clase muy diferentes por parte de los profesores en cada una de estas situaciones; en particular, posibilidades muy diferentes de crear vínculos entre los profesores y los trabajadores en diversas luchas políticas y económicas. El mayor éxito en la sindicación de los enseñantes de los *junior colleges* y las universidades estatales orientadas hacia los estudios de licenciatura es una indicación empírica de estas tendencias.

A nivel ideológico, no obstante, los enseñantes permanecen en posiciones contradictorias entre la burguesía y el proletariado a pesar de su proletarianización parcial a nivel económico. Si bien la autonomía dentro de su trabajo puede haber disminuido para muchos enseñantes, aún se encuentran activamente comprometidos en el proceso de elaboración y difusión de la ideología burguesa. Sin embargo, hay algunos cambios en el proceso educativo que indican que los enseñantes pueden estar en un proceso de proletarianización parcial a nivel ideológico tanto como a nivel económico. Tal vez el ejemplo más claro sea la introducción bastante extensiva de diversas formas de enseñanza programada mediante el uso de ordenadores y otros sistemas. Este tipo de enseñanza mecanizada mina el papel de los enseñantes en la elaboración y difusión de ideología. En una situación límite, sus responsabilidades en la difusión de ideología podrían reducirse a la puesta en marcha de máquinas, sin intervenir como individuos en el proceso. Los enseñantes se convertirían en vigilantes de máquinas, sin ser participantes activos en la producción de ideología. En tal situación, la posición de clase de los enseñantes a nivel ideológico se desplazaría hasta ser muy próxima a la de los trabajadores (carencia completa de control sobre el proceso de producción ideológica).

En términos más generales, los diversos procesos de rutinización de la enseñanza, en los que la capacidad de los enseñantes para introducir sus propias ideas en sus clases se ve reducida, pueden ser consi-

derados como un proceso de proletarización ideológica en el terreno de la enseñanza. Esto no quiere decir que los enseñantes se disuelvan simplemente en la clase obrera a nivel ideológico, pero sí quiere decir que a su posición correspondería un papel menos activo en la producción de ideología burguesa, y así, la situación de los enseñantes a nivel ideológico se aproximaría más a la de los trabajadores.

Tales procesos de proletarización ideológica de los enseñantes no deben ser exagerados. Por el momento, la mayor parte de los enseñantes ocupan aún posiciones contradictorias en el seno de las relaciones de clase a nivel ideológico. Esto genera una serie particularmente compleja de presiones sobre los enseñantes en el seno de la lucha de clases. Por una parte, aunque los enseñantes ocupen una posición contradictoria entre la pequeña burguesía y la clase obrera a nivel económico, muchos puestos en la enseñanza se están viendo incuestionablemente proletarizados a nivel de las relaciones sociales de producción. Por otra parte, esos mismos puestos en la enseñanza siguen ocupando posiciones contradictorias entre la burguesía y el proletariado a nivel ideológico, y esta posición tiende a vincularse ideológicamente a la clase burguesa. El carácter extremadamente ambivalente de los sindicatos de enseñantes, y de muchas huelgas de la enseñanza, reflejan esta desarticulación entre los niveles económicos e ideológicos en la posición de clase de los enseñantes.

II. LOS INTELLECTUALES Y LA LUCHA POR EL SOCIALISMO

Hasta aquí nos hemos centrado exclusivamente en la posición estructural de clase de los intelectuales, de personas cuya actividad principal es la elaboración y difusión de ideas. Me gustaría ahora ocuparme de la muy problemática cuestión del papel de los intelectuales en la lucha por el socialismo. En particular, me gustaría examinar la relación entre la posición objetiva de clase de la mayor parte de los trabajadores intelectuales (posiciones contradictorias dentro de las relaciones de clase) y el carácter contradictorio de su papel en el seno de los movimientos socialistas. No discutiré el problema de cómo los intelectuales en general pueden ser atraídos hacia los movimientos socialistas, sino que me centraré más estrechamente en la cuestión de su papel en el seno de esas luchas una vez que están ya envueltos en ellas.

Para empezar a explorar esta cuestión necesitaremos, primero, llegar a un acuerdo sobre la cuestión marxista clásica de la relación entre teoría y práctica, si bien tan sólo de forma esquemática y provisional. Una vez hecho esto, examinaremos cómo el carácter contradictorio de la posición de clase de los intelectuales configura

su capacidad para interpretar un papel en la mediación entre la teoría y la práctica.

Teoría y práctica

El problema de la relación entre la teoría y la práctica comprende en realidad tres dimensiones separadas aunque interrelacionadas: la relación entre la teoría, como aparato conceptual, y la práctica; la relación entre los teóricos, como productores de teoría, y la práctica, y la relación entre los teóricos y la teoría. El problema del papel de los intelectuales en la lucha por el socialismo implica estas tres relaciones. Examinémoslas una por una.

1. *Dialéctica teoría/práctica*. La mayor parte de las discusiones marxistas acerca del problema general de la “unidad entre la teoría y la práctica” se enfocan principalmente sobre las relaciones entre la teoría como aparato conceptual y la práctica. Esta relación tiene a su vez dos aspectos. En primer lugar, el *impacto de la teoría sobre la práctica*: un principio central del marxismo, especialmente a partir de Lenin, ha sido que la práctica política —la actividad de transformar conscientemente las relaciones y las estructuras sociales— no puede guiarse simplemente por una comprensión ideológica espontánea de la sociedad, sino que debe guiarse por una teoría revolucionaria *científica*. Como dijo Lenin, sin una teoría revolucionaria no puede haber práctica revolucionaria.

¿Qué significa esto exactamente? Desde luego no implica que una teoría revolucionaria científica suministre una serie de fórmulas para la acción, o que la citada teoría pueda aportar predicciones completas del futuro sobre las que basar las estrategias políticas. El contenido de esta afirmación de que una teoría científica revolucionaria debería ser la guía de la práctica revolucionaria es más bien que tal teoría nos aporta una *capacidad sistemática para aprender de nuestra práctica*, para aprender de nuestros errores y de nuestros éxitos. “Aprender” implica que existen cuestiones para las que no tenemos aún respuesta, y que existe un método para responder correctamente a estas cuestiones.¹⁹ El materialismo histórico constituye la

¹⁹ En contraste con tal teoría científica una teoría “ideológica” es aquella en la que todas las cuestiones están ya respondidas por la teoría (las respuestas están “predeterminadas”). Y así no existe método alguno para dar respuestas a cuestiones antiguas. En estos términos, el marxismo funciona como una ideología y como una teoría científica: el marxismo dogmático) (el marxismo como una estructura ortodoxa de respuestas inmutables) funciona como ideología: el marxismo científico funciona como un método

teoría científica que nos capacita para producir nuevos conocimientos susceptibles de ser utilizados en la práctica política.²⁰

El segundo aspecto de la “unidad entre la teoría y la práctica” se centra en el *impacto de la práctica sobre la teoría*: la práctica política suministra la condición epistemológica necesaria para la reconstrucción de la teoría en el seno del marxismo. El materialismo histórico es una teoría sobre las relaciones entre las estructuras y las prácticas sociales, entre los condicionantes estructurales y su transformación por medio de la lucha. Es la teoría científica de los determinantes contradictorios de la vida social.²¹ En cualquier momento dado, como en toda ciencia, existen tesis opuestas acerca de esas determinaciones contradictorias dentro del marxismo. Mientras que puede existir una especie de consenso general acerca de muchos de los conceptos básicos del materialismo histórico, a menudo existen disputas internas acerca de planteamientos concretos, especialmente acerca de planteamientos relacionados con los límites estructurales de las prácticas de clase y las condiciones para la transformación de esos límites por medio de la lucha de clases.

para producir nuevos conocimientos acerca del mundo. La marca de fábrica del marxismo como ideología es la utilización de citas de Marx como método para *dar validez a una afirmación sobre el mundo* (por oposición a una afirmación sobre Marx). Esto no pretende denegar en forma alguna la importancia crítica del estudio de Marx, pero cuando las palabras de Marx operan como autoridad, como una forma de demostración de afirmaciones sobre la sociedad, entonces Marx deja de ser una fuente de método científico y se convierte, por el contrario, en una fuente de verificación ideológica. Esta forma de diferenciar las teorías científicas de las teorías ideológicas procede del análisis de Louis Althusser en *Reading Capital* (Londres, NLB, 1970) [*Para leer «El capital»*, México, Siglo XXI, 1969], aunque la posibilidad de que el propio marxismo funcione simultáneamente como ciencia y como ideología queda fuera del análisis de Althusser.

²⁰ Decir que la teoría nos capacita para producir sistemáticamente nuevos conocimientos para su utilización en la práctica política no implica que el materialismo histórico pueda ser reducido a la producción de conocimientos directos e inmediatamente aplicables a la lucha de clases. El materialismo histórico es una ciencia de la historia, y permite investigar y estudiar una amplia variedad de problemas históricos que pueden tener, en el mejor de los casos, una relevancia directa marginal para la práctica política contemporánea. la producción teórica tiene una cierta autonomía creativa real, y el desarrollo de la teoría (como veremos más adelante) requiere que la teoría no esté directamente subordinada en todo momento a los imperativos de las luchas políticas del momento.

²¹ Para una discusión extensa de la lógica de la determinación dentro de la teoría marxista que subyace implícitamente a gran parte de este razonamiento, véase el capítulo 1 (“Methodological introduction”) de *Class, crisis and the State*, *op. cit.*

¿Cómo pueden resolverse tales disputas dentro de la teoría (y la política)? En parte tales disputas pueden ser debatidas dentro de la propia teoría; algunos planteamientos son más coherentes que otros; algunos constituyen razonamientos puramente ideológicos, etc. Pero en última instancia, los debates mas importantes dentro del marxismo sólo pueden ser resueltos estudiando las luchas que intentan o han intentado transformar de hecho las estructuras sociales en el presente o en el pasado.²² Por plantear la cuestión en términos un tanto excesivamente positivistas, la práctica suministra las “condiciones experimentales” para evaluar la adecuación de los planteamientos dentro de la teoría marxista, y para la reconstrucción de esa teoría de la luz de sus inadecuaciones.²³

2. *Dialéctica teórico/práctica.* La teoría es producida por seres humanos reales, sumergidos en relaciones sociales reales dentro de las cuales producen teoría. El marxismo, como teoría materialista de la historia, es también una teoría materialista del marxismo, y esto implica que las relaciones de los teóricos con la práctica constituyen por sí mismas uno de los determinantes del desarrollo de la teoría marxista.

²² Esto ayuda a explicar en parte el papel estratégico que desempeña la “historia” en el desarrollo de la teoría marxista. La historia no sólo es importante porque el marxismo sea en sí una teoría histórica —una teoría acerca de la historia y de los procesos históricos de transformación—, sino que la historia es importante en cuanto que suministra las necesarias “condiciones experimentales” para evaluar las teorías marxistas acerca de la relación entre formas específicas de estructuras y prácticas sociales. Esto no implica en modo alguno una teoría empírica del conocimiento en la cual la teoría no sería más que una generalización a partir de datos “dados”, pero sí implica que la teoría científica marxista es, en última instancia, “empírica” y “y realista”, en la actividad de los altos dirigentes más que en la de los cuadros medios y la base.

²³ Claus Offe desarrolla este argumento de forma interesante en su discusión acerca de los problemas que plantea el estudio del Estado, en su ensayo “The structural problem of the capitalist. State” (reeditado en Von Beyme, cop., *German political studies*, vol. 1, 1975, Beverly Hills, Sage, 1974). Offe argumenta que la dinámica fundamental del Estado capitalista es la que excluye ciertas posibilidades o decisiones del Estado. Por tanto, el punto central de una exposición marxista de la estructura del Estado estaría en los mecanismos de selección negativa, es decir, en aquellos mecanismos que producen “no decisiones”. El problema, por supuesto, es que en la medida en la que tales mecanismos sean efectivos no pueden “verse” empíricamente los efectos de su actuación. ¿Cómo pueden verse “no acontecimientos”, “no decisiones”? Tan sólo a través de luchas sociales que amenacen los límites impuestos por estos mecanismos de selección negativa, argumenta Offe, es posible valorar la adecuación de las afirmaciones teóricas sobre tales mecanismos y los límites que imponen. *En ausencia de tales luchas, es imposible saber científicamente dónde están exactamente esos límites.* En este sentido la práctica política crea las “condiciones experimentales” para la reconstrucción de la teoría.

Mientras que se puede considerar que la relación entre la teoría y la práctica suministra las condiciones para la generación de nuevas respuestas dentro de la teoría marxista, se puede considerar que la relación del teórico con la práctica aporta las condiciones sociales para la generación de nuevas *cuestiones*. Los temarios de teoría e investigación de los teóricos no surgen del aire. Los problemas que los preocupan y que definen los contornos de las cuestiones que plantean están configurados críticamente por la forma en que los teóricos están vinculados a la práctica política.²⁴

Esto no es una afirmación metafísica, ni tampoco una simple afirmación psicológica acerca de las motivaciones y la sinceridad del teórico. Es más bien una tesis sobre las relaciones materiales necesarias para el planteamiento de preguntas capaces de hacer avanzar la teoría marxista. En última instancia, es una tesis sobre las relaciones sociales que determinan la *responsabilidad* de los teóricos frente a determinados grupos políticos y de clase.

La responsabilidad implica que existen mecanismos reales que configuran la elección de preguntas y problemas a estudiar por el teórico, de tal forma que garantizan su relevancia para intereses específicos de clase. Los teóricos son responsables ante la burguesía en la medida en que tales mecanismos les fuerzan a definir la relevancia de su trabajo en función de su contribución a los intereses burgueses; son responsable ante la clase obrera en la medida en que están vinculados a mecanismos que configuran su trabajo en términos de su relevancia para los intereses de esta clase.²⁵

²⁴ Como en la anterior discusión sobre la relación teoría/práctica, la afirmación de que la relación del teórico con la práctica configura las cuestiones planteadas no debería entenderse como una afirmación de que la práctica política determina únicamente las cuestiones de la actividad teórica. Como han argumentado Althusser y otros, la estructura de una teoría (lo que Althusser llama la *problemática*) fija unos límites a las *posibles* cuestiones que puede plantear la teoría. Esto es, algunas cuestiones no pueden plantearse siquiera en el marco de una determinada teoría. Dentro de estos límites, no obstante, la relación entre el teórico y la práctica política puede tener un impacto decisivo en la configuración de la pregunta específica planteada. Pero obsérvese; los límites de las cuestiones posibles impuestos por la estructura de una teoría no son fijos, dado que una de las tareas de la producción teórica es precisamente la transformación del marco global de la propia teoría. En estos términos la práctica política —y, por tanto, la relación entre el teórico y la práctica política— puede introducir también el estímulo necesario para la transformación de la propia estructura de la teoría, además de plantear cuestiones específicas en el seno de esa estructura.

²⁵ La responsabilidad ante la clase obrera no significa simplemente responsabilidad ante los *trabajadores*. Particularmente en una sociedad en la que las luchas de la clase obrera han pasado, en gran medida, de ser luchas en torno a los intereses fundamenta-

Existe una decisiva asimetría entre las formas o mecanismos de responsabilidad de los teóricos ante la clase burguesa y ante la clase obrera en la sociedad capitalista. La responsabilidad ante la burguesía está incorporada de muchas maneras a la propia estructura de las relaciones institucionales de la sociedad capitalista. La omnipresencia de la ideología burguesa, la realidad inmediata de los sistemas de estatus y de los criterios de éxito, las relaciones competitivas de la producción intelectual, etc., contribuyen a vincular al teórico a los intereses de la burguesía. Más aún, directa e indirectamente estos mecanismos están respaldados por el poder del Estado. En situaciones extremas esto significa que el aparato represivo del Estado puede ser utilizado para imponer la responsabilidad de clase (por ejemplo, en el periodo de McCarthy); en situaciones menos extremas implica que el Estado utiliza sus recursos para respaldar los "mecanismos selectivos" que configuran la actividad de los teóricos (por ejemplo, el empleo en instituciones estatales, las becas de investigación, los procesos de titulación, etc.). Estos diversos mecanismos, tomados en conjunto, reflejan en parte que la burguesía es la "clase hegemónica"; las prácticas burguesas de clase tienen capacidad para definir sustancialmente la gama de cuestiones relevantes planteadas por los teóricos, aunque sean incapaces de crear un consenso ideológico sobre las respuestas.

La responsabilidad ante la clase obrera, por otra parte, tiene que ser constantemente producida a través de una resistencia colectiva y organizada a la dominación capitalista. La responsabilidad ante la burguesía es, en muchos sentidos, espontánea en el seno de la sociedad capitalista; *la responsabilidad ante la clase obrera tan sólo puede ser una responsabilidad consciente*. Al hablar de la responsabilidad de los intelectuales marxistas ante la clase obrera en el seno de una sociedad capitalista, por tanto, existe un sentido en el que esa responsabilidad es, al menos en parte, una *responsabilidad autoimpuesta*; es decir, procede de la decisión de participar en las prácticas de clase de forma que se produzca esta responsabilidad.²⁶

les a ser luchas en torno a los intereses inmediatos, la responsabilidad ante los trabajadores como tales no puede ofrecer la base material para garantizar que las preguntas planteadas por los teóricos marxistas sirvan a los intereses fundamentales de la clase obrera. La responsabilidad, por tanto, ha de ser ante la práctica política e ideológica de la clase obrera, no sólo ante los trabajadores como tales.

²⁶ Mientras que sería idealista suponer que por un simple acto de voluntad un teórico puede producir algo al servicio de los intereses de la clase obrera, no es idealista argumentar que los teóricos pueden optar por enraizarse en una estructura de re-

Por esta razón esta responsabilidad es *siempre* problemática. Las instituciones dominantes de la sociedad capitalista ejercen presiones constantes sobre los teóricos, incluyendo a los teóricos marxistas, para que planteen sus preguntas en términos de prácticas burguesas. En ausencia de una contrarresponsabilidad basada en vínculos reales con las prácticas de la clase obrera, resulta muy difícil para un teórico resistir a tales presiones. Esto no quiere decir que tan sólo a través de la participación directa en las barricadas se puedan plantear cuestiones marxistas serias, pero sí que cuanto mayor sea la distancia entre el teórico y las luchas reales de la clase obrera tanto más difícil será que el teórico en cuestión pueda ser responsable ante la clase obrera en las cuestiones que se plantee.

Cuando la relación del teórico con la práctica se interpreta como una relación de responsabilidad de clase, está claro que debe ser considerada como una relación *variable*, no absoluta. Los teóricos marxistas pueden ser más o menos responsables ante la clase obrera. De hecho podemos hacer una afirmación aún más fuerte: bajo diferentes condiciones históricas los teóricos pueden tener que enfrentarse a diferentes posibilidades objetivas de responsabilidad ante la clase obrera. En presencia de una clase obrera políticamente consciente y bien organizada, con partidos revolucionarios fuertes enraizados en las masas, es posible un nivel mucho mayor de responsabilidad ante la clase obrera, como *clase*, que cuando las formas dominantes de la práctica de la clase obrera son partidos reformistas, sindicatos u otros movimientos sociales. La participación en tales movimientos puede proporcionar vínculos reales con la clase obrera, y éstos siguen siendo esenciales para contrarrestar la responsabilidad ante la clase dominante. No obstante precisamente debido a que tales movimientos tienden a estar organizados en torno a los intereses inmediatos de la clase obrera, suponen un mecanismo mucho menos efectivo para asegurar que el trabajo teórico esté dirigido hacia los intereses fundamentales de esa clase. Siempre es importante para los teóricos marxistas estar vinculados a las prácticas de clase del proletariado de un modo u otro, pero las formas posibles de tal vinculación, y su

laciones sociales que puede tener el efecto sobre el teórico de hacer posible la producción de tal teoría. Un teórico puede optar por vincularse a la clase obrera en una forma que establezca las condiciones de su responsabilidad y que haga posible así una teorización marxista continuada. En este sentido la responsabilidad y que haga posible así una teorización marxista continuada. En este sentido la responsabilidad es parcialmente una autoimposición: requiere una elección activa por parte del teórico. La «opción de no optar»; dado que el trabajo teórico se realiza en el seno de una sociedad capitalista, supone responsabilidad ante la clase dominante.

efectividad para influenciar el trabajo del teórico, varían con las condiciones históricas.

3. *La dialéctica teórico/teoría*. La producción de teoría no es simplemente una consecuencia de un compromiso real en luchas por cambiar el mundo; es también consecuencia de un compromiso con la propia teoría. El subtítulo del más importante trabajo teórico de Marx, *El Capital*, es “crítica de la economía política”. Marx no utilizó como subtítulo “crítica de la sociedad burguesa” o “crítica del modo de producción capitalista”, sino “crítica de la *economía política*”. Al hacerlo subrayó que la elaboración de teorías es un proceso de transformación —“crítica”— de las teorías existentes, así como un proceso de interpretación del mundo (para transformarlo).

¿Qué papel específico desempeña el compromiso con la teoría en la producción de teoría marxista? Esquemáticamente podemos decir que si la relación entre el teórico y la práctica suministra la base social crítica para las preguntas que se formulan, y si la relación entre la teoría y la práctica nos da las condiciones históricas de las respuestas obtenidas, la relación entre el teórico y la teoría proporciona las condiciones para la producción de los *conceptos* (herramientas teóricas) necesarios para generar esas nuevas respuestas a partir de esas cuestiones. A esto es a lo que en parte se refiere Marx al hablar del proceso de la “crítica” en sí: es un proceso por medio del cual se producen nuevos conceptos a través de una valoración y una crítica de los conceptos teóricos existentes. En este caso la economía política.

Si la crítica es el proceso por medio del cual se producen nuevos conceptos, entonces la elaboración y la reconstrucción de la teoría marxista dependen no solamente de las relaciones sociales que aportan el eslabón que vincula a los teóricos con la práctica política, sino también de las relaciones sociales que aportan el eslabón entre los teóricos y la teoría. En términos de la dialéctica teórico/teoría, el desarrollo del marxismo como teoría científica requiere unas relaciones sociales que estimulen un debate libre y abierto sobre cuestiones teóricas, que proporcionen a la gente una comprensión profunda y completa de la teoría marxista existente, que hagan posible un compromiso ideológico fuerte con el socialismo junto con un compromiso no dogmático con el marxismo, etc. En ausencia de relaciones sociales que produzcan estos efectos, los teóricos tienen pocas probabilidades de desarrollar los instrumentos conceptuales necesarios para abordar seriamente las cuestiones planteadas por la práctica. La historia puede ofrecer materia prima para nuevas respuestas, pero en ausencia de conceptos adecuados el teórico puede

verse incapacitado para apropiarse esta historia en la forma de nuevos conocimientos.

La posición de clase de los intelectuales y la relación entre teoría y práctica

Lo dicho hasta el momento puede resumirse de la siguiente manera; dado que la teoría desempeña un papel tan importante en la conformación de la práctica política socialista, es importante comprender las condiciones necesarios para la producción y la reconstrucción de la propia teoría. Se han elaborado tres grupos de condiciones: en primer lugar, la relación *del teórico con la práctica política* da forma a las preguntas que se plantea el teórico; en segundo lugar, la relación *entre el teórico y la teoría* da forma a la elaboración de *conceptos* necesarios para responder a esas preguntas; en tercer lugar, la relación *entre la teoría y la práctica* determina la medida en la que las condiciones históricas permiten el descubrimiento de nuevas respuestas.²⁷

Volvamos ahora al problema de la posición de clase de los intelectuales. Tomaré como caso particular el problema de los intelectuales marxistas situados en el seno de las universidades burguesas, aunque gran parte del análisis subsiguiente sería válido para otras categorías de intelectuales marxistas. He elegido centrarme en los profesores universitarios marxistas porque los marxistas en el seno de las universidades han desempeñado un papel particularmente importante en el desarrollo de la teoría marxista en los Estados Unidos y Europa occidental a lo largo de los últimos cincuenta años, y porque constituyen la categoría de intelectuales marxistas que más conozco. La cuestión, entonces, es ésta. ¿En qué forma configura la compleja posición de clase de los profesores universitarios marxistas —su posición contradictoria entre la pequeña burguesía y la clase obrera a nivel económico y su posición contradictoria entre la

²⁷ Este argumento puede ilustrarse bien a través del propio trabajo de Marx. Los avances teóricos presentes en una obra como *La guerra civil en Francia* reflejan claramente estas tres relaciones. Si Marx no hubiera tenido una relación continuada con el movimiento obrero internacional no habría podido plantearse cuestiones sobre la forma del poder del Estado proletario en una revolución socialista, sobre la relación ante la estructura del Estado burgués y la reproducción de la dominación burguesa, etc. Si no hubiera estado dedicado a una sistemática y continuada crítica de las teorías existentes, habría carecido de los conceptos necesarios para plantear *teóricamente* tales cuestiones y estudiar los sucesos en Francia de una forma que hiciera posible el responder a esas cuestiones. Y si la práctica real de la clase obrera parisiense no hubiera destrozado por breve tiempo la estructura de la dominación burguesa con la Comuna de París, Marx no hubiera podido dar respuestas históricas reales a estas preguntas.

burguesía y la clase obrera a nivel ideológico— su capacidad para mediar su relación entre la teoría y la práctica? O, planteando el problema en los términos expuestos antes, ¿cómo afecta el carácter contradictorio de su posición en el seno de las relaciones de clase a la relación del teórico con la práctica y del teórico con la teoría?

En primer lugar, veamos el problema de la relación entre el teórico y la práctica. El problema fundamental aquí, como dijimos anteriormente, es el problema de la responsabilidad de clase, particularmente en términos de las cuestiones planteadas por el teórico. Los teóricos marxistas que pertenecen a universidades burguesas están sometidos a tremendas presiones para plantear preguntas estructuradas por la problemática burguesa, por las prácticas ideológicas y políticas burguesas. Tales presiones son a menudo extremadamente directas, tomando la forma de criterios de selección, listas negras, hostigamiento, etc. Pero a menudo las presiones son bastante sutiles, planteándose a través de los debates intelectuales en el seno de las conferencias y revistas profesionales. Para publicar en las revistas adecuadas es preciso plantear cuestiones que las publicaciones en cuestión consideren relevantes, y esa relevancia viene determinada no por la importancia de las cuestiones para el marxismo o para la práctica revolucionaria de la clase obrera, sino por su referencia a los dilemas y problemas propios de las ciencias sociales burguesas. Así, la necesidad de sobrevivir en el seno de la universidad fuerza al teórico a una relación de responsabilidad al menos parcial ante las prácticas de clase burguesas.

No obstante, el teórico puede ser simultáneamente responsable ante la clase obrera. Los teóricos marxistas no publican exclusivamente en revistas burguesas: también publican en revistas y publicaciones socialistas y comunistas. No se limitan a asistir a conferencias profesionales, donde el debate se ve estructurado en torno a las preocupaciones de la práctica ideológica burguesa; asisten también a mítines y conferencias donde las cuestiones están estructuradas por prácticas muy diferentes. No están atados tan sólo a la burguesía por su situación en el seno de la estructura universitaria; pueden estar vinculados directamente a la clase obrera por su situación en el seno de una estructura de partido o por su participación en varios tipos de movimiento sociales. A través de todos estos procesos, las cuestiones planteadas por el teórico son sometidas a una valoración y responsabilización crítica por fuerzas sociales opuestas a la dominación burguesa.

De entre estos diversos modos de responsabilización ante la clase obrera el más importante históricamente ha sido la pertenencia o asociación de clase a partidos políticos de la clase obrera, en particu-

lar diversos partidos comunistas. En ciertos países de Europa occidental, especialmente, tales partidos han suministrado el vehículo entre los intelectuales marxistas y la clase obrera. Este eslabón, no obstante, fue forjado a un elevado precio, dado que, si bien pueden haber suministrado una base para un cierto nivel de responsabilización de clase, las estructuras internas de la mayor parte de los partidos comunistas no han sido en general favorables a un compromiso serio de los teóricos con la teoría. En particular, la existencia de líneas de partido sobre cuestiones teórico-científicas, sobre cuestiones acerca de las explicaciones científicamente correctas del mundo, han impuesto limitaciones reales a la práctica de la crítica.²⁸ Una cosa es insistir en la aceptación disciplinada de las opciones políticas estratégicas de un partido (asumiendo que tal elección se haga a través de un proceso de debate político genuinamente democrático), y otra insistir en la aceptación disciplinada de explicaciones científicas “correctas” sobre la vida social.²⁹ Si bien la existencia de tales líneas de partido puede ser comprensible dadas las severas condiciones de lucha ideológica a las que se han enfrentado los partidos comunistas (y la Unión Soviética), no obstante la imposición de tal disciplina sobre la teoría mina sistemáticamente la capacidad de los intelectuales en el seno de tales estructuras de partido para producir y transformar conceptos.³⁰

²⁸ Al decir “línea de partido” me refiero no solamente a que los partidos adoptan posiciones sobre cuestiones de teoría e interpretación, sino a que exigen disciplina colectiva por parte de sus miembros respecto a esas posiciones. Cuando el marxismo como marco teórico se convierte en una cuestión de disciplina de partido, su función como teoría *científica* se ve seriamente perjudicada, aunque su función como teoría ideológica pueda verse de hecho reforzada.

²⁹ Con esto no pretendemos sugerir que las cuestiones “teóricas” y “políticas” puedan separarse totalmente. Claramente una línea política está basada en una cierta perspectiva teórica, y así las opciones estratégicas adoptadas por un partido implican también un determinado conjunto de opciones teóricas. No obstante, la imposición de una disciplina colectiva sobre las opciones políticas tiene implicaciones muy diferentes a las de la imposición de una disciplina sobre la teoría científica utilizada para justificar tales opciones.

³⁰ Este argumento no implica que sea imposible producir y transformar la teoría en el seno de los partidos leninistas tradicionales, sino meramente que el proceso de innovación teórica se ve impedido cuando un partido impone disciplina sobre las cuestiones científicas. Tales impedimentos operan obviamente de forma mucho más débil sobre los cuadros dirigentes del vértice de la estructura organizativa, y ésta es una de las razones por las que la innovación teórica ha tendido a ser una actividad de los altos cargos más que de los cuadros medios y de la base.

Los teóricos marxistas se han visto, por tanto, enfrentados a menudo con un dilema: las condiciones que maximizan su vinculación a la clase obrera no han sido en general unas condiciones que maximizaran su capacidad para el trabajo crítico en la teoría.³¹ Una de las respuestas a este dilema ha sido la emergencia de una tradición de práctica teórica marxista en el seno de las universidades burguesas, tradición muy destacable en Europa occidental, pero más recientemente también en los Estados Unidos.

La posibilidad de que se desarrolle el marxismo en el seno de las universidades burguesas es consecuencia del carácter contradictorio de la posición de clase de los intelectuales. Si bien la posición de clase contradictoria de los profesores universitarios marxistas entre la burguesía y la clase obrera, a nivel ideológico, genera presiones contradictorias de responsabilización, la posición contradictoria del teórico universitario entre la clase obrera y la pequeña burguesía crea la posibilidad de una actividad teórica crítica continuada. El carácter semiautónomo de la mayor parte de la producción intelectual implica que los teóricos mantienen cierto control real sobre las condiciones inmediatas de producción teórica, y mientras se vean preservados tales "privilegios" (control sobre las condiciones inmediatas de producción) existirá cierto espacio para la dialéctica teórico/teoría.

Este argumento no implica en absoluto que se deban proteger los privilegios a nivel de *ingresos* de los profesores universitarios. Las cuestiones decisivas son la seguridad en el empleo, el control sobre el propio trabajo, las obligaciones de éste, la existencia de censura, etc. No puede darse una producción teórica seria bajo unas condiciones en las que el teórico se ve totalmente proletarizado en el seno de las relaciones de producción de la producción intelectual. Las luchas defensivas contra la proletarización en el seno de la universidad, por tanto, son importantes para mantener la simple posibilidad de producir teoría marxista en la universidad burguesa (es decir, de ocu-

³¹ En su obra *Considerations on Western Marxism* (Londres, NLB, 1975) [*Consideraciones sobre el marxismo occidental*, Madrid, Siglo XXI, 1979], Perry Anderson discute muy extensamente este dilema con el que se encaran los intelectuales marxistas. A lo largo de la mayor parte del período posterior a la década de los veinte, la única forma efectiva en la que los intelectuales marxistas podían estar ligados sistemáticamente a las prácticas políticas de la clase obrera era a través de los partidos de la III Internacional, y no obstante la pertenencia a estos partidos comunistas actuaba como un serio freno sobre su capacidad para producir y transformar críticamente la teoría. La aparición del marxismo académico fue uno de los resultados de este dilema.

parse en la producción crítica de teoría). Esto no implica, por supuesto, que la teoría marxista *sólo* pueda producirse en el seno de las universidades, pero sí implica que en la medida en que deba producirse dentro de la universidad la posición contradictoria de clase de los profesores universitarios debe mantenerse.³²

El mantenimiento de las condiciones necesarias para la producción teórica marxista en el seno de la universidad, no obstante, se ha obtenido habitualmente a un elevado costo político: el aislamiento relativo de los teóricos marxistas respecto a la clase obrera. Así, aunque la posición contradictoria de los profesores hace posible el desarrollo del marxismo en el seno de la universidad, tiende simultáneamente a desplazar las cuestiones planteadas por los universitarios marxistas del problema político central de cómo *hacer* una revolución.

Replantando este dilema en términos de nuestro análisis de teoría y práctica: en las condiciones históricas de la lucha de clases en Europa occidental y los Estados Unidos, durante el último medio siglo, ha tendido a establecerse una contradicción entre las condiciones más favorables para la dialéctica teoría/ práctica y las más favorables para la dialéctica teórico/teoría. Esta es una contradicción real, que no puede ser ignorada por un simple “acto de voluntad” por parte de los teóricos marxistas como individuos. La propia contradicción sólo puede ser cambiada por medio de prácticas colectivas que modifiquen las condiciones en el seno de las cuales trabajan los teóricos marxistas, haciendo posibles nuevas formas de vinculación entre los intelectuales y la clase obrera.

³² Este argumento acerca de las condiciones para la producción de teoría marxista en el seno de las universidades burguesas no implica que en una universidad revolucionaria y socialista la producción pequeñoburguesa de la teoría vaya a depender de la preservación de las relaciones de producción pequeñoburguesas (posiciones de clase semiautónomas) en el seno de la producción intelectual. Si bien siempre resulta arriesgado especular acerca de la naturaleza de las relaciones sociales en una sociedad socialista, se podría esperar que la autonomía *individual* relativa de la actividad intelectual característica de la universidad burguesa liberal se vería reemplazada, o al menos complementada, por nuevas formas de autonomía *colectiva*, de producción teórica colectivamente organizada.

Estructura de clases y acción obrera

Cecilia Montero Casassus

Los estudios que se han propuesto caracterizar la formación social de los países latinoamericanos han buscado por lo general la explicación de la especificidad de cada país ya sea en las condiciones en que realizó su independencia del dominio colonial, en la mayor o menor rapidez en que se constituye un Estado nacional, o bien en las bases económicas de la emergencia de una burguesía nacional y su respectiva inserción internacional.

En el caso de Chile, existe un cierto consenso para considerar que la formación temprana de un sistema político-institucional y el rol activo del Estado frente al recurso exportador, los minerales de salitre y cobre, explican los rasgos distintivos de la formación social chilena. En primer lugar, y como elemento central para explicar la aparición y el desarrollo de las clases y de sus alianzas figura el Estado, instancia de impulsión de un desarrollo económico nacional y de un sistema político basado en el compromiso.

En segundo lugar, aparece como característico de Chile el desarrollo, también precoz, de un movimiento obrero autónomo respecto del Estado, pero estrechamente ligado a los partidos políticos.

En tercer lugar, se señala la importancia de la clase media, aunque en menor medida que en Argentina y Uruguay, la que se forma podríamos decir más políticamente por su relación al Estado que por su inserción en la actividad económica. La fase de industrialización que se inicia con la sustitución de importaciones a partir de los años treinta se pudo así desarrollar en el marco de una relativa estabilidad política, gracias a una suerte de compromiso entre la burguesía que toleraba el acceso de la clase obrera al sistema político siempre que ésta, y la clase media, no amenazaran las bases del régimen de acumulación. Ya en los años sesenta comienza a ser evidente que tal sistema de compromiso tiene sus límites que provienen de un desarrollo económico insuficiente con respecto al sistema de distribución que se ha ampliado por la vía de la negociación política. La concentración de los ingresos y el deterioro a la inflación y a una distribución desigual de la propiedad. La reforma agraria, las na-

cionalizaciones y la participación política van a ser los temas dominantes del período del reformismo que se inicia en 1964 y termina con el golpe militar de 1973.

Las reformas de estructura propuestas y aplicadas por los gobiernos de la Democracia Cristiana y de la Unidad Popular buscaron modificar las bases económicas de manera de restablecer un sistema de compromiso en el que estuvieran representados los trabajadores (Participación en las empresas), los campesinos (Ley de sindicalización campesina) y los pobladores (Promoción popular). ¿Qué huella dejaron en la sociedad chilena este conjunto de reformas? Desgraciadamente cuando se hace referencia a este período se pone casi todo el énfasis en la dimensión política y poco se sabe sobre el impacto real que tuvieron en la estructura social. Así por ejemplo, la derrota de la Democracia Cristiana se explica por una posición ambigua frente al capital monópólico nacional y extranjero que le impide ganar el voto popular y de la Unidad Popular por la influencia externa y por su incapacidad de ganarse el apoyo de las capas medias. No se ha analizado sin embargo en qué medida las reformas de uno y otro gobierno habían logrado alterar la base social cuyo apoyo se requería y no existen a la fecha trabajos sobre este tema.

En estos últimos diez años, el interés se vuelca hacia la relación entre el sistema económico y la sociedad. En efecto, con el golpe militar de 1973 se inicia un proceso de restructuración global que comprende el aparato productivo, el tipo de regulación económica y el sistema político institucional. Para algunos las transformaciones ocurridas durante diez años de régimen militar han significado un retroceso desde el punto de vista económico, social y político, en lo que se ha llamado la vuelta al siglo XIX, según expresión del economista Anibal Pinto. Para otros estaríamos frente a una empresa voluntarista de redefinición de reglas del juego, la que se designa como refundación capitalística, según los términos utilizados por el sociólogo Manuel A. Garretón.

La crisis que se inicia a fines de 1981 con la bancarrota del sistema bancario y la disminución del crédito externo, puso fin a este debate para volcar la atención hacia la configuración de escenarios de vuelta a la democracia y a la identificación de actores sociales susceptibles de apoyar tal o cual proyecto político o alianza.

La evolución política de los países del Cono Sur (Uruguay, Argentina, Bolivia) demuestra sin embargo que las posibilidades de una transición democrática y su estabilidad dependen tanto del grado de deterioro del régimen anterior como de la base social de apoyo de las

fuerzas políticas. [Si bien los actores políticos están constituidos por el espectro político tradicional han ocurrido modificaciones en la distribución político ideológica del electorado, modificación que permite salir del *impasse* que llevó a la ruptura de la institucionalidad.]

En esta perspectiva, la pregunta que orienta esta publicación es la de saber en qué medida las reformas económicas e institucionales del régimen militar chileno han logrado modificar la composición del tejido social y cuáles han sido o pueden ser las incidencias sobre el comportamiento colectivo de los trabajadores.

El carácter experimental del período, durante el cual se han aplicado reformas drásticas sin recurrir a ninguna vía de legitimación popular, pusieron al descubierto *cómo se redefinen las relaciones entre las clases cuando ha desaparecido toda intermediación institucional y que el aparato del Estado se moviliza unívocamente para asegurar el éxito de los intereses de un sector de la burguesía*. ¿Cuál fue la reacción de los intelectuales frente a la derrota política y como interpretaron el nuevo régimen de excepción? Aunque con un cierto retraso, se puede decir que el pensamiento social acusa el impacto de la ruptura, pues en un primer tiempo se desarrolla un cuestionamiento de fondo sobre las características históricas de la formación social y un debate sobre las razones de un desarrollo económico insuficiente; la fragilidad del sistema parlamentario, un mayor énfasis en los rasgos comunes de los gobiernos anteriores y en la contrapartida “negativa” del exceso de politización del movimiento obrero.

Uno de los resultados más importantes de esta revisión ha sido la gran cantidad de estudios históricos que, teniendo como objeto distintos períodos, se han propuesto una reescritura de la historia del país a partir de explicaciones más económicas y sociales que exclusivamente políticas (M. Góngora, Villalobos, G. Vial).

Los trabajos de carácter más sociológico realizados en el período comparten una misma inquietud: cuál es la distancia que separa estos diez años de la tradición histórica así revisada y sobre cuáles serán los efectos estructurales una vez cerrado el paréntesis del monetarismo y del Estado de excepción. Numerosas publicaciones han sido dedicadas a la descripción de las políticas económicas e institucionales del gobierno del general Pinochet como para volver a retomarlas aquí.¹ También se han avanzado hipótesis sobre sus efectos como la de la disminución del proletariado y de la importancia relativa de la clase obrera (Martínez y Tironi, 1980), [la de una posible división de la clase trabajadora según su inclusión o exclusión del polo dinámico

¹ Número especial de “Chile América” sobre *Las modernizaciones en Chile: un experimento neo-liberal*.

de la economía]. A la hipótesis sobre la emergencia de una nueva burguesía apoyada en el sistema financiero (R. Lagos, 1979) sucedió la *de una supuesta "modernización" de la clase media por la vía del consumo* (J. Martínez, 1980). Ninguna de estas hipótesis ha sido totalmente confirmada o rechazada, asistiéndose más bien a un desplazamiento en el nivel en que estas preguntas eran tratadas.

Es necesario, profundizar los estudios sobre el tema de los cambios en el tejido social y sobre la configuración actual de las fuerzas sociales con especial énfasis en la clase obrera y la clase media. Los temas tratados se ubican en tres niveles de reflexión, analíticamente diferenciables, pero complementarios: la estructura de clases, la relación Estado/movimiento obrero y las condiciones de producción y de reproducción de la clase obrera.

El análisis de la estructura de clases

La pregunta más general que anima la reflexión de estos años es la de establecer una relación entre la nueva estructura económica y lo que se ha llamado un tejido social supuestamente "desarticulado" tanto por los efectos del monetarismo como de la crisis y de la represión.

Existe sin embargo una cuestión previa, de orden más bien teórico, cuál es la de establecer la pertinencia de los modelos conceptuales. En este nivel, si bien existe consenso sobre las preguntas pertinentes no así sobre las categorías de análisis, pues se habla indistintamente de clases, capas, grupos y estratos sociales.

En la medida en que el régimen de excepción interrumpe la articulación de los intereses de clase a través del sistema político, ¿quiere esto decir que ya no es pertinente referirse a la estructura social, que ésta se encuentra totalmente disgregada? De la misma manera, ¿cuándo se han roto los canales de integración y movilidad social, se puede analizar una sociedad como compuesta de estratos? Por último, si en las actuales condiciones la oposición directa entre obreros y capitalistas ha pasado a segundo plano ¿es pertinente seguir aplicando un análisis de clase? Estructura social, estratificación y estructura de clases constituyen en efecto enfoques alternativos, pero no sólo desde el punto de vista teórico, sino también con relación a los procesos sociales reales.

Aunque existe una abundancia de publicaciones sobre estos temas, son escasos los trabajos empíricos dedicados al estudio de la estructura social a nivel nacional. Más aún "la selección de un sistema de clases en lugar de otro ha tenido origen frecuentemente en una

mera adhesión ideológica o en una opción teórica acrítica más que en razones científicas" (C. Filgueira y C. Geneletti, 1981). En el caso de Chile, el debilitamiento relativo de las organizaciones proletarias y el congelamiento del quehacer político e ideológico abierto transfirieron por un tiempo el debate político a una discusión de intelectuales.

Por otra parte, la dificultad de realizar estudios de terreno condujo al desarrollo de una reflexión basada casi exclusivamente en la interpretación de estadísticas oficiales.

Los trabajos basados en las encuestas periódicas de empleo llegaron a una primera conclusión: la de un aumento del sector terciario en desmedro del empleo en las actividades productivas y en la industria manufacturera. Esta tendencia, que no es propia de Chile, adquirió mucha importancia para el análisis sociopolítico debido a la situación de reestructuración en que se encontraba el país. Esta terciarización galopante se acompañó de una tasa de cesantía superior al 15 %, de un movimiento de concentración del capital financiero en torno a un número restringido de conglomerados, de un retiro del Estado de la actividad económica y disminución del gasto social.

Lo que las series estadísticas indicaban no era más que una acentuación de tendencias históricas, pero también un posicionamiento diferente de las clases frente a los recursos económicos.

Las posiciones pesimistas sobre la terciarización que se derivan de un cierto "fetichismo de la producción" (Singer, 1979) o de un obrerismo en lo ideológico, cedieron paso a la temática de la desarticulación social y de la "anomía". Es en este nivel, ya no de la demostración por el volumen relativo de uno u otro estrato, donde comienza a intervenir la preocupación por la estructura de clases.

Si se observa la composición de cada clase social se puede decir que todas han sido afectadas por la política monetarista en lo económico y el autoritarismo en lo político, y que en su interior existen ciertas fracciones más afectadas que otras. Por ejemplo ciertos sectores de la burguesía nacional como el empresariado pasaron a una posición subalterna con respecto a la burguesía financiera que fue la más beneficiada por el modelo.

Si se piensa en términos globales sobre qué lugar ocupan las clases con relación al que ocupaban en el pasado se pueden ubicar algunas tendencias que podrían tener características estructurales.

En primer lugar se constata una relativa permanencia de ciertos sectores a pesar de la desindustrialización y la exclusión definitiva de otros. Burguesía y clase obrera se han mantenido en sus posiciones,

mientras otras capas han sufrido un desplazamiento no solo económico sino también político. En este sentido se podría postular un doble proceso de *desburocratización de las capas medias y de una estatización de la marginalidad* en la medida en que por una parte los sectores de clase media han perdido el apoyo que tenían en el Estado, y por otra parte un sector de la clase trabajadora, los trabajadores manuales no productivos salen del asalariado, lo mismo que los campesinos que se ven excluidos del sistema económico agrícola; volviendo ambos sectores a una situación anterior a la de los años sesenta (ley de sindicalización campesina y de la participación política vía las juntas de vecinos).

Si bien la desindustrialización ha colocado a la burguesía empresarial en posición alejada del poder político, no ha logrado excluir a la clase obrera industrial del sistema. La capacidad de organización y de convocatoria nacional de los trabajadores de la industria y de la minería sigue siendo importante (Campero, Valenzuela, 1979; Zapata, 1980).

De confirmarse estos procesos estaríamos frente a un cambio que habría que situar no en el plano de la estratificación social, acceso diferencial a ciertos bienes, sino a cambios en la estructura de clase que ha ocurrido por la vía de la reestructuración económica y política que por un nuevo tipo de desarrollo modernizante.

En otras palabras el tipo de movilidad que ha ocurrido es la de una movilización masiva dentro y fuera del mercado de trabajo, proceso que se distingue de lo que ocurre en las sociedades estratificadas donde los cambios ocurren a través de las trayectorias individuales de movilidad social ascendente o descendente. La alteración producida por esta movilización se ha acompañado también de una modificación del rol de las instituciones, de las formas que adquiere la división social del trabajo y los mecanismos de reproducción.

De ahí la importancia de una reflexión dirigida no sólo al Estado sino también a las funciones económicas que asume la familia y otras instituciones (como la Iglesia) en la reproducción social.

Estado y movimiento obrero

El estudio del trabajo en Chile se ha traducido siempre como el estudio de su movimiento obrero. La clase obrera organizada ha sido el objeto de análisis por excelencia de los analistas que se han interesado en los trabajadores. El desarrollo político, la fuerza combativa y la independencia con respecto al Estado fueron los rasgos distintivos

del movimiento obrero chileno hasta 1973. Durante el período 1973-83 el régimen autoritario fue alterando cada uno de los soportes en que se había construido la organización obrera, tanto en el plano de la actividad sindical misma como en la vida de los partidos políticos.

La derrota incuestionable del movimiento obrero en lo político y las dificultades de su reorganización han contribuido también a un cuestionamiento sobre la clase obrera, sus organizaciones y su relación con el Estado y el sistema político. La constatación más importante ha sido la de la dependencia excesiva de los sindicatos con respecto a los partidos y la de su escasa capacidad de negociación directa con los empresarios.

En este nivel se hace de nuevo difícil distinguir lo que proviene de una reflexión sistemática de aquello que busca justificar nuevas líneas de acción política. Es efectivo, sin embargo, que a nivel de sindicatos de base se ha planteado el problema de la autonomía sindical, pero la forma en que se ha reconstituido la vida política en los últimos años hace pensar que la acción obrera seguirá bajo influencia de las orientaciones partidistas.² Desgraciadamente se ha explorado poco la relación sindicatos-partidos y la atención se ha centrado en analizar la política gubernamental.

Existe una gran cantidad de estudios dedicados a la política laboral del régimen de Pinochet y a la nueva organización sindical. La ventaja de estos estudios es que han ido más allá del análisis exclusivamente jurídico de las nuevas disposiciones legales y de su intencionalidad política para interesarse en las tensiones políticas internas y externas que explican la relación entre represión y organización obrera. Es así como se ha puesto de manifiesto el fracaso de las primeras tentativas de división del movimiento sindical y de creación de un movimiento oficialista, la forma en que se reconstruye la organización y la actividad sindical a nivel de base y a nivel nacional a pesar de una legislación que buscaba su desintegración (Plan Laboral de 1978); la influencia del movimiento sindical internacional en la actividad y orientaciones sindicales internas.

El sector que ha sido más estudiado desde el punto de vista de la relación entre organización sindical, partidos políticos y Estado es la minería del cobre. El movimiento obrero en el cobre ha sido analizado, antes y después del golpe de Estado, no en términos de autonomía o dependencia sino a partir de las formas particulares de estruc-

² Como se pudo apreciar en la reunión organizada por la Confederación de trabajadores del cobre en diciembre, 1983.

turación de la acción sindical. El tipo de relaciones sociales del trabajo en empresas del "enclave" ha servido para caracterizar el comportamiento de los mineros, la dirección de la empresa y el gobierno, al mismo tiempo que explica los mecanismos de formación de los grupos dirigentes y su relación con los partidos (se vea en propósito el ensayo de Zapata). Este tipo de perspectiva, que se inscribe en la tradición de la sociología del trabajo francesa, contrasta con aquellas que presentan a los trabajadores ya sea como víctimas de las condiciones impuestas por un régimen de dominación o como los protagonistas heroicos de una lucha sin contradicciones internas. Este enfoque permite también salir del *impasse* de los estudios sobre sindicalismo abocados a establecer el carácter economicista o político de la acción sindical. Queda sin embargo por investigar las intervenciones de carácter más estructural del Estado que afectan las condiciones del asalariado en general. Más allá del derecho laboral, ¿qué tipo de regulación ejerce el Estado en el mercado de trabajo? ¿Cuál es la relación que se ha establecido entre el gobierno y los grupos empresariales? La experiencia de los últimos diez años parece indicar que el gobierno ha escogido dosis diferentes de intervención según la coyuntura económica y política. Al mismo tiempo que se producía una reducción del gasto social, el régimen militar hubo de destinar recursos al mercado de trabajo para evitar una explosión social y mantener bajo control a los cesantes (Programas de empleo subsidiado). En los últimos meses la tendencia es por el contrario, a reducir los programas de emergencia y dejar sin sueldo mínimo a los cesantes.

Por otra parte el gobierno se ha guardado de no intervenir en los conflictos del trabajo impulsando una legislación que asegura las mejores condiciones para el ejercicio del poder patronal y la flexibilidad suficiente para licenciar y reducir salarios.

Esta mezcla de retiro-intervención del Estado en materias del trabajo ha contribuido a aumentar la precariedad de la condición obrera y ha colocado a las capas de trabajadores expulsados del asalariado en una situación de dependencia de las políticas estatistas de corto plazo. Estos mecanismos han permitido mantener separadas la formulación de reivindicaciones de las capas medias y de los pobladores al mismo tiempo que deja el terreno abierto para recurrir a medidas populistas de reactivación de iniciativa estatal.

Condiciones de trabajo y acción obrera

Si la política económica ha tenido un impacto en el tejido social y la política laboral ha modificado las formas de organización de la clase

obrero ocupada, ¿cuál es la realidad cotidiana de los trabajadores en los lugares de producción? Esta pregunta se refiere a un campo de investigación prácticamente inexistente en Chile donde se cumple la constatación hecha por R. Katzman y J. L. Reyna sobre la escasez de estudios sobre el trabajo y los trabajadores en América Latina. Se ha privilegiado el estudio de las influencias externas (partidos, Estados), más que el estudio de la empresa y de las condiciones de aparición de la acción obrera. Desde 1959 cuando se hizo la investigación comparativa de las relaciones sociales y actitudes obreras en el acero (Huachipato) y el carbón (Lota) no existen estudios acabados sobre el trabajo.

Se puede incluso decir que la literatura se ha interesado más en la vida de los trabajadores que las Ciencias Sociales.

Por esta razón, es difícil apreciar el impacto real de las políticas monetaristas en la situación de trabajo. Cuando no se conoce el tipo de tecnología utilizado, las formas de organización del trabajo y de gestión de la mano de obra, no es posible establecer si ha habido modernización en las actividades productivas, ni cómo han cambiado las condiciones de trabajo.

La escasa evidencia que existe indica que no se han introducido cambios tecnológicos en los procesos de producción sino que la modernización se ha concentrado en las funciones indirectas bajo la forma de racionalización o de informatización de las funciones administrativas. Los trabajos monográficos indican que en las industrias que han sobrevivido a la crisis hubo reducción del empleo, intensificación del trabajo por aumento de horario y horas suplementarias, reducción de salarios y deterioro de las condiciones de trabajo. La contratación de mano de obra joven, sin experiencia de trabajo y sin calificación permitieron en muchos casos hacer pasar las medidas de racionalización. La amenaza de cierre o de reducción de salarios también afectó la capacidad reivindicativa de los trabajadores. Las escasas huelgas que se han producido en la industria han sido un fracaso desde el punto de vista de la negociación colectiva si bien los trabajadores han visto en el conflicto una forma de afirmar su capacidad de iniciativa.

La clase obrera ocupada en la industria es sin embargo una fracción minoritaria con respecto al conjunto de la clase trabajadora (600 mil sobre 3.5 millones en 1979). Para el trabajador que está fuera de la relación salarial, el problema de la sobrevivencia lleva a la formulación de un conjunto de intereses diferentes a los del obrero industrial. Lo mismo para el conjunto de los que se desempeñan en el sector informal, sector al cual se le han consagrado un gran

número de investigaciones que buscan establecer si se trata de sub-empleo, de actividades artesanales, productivas o terciarias (Prealc, 1980).

La interrogante principal es la de conocer cuáles son los principios de identificación y las orientaciones políticas de las capas populares no industriales. ¿Se puede hablar de una segmentación entre estos sectores y la clase obrera calificada que se ha mantenido ocupada?

Las formas de acción colectiva que se han desarrollado desde 1982 indican que ha cambiado la relación actores sociales-partidos políticos, puesto que éstos últimos no son los que convocan y organizan la movilización de masas. Las alianzas y agrupaciones de organizaciones políticas han tendido más bien a reforzar y capitalizar los movimientos de oposición al régimen, pero la iniciativa ha venido de los grupos sociales.

El contenido que ha adquirido la movilización popular y las orientaciones del movimiento sindical obligan a recurrir a nuevas categorías conceptuales, puesto que la oposición no se da entre una clase obrera y una clase capitalista, a partir de la situación de trabajo, sino que toma la forma de una confrontación entre un pueblo relativamente desorganizado y el Estado. La pregunta que surge es la de saber si, terminado el paréntesis del régimen de excepción, la lucha social volverá a retomar sus características clasistas o si la necesidad de preservar un consenso nacional, que algunos designan como punto social, será la nueva modalidad del antiguo "Estado de compromiso"

Políticas de informática en los países dependientes

Lidia M. Segre y Enrique V. Anda

OBJETIVO

El objetivo de este trabajo es realizar un análisis del impacto que ha tenido el desarrollo de la informática sobre las sociedades dependientes. Dentro de la perspectiva latinoamericana se estudia en algún detalle el modelo brasileño, cuyo pilar central radica en la reserva de una porción importante de su mercado para la industria nacional. Se analizan algunos de los aspectos benéficos que estas medidas han tenido, junto con las limitaciones que este modelo tiene al encontrarse inscrito dentro del marco fijado por el proceso de sustitución de importaciones. Son estudiados y comparados otros modelos de informatización de países dependientes. Finalmente, dentro del contexto del análisis presentado, se esbozan algunas ideas que podrían servir de base para la formulación de un modelo de desarrollo de tecnología nacional en el área de informática.

INTRODUCCIÓN

La informática se ha transformado en las últimas dos décadas en la actividad industrial más importante del mundo capitalista. Su impacto está promoviendo cambios cuyo alcance en el futuro resulta difícil de evaluar, aunque ya pueden vislumbrarse algunas de sus consecuencias.

Esta nueva tecnología ha permitido que la industria revolucione su gestión, automatizando sus sistemas administrativos y participando en redes nacionales y mundiales de datos que están constituyendo un elemento fundamental de integración regional e internacional. Esto ha acelerado el proceso de concentración y centralización del capital, la oligopolización de la actividad económica y la expansión en escala planetaria de las multinacionales. El poder integrador y diversificador característico del desarrollo del capitalismo se potencia con la informatización de la sociedad y con la aparición de la telemática.

Aún dentro de la esfera de la producción es posible visualizar en los países avanzados una transformación profunda, aunque incipiente en sus consecuencias y alcances potenciales, de los procesos productivos cada vez más automatizados, robotizados y controlados por sistemas en tiempo real. Esta circunstancia está generando grandes cambios en la relación capital-trabajo, creando necesidades de mano de obra con valores crecientes de calificación y produciendo como consecuencia un desplazamiento de mano de obra y desocupación. Este mismo proceso tecnológico es la fuente de una nueva división internacional del trabajo que sólo ahora comienza a delinearse.

Al nivel de la superestructura ideológica, la informática ha generado transformaciones del mensaje cultural (valores, prejuicios, formas de representación de la realidad, expresiones artísticas etc.); ha fortalecido una cosmovisión integradora, justificadora y apologetica de la sociedad actual; promoviendo al mismo tiempo en su discurso los cambios individuales y sociales necesarios a las nuevas realidades propuestas por este propio aparato cultural, y fundamentalmente por la realidad económica y tecnológica cambiante.

Es posible vislumbrar una exacerbación del individualismo en el ámbito de las relaciones sociales junto con su negación expresada a través de una estereotipificación y masificación del comportamiento: una sociedad informatizada que genera una ilusión de descentralización y participación ofreciendo información para todos, frente a un Estado más centralizado y omnímodo que entra cada vez más en el terreno de lo privado, manejando información correspondiente a los individuos y a sus estructuras de actuación. Esta situación agiganta las potencialidades de los aparatos coercitivos del Estado.

Los fenómenos resultantes de la informatización de las sociedades capitalistas centrales también se manifiestan con sus especificidades en el mundo dependiente.

Cómo se presentan con sus potencialidades en el Tercer Mundo, constituye el contenido del siguiente análisis.

INFORMATIZACION DEL TERCER MUNDO

El mundo periférico ha entrado en la era de la informática como un acto reflejo de los desarrollos que se fueron produciendo en los países centrales, de una manera diferenciada en función de su inserción en el mercado internacional y del grado de complejidad e integración interna de su estructura económica social. Así, los países de Asia y Africa más atrasados que han ingresado al mercado capitalista muy

tardíamente, aún no han generado respuestas de importancia en relación al desafío informático, limitando su influencia a los medios de comunicación aún con difusión limitada e incapaces de generar una expresión de masas para el fenómeno cultural. Otro grupo de países, los llamados de industrialización reciente (típicamente en América Latina: México, Brasil, Argentina, Venezuela y Chile) han sido penetrados por la nueva tecnología de una manera importante.

Dentro de este ámbito podríamos, con objetivo de análisis, clasificar estos países en relación a si se constituyen en nuevos usuarios de bienes informáticos que importan, o si poseen una industria de informática. Estos últimos pueden ser agrupados en función a si su producción industrial está dirigida fundamentalmente al mercado interno o al de exportación.

Entre los primeros el ejemplo de México y Argentina es bastante representativo. Estos países tienen un desarrollo industrial significativo y la sociedad se encuentra con un grado de informatización apreciable. Sin embargo, esto no ha sido acompañado de un crecimiento de la industria de computadores, periféricos y otros equipos. Las empresas multinacionales que operan en el ramo comercializan sus productos y ofrecen mantenimiento a la capacidad instalada. Se observa la aparición de actividades en el área de software aplicativos que son implementados en los equipos extranjeros con finalidades administrativas, tanto para las empresas privadas como del Estado y con fines educativos dentro de la Universidad y en los medios de comunicación de masas.

Ha existido un criterio eficientista en la incorporación de esta tecnología a los sectores más dinámicos de la economía, sobre todo en las grandes empresas privadas, habiendo una incompreensión y poca asimilación por parte de las pequeñas y medianas empresas que han tenido dificultades para incorporarse a los nuevos tiempos.

Esta ha sido la situación sobre todo en la Argentina, siendo que en el caso mexicano, dado el papel protagónico que el Estado juega en la actividad económica, este proceso ha sido cumplido por la empresa pública y la administración del Estado.

Tanto en Chile como en la Argentina los aparatos represivos del Estado han automatizado y computarizado sus archivos integrando redes de comunicación policial que permite, en todo el ámbito nacional, disponer de información inmediata sobre personas y organizaciones de la sociedad civil. El desarrollo de una industria de armamentos en el caso de la Argentina también ha representado una demanda de alguna significación de equipos electrónicos de procesa-

miento de datos, software, circuitos integrados, analizadores rápidos, etc.

Lo que distingue estos países de los otros mencionados es la ausencia de una política de desarrollo industrial implícita o explícita, es la existencia de una ideología del buen usuario que debe saber qué compra y a quién, sin preocuparse por su fabricación. Podría decirse que en estos países el proceso de sustitución de importaciones, que caracteriza la industrialización dependiente, no se ha iniciado o se encuentra en su fase embrionaria. En algunos casos, como la Argentina después del golpe de Estado de 1976, hubo una política deliberada de acabar con algunas experiencias promisorias que se estaban desarrollando dentro de la industria privada. Esta política fue una expresión de intereses económicos que se manifestaban en torno de un discurso de ortodoxia económica que afirmaba ser necesario el aprovechamiento de las ventajas comparativas, que en el caso de la Argentina limitaban su actividad económica a la esfera agrícola ganadera e industrias derivadas.

Diferente es la experiencia de otros países dependientes que ya iniciaron un proceso de industrialización. Sin embargo, estas experiencias no han sido homogéneas. En un caso asumieron las características propias del proceso de sustitución de importaciones que mencionábamos, donde los productos vienen a satisfacer necesidades del mercado interno, como es el caso de Brasil y la India.

En otros puede ser caracterizado más como actividades resultantes de una economía de enclave donde las multinacionales de la informática se instalan en aquellos países que por razones políticas e institucionales les dan libertad de aprovechar la mano de obra barata local en determinados procesos de la producción del bien (típicamente encapsulado de circuitos, montaje de todo tipo y testaje) intensivos en mano de obra. El objetivo es abaratar los costos de un producto que está destinado al mercado internacional; se importa el producto intermediario, se procesa y luego se exporta, generando muy poca repercusión sobre el resto de la economía.

Representantes típicos de esta situación son Corea del Sur y Taiwan. El grado de desconexión entre la producción y el mercado interno es tan grande, el sistema funciona a tal punto como economía de enclave, que existen productos elaborados en Corea, por ejemplo, que son exportados a los países donde operan las matrices, para luego ser reimportados para el consumo interno coreano.

Esta internacionalización del proceso productivo es un fenómeno bastante difundido en todos los ámbitos de la actividad económica. Corresponde a una nueva división internacional del trabajo resulta-

do de una actuación de la multinacional que le permite aumentar sus beneficios sobre la base de minimizar costos, parcelando la producción entre diferentes regiones del mundo donde operan y manipular precios aprovechando su posición oligopólica tanto en el mercado de compra como de venta. Esta posibilidad es en buena medida un resultado del propio desarrollo de la informática, lo que le permite a la multinacional disponer de información a nivel mundial para formular su estrategia.

EL MODELO BRASILEÑO

La política nacional de informática comenzó a delinearse en el inicio de los años 1970 cuando surgió la posibilidad de desarrollar tecnología nacional debido a la creciente demanda de computadores y a la disponibilidad de técnicos e ingenieros de alto nivel.

En esa época fue creado el GTE (Grupo de Trabajo Especial) con la participación del BNDE (Banco Nacional de Desarrollo) y el Ministerio de la Marina con el objetivo de fabricar computadores para ser instalados en corbetas y submarinos de la Marina de Guerra.

Además de estudiar la implantación de la industria nacional de computadores el GTE patrocinaba el proyecto de un minicomputador desarrollado por dos universidades.

Paralelamente fue constituida en 1972 la CAPRE (Comisión de Coordinación de las Actividades de Procesamiento Electrónico) dependiente de la Secretaría de Planificación cuyos objetivos eran disciplinar los gastos públicos controlando las compras de computadores, optimizando el uso de recursos ociosos, controlando las asociaciones con capitales extranjeros y estableciendo criterios en relación a la formación de recursos humanos.

En 1976 la CAPRE determinó la reserva de mercado como herramienta utilizada por la política de informática, para proteger el mercado interno de mini y microcomputadores y dando apoyo concreto a las empresas de capital nacional.

La más importante fábrica estatal de computadores, COBRA, comenzó a funcionar en 1974. COBRA venía a culminar el proceso iniciado por el GTE incorporando a su plantel una parte de los técnicos que habían trabajado en el proyecto inicial.

En 1977 cinco empresas nacionales fueron seleccionadas para operar en el segmento de micro y minicomputadores. Esas empresas comprarían tecnología extranjera con el compromiso de generar en cinco años productos nacionales.

En 1979 las Fuerzas Armadas encuadraron el sector de informáti-

ca como un área estratégica de la seguridad nacional. Como consecuencia de ello se produjo una reestructuración de los órganos gubernamentales responsables por este sector y la CAPRE fue substituida por la SEI (Secretaría Especial de Informática) subordinada al Consejo de Seguridad Nacional. A pesar de la casi total sustitución de los técnicos y dirigentes, la SEI mantuvo la política de reserva de mercado iniciada por la CAPRE y amplió su gama de actividades incluyendo otros sectores industriales tales como microelectrónica, instrumentos y equipos de comunicación.

A mediados de 1981 fue creado un complejo tecnológico e industrial (CTI) dedicado al desarrollo nacional de la microelectrónica. El objetivo del CTI era propiciar una alianza entre la industria, las universidades y los órganos gubernamentales para permitir la fabricación de circuitos integrados.

Percibiendo las nuevas tendencias tecnológicas, la SEI en 1983 incluyó los computadores llamados superminis en la faja de reserva de mercado ampliando así el ámbito de actuación de las empresas nacionales.

Existen en este momento en Brasil alrededor de 100 empresas nacionales cuyos proyectos de fabricación de computadores y periféricos fueron aprobados por la SEI por cumplir con los requisitos estipulados en relación al grado de utilización de recursos tecnológicos locales, índice de nacionalización del producto y nacionalidad de la empresa.

Las empresas nacionales casi cuadruplicaron sus ventas entre los años de 79 a 82, según datos elaborados por la SEI. Durante el mismo periodo la participación de estas empresas en las ventas totales se duplicó, prácticamente sacándole una parte significativa a las multinacionales que están cada día más preocupadas con esta pérdida, dentro de un mercado que se coloca en el séptimo lugar en el *ranking* mundial (en 1981 el mercado se estimaba en mil millones de dólares).

<i>Año</i>	<i>Ventas nacionales</i>	<i>Ventas totales</i>	<i>% de Ventas nacionales</i>
1979	190	830	23
1980	280	860	33
1981	370	1040	36
1982	640	1560	41

Evolución de las ventas de equipos de procesamiento de datos en Brasil (US \$ millones)

El parque instalado en Brasil creció tres veces entre 1980 y 1982 en cantidad, y la participación de las empresas nacionales pasó de 17 % a 50 % en este mismo periodo en relación al valor, ya que este aumento corresponde a la entrada de micros y minicomputadores nacionales en el mercado.

PARTICIPACION DE LAS EMPRESAS NACIONALES EN EL PARQUE INSTALADO DE COMPUTADORAS

<i>Año</i>	<i>Parque instalado</i>		<i>Participación nacional</i>	
	<i>Cantidad</i>	<i>Valor (US \$ 1.000 millones)</i>	<i>Cantidad</i>	<i>Valor</i>
1980	8.844	1.650	17 %	7 %
1981	14.249	2.140	42 %	14 %
1982	23.305	2.500	50 %	20 %

Una de las principales consecuencias de la política de reserva de mercado fue la de acelerar el desarrollo de tecnología nacional. En 1982 las empresas nacionales gastaron un promedio de 8.88 % de sus ventas en investigación y desarrollo tecnológico local empleando 17.3 % del total de su personal en estas actividades. Las empresas nacionales además de nacionalizar sus productos fabricados con licencias, desarrollan nuevos productos.

La industria nacional emplea 230 % más que las empresas multinacionales y, del total de empleos, contrata un 48 % más de técnicos de nivel superior. El número de empleos de nivel superior por cada 100 millones de dólares facturados obedece a la siguiente comparación:

CANTIDAD DE FUNCIONARIOS DE NIVEL SUPERIOR POR
CADA 100 MILLONES DE DOLARES FACTURADOS EN EL MERCADO

<i>Tipo de actividad</i>	<i>Empresa Nacional</i> <i>1</i>	<i>Multinacional</i> <i>2</i>	<i>Relación</i> <i>1/2</i>
Desenvolvimiento de nuevos productos	224.5	14.5	15.48
Ventas	84.3	160.7	0.52
Producción	75.4	59.1	1.27

Los técnicos de nivel superior son formados en los cursos de graduación y posgraduación de las diferentes universidades del país y se han hecho estudios que demuestran que la demanda generada por las empresas nacionales está creciendo de manera tal que en los próximos años no conseguirá ser satisfecha.

Estas cifras demuestran cómo el modelo de desarrollo industrial nacional genera mayor número de empleos, de recursos humanos de alta calificación y tecnología nacional, sea en las propias empresas, en centros de investigación y universidades, adecuando los productos a las particularidades del mercado.

La industria nacional de informática está reduciendo enormemente el número de componentes importados en la fabricación de sus productos, llegando éstos a altos índices de nacionalización. (Por ejem. los computadores de la serie COBRA 500 alcanzaron un índice de nacionalización del 97 %).

Comparando las importaciones realizadas por las empresas extranjeras y por las empresas nacionales en relación a las ventas, a partir de datos elaborados por la SEI, podemos concluir dos hechos: las empresas nacionales importaron el equivalente a 8.1 % de sus ventas, mientras que las multinacionales el equivalente a 40.3 % de sus ventas; las empresas nacionales importan cada año menos: en 1983 el porcentaje importado disminuyó a un 7.5 %.

En relación a las exportaciones, hay un número relativamente pequeño aún de empresas que exportan sus productos hacia América Latina (Argentina, Chile, Paraguay, Venezuela, Colombia, México) y hacia países socialistas (China y Este Europeo).

Hay dos factores que han determinado estas exportaciones incipientes. Por un lado la disminución de los precios de los productos nacionales que en algunos casos ya son competitivos con el mercado

externo (para ciertos productos entre febrero de 1982 y agosto de 1983 hubo reducciones de 30 a 40 %, mientras que en el mismo período la IBM aumentó en 38 % el precio de su computador 4341).

Por otro lado el hecho de desarrollar productos originales que no se encuentran en el mercado internacional y que satisfacen mejor las necesidades de los países vecinos con realidades similares. Como ejemplos podemos citar el terminal para lotería, terminales bancarios y microcomputadores con procesamiento de voz.

Podemos incluir como otros factores que favorecen esas exportaciones la identidad cultural y lingüística que facilita el uso de manuales técnicos, la proximidad física y económica que facilita el flete, el traslado de técnicos y que permite el uso de exenciones fiscales de la ALALC.

Hay que considerar también el hecho de que en el momento actual hay varias empresas trabajando con acuerdos de tecnología por licencia con empresas extranjeras que impiden el acceso al mercado internacional.

ANALISIS CRITICO DE LOS MODELOS DE INFORMACION DE LOS PAISES DEPENDIENTES

El breve análisis realizado sobre la industria de procesamiento de datos en el Brasil muestra claramente las posibilidades concretas de desarrollar, con cierto grado de autonomía, un área productiva con gran contenido tecnológico por parte de un país dependiente.

Es necesario para conseguir este objetivo una serie de condiciones, tales como: tamaño del mercado, infraestructura industrial complementaria, recursos humanos y, lo que es absolutamente esencial, la formulación de una política explícita y del poder para desarrollarla, que permita generar las condiciones necesarias y vencer los obstáculos creados por los intereses afectados.

Es indudable que el modelo que reserva parte del mercado para la empresa nacional, que favorece su desarrollo con incentivos fiscales y facilita su operación, es superior al camino seguido por otros países del Tercer Mundo, tanto los que han optado por limitarse a ser buenos usuarios, como aquellos que han permitido el ingreso libre de las grandes multinacionales de la informática.

Esto es así desde múltiples puntos de vista. En primer lugar, el desarrollo de una tecnología local, aunque ésta sea imitativa en sus comienzos, genera una oferta de mano de obra especializada que promueve la formación de personal en el área, desde el nivel técnico hasta el científico universitario. Esto sólo puede beneficiar al país y

posibilitar una autonomía en cuanto a la formulación de objetivos y ejecución de proyectos en ritmo creciente, además de aumentar el nivel cultural científico-técnico de la sociedad en su conjunto.

Desde un punto de vista económico la actividad tiene potencialmente, dependiendo de la integración nacional alcanzada, un grado de multiplicación alto, lo que puede llegar a representar un incentivo general para la economía por el lado de los usuarios como por el de los productos finales que provee.

Como todo proceso de sustitución de importaciones, el desarrollo de la industria de la informática posibilita ahorrar divisas externas de una forma global, orientando las importaciones a insumos intermedios de difícil fabricación local (p. ejem. circuitos con complejo grado de integración). Esto es particularmente importante para los países dependientes que tienen alto coeficiente de importaciones y pesadas deudas externas.

El papel de las multinacionales en los países del Tercer Mundo ya ha sido extensamente analizado en la literatura sobre el tema. Es bien conocido que la multinacional opera dentro de un país siempre con una estrategia global que raramente coincide con los objetivos de crecimiento económico y desarrollo autónomo. Así, actuando como simple filial de su matriz metropolitana, el conglomerado internacional aprovechará las ventajas comparativas del país huésped (típicamente mano de obra barata), o realizará inversiones como una forma de entrar al mercado interno nacional si le resulta promisor.

Por ser la filial una simple subestructura subordinada a una estructura mayor, ella no tendrá ninguna autonomía empresarial; no realizará innovaciones tecnológicas, ni generará nuevos productos, ni promoverá soluciones de problemas industriales locales, como tampoco procurará nuevos mercados, ya que estas iniciativas provendrán de su matriz.

El papel pujante y transformador de la industria, tal como surgió en los países de desarrollo original, revolucionador de las relaciones sociales, desaparecen en los países dependientes. Las economías fuertemente monopolizadas y controladas por las multinacionales promueven estancamiento y favorecen la perpetuación de ciertas estructuras rígidas y atrasadas. Las ganancias escapan de las fronteras asumiendo diferentes formas, la transferencia de tecnología que promueven es sólo marginal ya que el proceso productivo se implanta "llave en mano". La inserción dentro de la estructura económica, a través del requerimiento de insumos en el mercado local, es pobre o despreciable, sobre todo en una industria como la de informática

que requiere de insumos de gran complejidad tecnológica, en general inexistentes en el mercado local.

Las políticas intermediarias que pretenden disciplinar la actuación de las empresas extranjeras, no consiguen modificar significativamente este cuadro. Así, por ejemplo, las licencias a compañías nacionales para actuar como representantes de las multinacionales introduce una subordinación que no le permite a la industria nacional modificar autónomamente el producto ni el método de producción y la somete a la prohibición de usar los conocimientos licenciados después de la culminación del acuerdo. Por las mismas razones existe una situación equivalente en el caso de las *joint-ventures*, inclusive cuando el control accionario está en manos nacionales.

Si bien el modelo tipo brasileño es superior al modelo propuesto por las multinacionales, es necesario analizar críticamente esta propuesta "desarrollista". Las fuerzas impulsoras de este modelo han sido por un lado las empresas nacionales que han reconocido la existencia de un mercado de importancia y en creciente expansión donde operar. Por otro, sectores de las Fuerzas Armadas que, imbuidos de un nacionalismo doctrinario, han inclusive adoptado posiciones más intransigentes en la negociación con las multinacionales que algunos industriales nacionales que ven en la asociación con el capital extranjero una propuesta atractiva para desarrollar sus negocios.

Ha tenido también fundamental influencia para la formulación de esta política la existencia y creciente desarrollo de una industria de armamentos, la primera del Tercer Mundo, y mayor y más sofisticada que la de algunos países desarrollados. * Es posible reparar ya en términos de actividad industrial, tanto en "software" como en "hardware", productos cuyo destino es claramente bélico, actividad que está creciendo en forma rápida y que ya envuelve instituciones especializadas, órganos militares y hasta universidades.

Desde el punto de vista de la racionalidad de medios, inherente a la sociedad capitalista, la actividad bélica se justifica plenamente ya que, además de garantizar un aprovisionamiento independiente a las Fuerzas Armadas, es una fuente de recursos externos provenientes de un mercado internacional sofisticado y complejo.

Desde un punto de vista de una racionalidad de fines esta actividad es profundamente irracional ya que representa una dilapidación de recursos materiales y humanos en una sociedad de recursos escasísimos y con enormes problemas sociales.

* Brasil es el sexto exportador de armas en el concierto mundial.

Por otro lado, es evidente que esta propuesta de desarrollo de la informática, aunque tenga componentes nacionalistas, por venir a satisfacer la demanda de un mercado ya creado, se monta sobre un modelo de desarrollo que genera una distribución de los ingresos altamente regresiva, marginando a la mayor parte de la población. La informática impulsa este proceso de marginación relativa creciente, al acelerar la monopolización de la economía, el estancamiento consecuente y la distancia que separa los sectores sociales modernos de los atrasados. Desde un punto de vista económico la informatización de la sociedad se procesa solamente en los sectores modernos.

Es poco lo que puede verse, en esta creciente informatización, sobre las potencialidades aun inimaginables de ésta nueva tecnología, que podrían transformar radicalmente las relaciones entre el hombre y la naturaleza y entre los hombres si se pusieran al servicio de la resolución de los grandes problemas económicos y sociales que estas sociedades enfrentan.

CONCLUSIONES

La informática tiene la capacidad de cambiar el mundo de una manera radical al aumentar enormemente las capacidades del hombre como productor y administrador de bienes. Puede liberar la humanidad del sometimiento al trabajo rutinario y alienante a través de la robotización de las líneas de producción y la automatización administrativa, de manera de permitirle gozar de su tiempo libre desarrollando actividades creativas. En una nueva fase de la historia humana el hombre superando la necesidad, podría ejercer su libertad en plenitud. Sin embargo no parece ser ésta la tendencia que se va destacando como dominante en Europa y Estados Unidos, y mucho menos en el Tercer Mundo y América Latina, donde una lectura de la realidad muestra un cuadro de opresión y explotación creciente. La informática, como nueva tecnología, en un contexto de grandes problemas políticos, sociales y económicos, en algunos casos sólo parece agravarlos, aumentando las desigualdades entre el centro y la periferia a nivel mundial.

Frente a este cuadro nos parece indispensable un análisis atento y profundo de cuáles son los efectos del desarrollo de la informática sobre la sociedad dependiente, para evitar que un crecimiento irreflexivo de esta área pueda constituirse en un obstáculo más, fundamental por su impacto, para salir de la encrucijada que viven nuestros países.

Un análisis de esta naturaleza escapa de las posibilidades de este pequeño trabajo; sólo planteamos aquí algunas ideas.

No todos los usos de la informática son adecuados y convenientes y responden a los intereses de la sociedad donde se quiera aplicar, de forma de preservar sus valores locales. Es por tanto necesario estudiar los efectos colaterales negativos del desarrollo de la informática y en algunos casos montar experiencias piloto antes de lanzarse a un uso irresponsable de la informática sin haber previsto sus consecuencias.

Así, un proceso de robotización de la industria de punta latinoamericana, como comienza a verse en algunos sectores (fundamentalmente ligados a las multinacionales) no puede interesar actualmente a la región, ya que son procesos costosos, consumidores de divisas y reducidos de demanda de mano de obra no especializada, cuando existen parcelas importantes de la población desocupadas. En la educación también el computador puede ser una herramienta muy poderosa, pero su uso necesita ser estudiado para ver de qué forma y para niños de qué edades esta herramienta puede realmente beneficiar la calidad y la divulgación de la enseñanza.

Nos parece que una sociedad que se propone salir del atraso y de la dependencia, estructurándose con un nuevo contenido social, no puede marginarse del problema informático; debe hacerse un estudio que permita el uso de esta tecnología como herramienta liberadora y no de opresión.

La sociedad debe buscar un uso alternativo de la tecnología adaptándola y desarrollándola en función de sus problemas y de sus aspiraciones, como un acto reflexivo y consciente. Es necesario para ello la formulación de una política explícita en esta área, que supere el inmediatismo de un mercado, expresión del propio atraso y dependencia que se quiere superar, y que delimite el papel que la informática deberá cumplir en este proceso.

Esta formulación, estructurada en torno de una legislación explícita, requiere de una participación activa no sólo de los poderes del Estado sino también de toda la sociedad civil a través de sus manifestaciones mayoritarias y de la comunidad de científicos y técnicos del área que de una manera general han jugado, por lo menos dentro del ámbito de América Latina, un papel importante en la defensa de los intereses nacionales. Desgraciadamente la elaboración e implementación de estas políticas en algunos casos, como es el de Brasil, queda restringida casi exclusivamente al ámbito de las Fuerzas Armadas que, interesadas en una industria bélica en pleno desarrollo,

han caracterizado esta área tecnológica como clave para la llamada seguridad nacional.

Sería fundamental que, a través de organismos del Estado especialmente creados para ello, con colaboración de otras estructuras como las universidades, se promuevan aplicaciones de la informática para resolver importantísimos problemas que la economía o la población destacan, como por ejemplo: control de las cuencas fluviales e irrigación, planificación urbana, complementación y optimización del aparato educativo, informatización de toda la estructura hospitalaria estatal, generación de grandes bancos de datos, integrados en redes nacionales, sobre recursos hídricos, minerales, agrícolas, etc. Estas aplicaciones tienden a optimizar los recursos disponibles, ayudando a resolver problemas de salud y educación integrando regiones de diferente nivel de desarrollo en un país y entre países. Es fundamental extender estas aplicaciones para integrar los países latinoamericanos que tienen problemas similares para resolver y pautas culturales parecidas. Para esto es de la mayor importancia el desarrollo y la implantación de redes de comunicación latinoamericanas y un mayor intercambio entre los países de América Latina.

Bibliografía

- Bastos Tigre, Paulo, "Ainda o desafio de industria brasileira de computadores", *Revista Brasileira de Tecnologia*, vol. 14, pág. 3, mayo/junio, 1983.
- Bastos Tigre, Paulo, *Computadores brasileiros; industria, tecnologia e dependencia*, Editora Campus, Río de Janeiro, 1984.
- Friedrichs G. y A. Schaff editores, "*Revoluzione Micro-Eletronica, rapporto al Club di Roma*", Mondadori, Milano, 1982.
- Mattelart, Armand y Hector Schmucler, *América Latina en la encrucijada telemática*, Paidós Comunicación, Buenos Aires, 1983.
- Pereira de Lucena, Carlos José, "Avaliação técnica e científica das instituicoes es de ensino e pesquisa da área de informática", XVI Congreso Nacional de Informática, San Pablo, octubre de 1983.

Zamatti Mammana, Cláudio y Edson Fregui, "Inf̄rmática forca de una vontade política", *Revista Brasileira de Tecnologia*, vol. 14. págs. 5 y 6, sep./dic. 1983.

Documento: Nicaragua, análisis de los resultados electorales

En la mañana del 6 de noviembre, día de las elecciones norteamericanas, "The Washington Post" hizo público un documento "secreto" y "delicado" (*secret-sensitive*) preparado para el Consejo de Seguridad Nacional de los Estados Unidos en el que —además de referirse al éxito en el "bloqueo" a Contadora— se informaba de la campaña realizada para convencer a los norteamericanos y al mundo de que las elecciones nicaragüenses eran "una farsa". Pero un primer análisis sobre las elecciones de Nicaragua y sobre los resultados de los comicios destruye todos los prejuicios acumulados contra el proceso electoral y contradice en todos sus aspectos la propaganda norteamericana sobre el mismo.

Unas elecciones limpias, libres, abiertas a todos

Las elecciones nicaragüenses* no se celebraron en los momentos de euforia nacional producida por el derrocamiento de la dictadura somocista. El FSLN, partido en el poder, se arriesgó a celebrarlas después de cinco largos años de gobierno, con su inevitable secuela de desgaste. El FSLN cumplió su compromiso y celebró las elecciones a los cinco años del triunfo, según lo había anunciado en 1980, y según lo requerían las más urgentes necesidades de la reconstrucción nacional.

Las reglas del juego electoral —la ley Electoral— estuvieron listas siete meses antes de la fecha de las elecciones y cuatro meses antes del comienzo de la campaña. Ciertas modificaciones introducidas en meses sucesivos fueron producto de la negociación con otros parti-

* Documento del Instituto Histórico Centroamericano, publicado en *Envío*, Managua, Nicaragua, año 4, núm. 1, noviembre 1984.

dos y todas ellas aumentaron las oportunidades de actividad pre-electoral y dieron mayores garantías para la presencia y actividad política postelectoral de los partidos que resultaran perdedores. aumentaron las oportunidades de actividad preelectoral y dieron mayores garantías para la presencia y actividad política postelectoral de los partidos que resultaran perdedores.

El consejo Supremo Electoral, organismo pluralista, organizó las elecciones y los escrutinios con una real independencia de los demás poderes del Estado. El Consejo fue un organismo fundamentalmente abierto. A los observadores internacionales que vinieron a las elecciones les abrió, por ejemplo, todos sus archivos de quejas. Los observadores se encontraron con 48 expedientes, centrados en su mayoría en casos sobre el derecho a votar de personas individuales. El resto de las quejas se referían a algunos incidentes o disturbios producidos durante actos electorales públicos de partidos opositores inscritos.

Ningún acto electoral de los partidos opositores inscritos tuvo que ser suspendido. Un estudio del diario "La Prensa" durante los tres meses de campaña electoral, así como un estudio de los discursos electorales de los candidatos opositores —en calles, plazas y demás lugares públicos, así como en la radio y la televisión— revela la franqueza y acritud con que libremente se pudo acusar al FSLN de ser el responsable de la guerra, de querer instaurar un régimen totalitario, de irrespetar a la jerarquía católica y provocar tensiones con ella o —desde un punto de vista de otros grupos de izquierda— de ser responsable de la derechización de la revolución, de componendas con la burguesía y de sectarización frente a otros partidos revolucionarios.

Durante toda la campaña, el real levantamiento de la censura de los medios de comunicación —excepto en lo referente a cuestiones militares— tuvo un único quiebre legal: la edición del diario "La Prensa" del lunes 22 de octubre, en la que se informaba sobre la decisión del PLI de no ir a las elecciones, fue censurada. Sin embargo, ese mismo día Virgilio Godoy, candidato a la presidencia por el PLI, apareció en las pantallas de TV en hora de máxima audiencia, para hablar durante 20 minutos sobre las razones de su decisión abstencionista. En su intervención, se refirió a la censura de "La Prensa", hecho, con el que confirmaba su apreciación de que había "condiciones" para las elecciones. Con rapidez, pues, se subsanó, a través de la TV, medio de mayor alcance público que el de un diario, el único desliz legal en este campo.

CUADRO I

Resultado de las Elecciones para Presidente, Vicepresidente y Asamblea Nacional Constituyente

	JRV*						
	Números absolutos	Porcentajes %			Porcentajes %		Números absolutos
Juntas Receptoras de Votos	3,876						
Ciudadanos Inscritos	1.551.597						1.170.102
Votos Depositados	1.170.142	75.4			75.4		381,495
Abstenciones	381,455	24.6			24.6		1.091,878
Votos Validos	1.098,933	70.8			70.4		78,224
Votos Nulos	71,209	4.6	6.1		5	6.7	729,159
FSLN	735,967	47.4	62.9		47	62.3	152,883
PCD	154,327	10	13		9.9	13	105,497
PLI	105,560	6.8	9		6.8	9	61,525
PPSC	61,199	3.9	5.2		4	5.3	16,165
PC de N	16,034	1	1.4		1	1.4	15,306
PSN	14,494	0.9	1.2		1	1.3	11,343
MAP-ML	11,352	0.7	1		0.7	1	

Fuente: Consejo Supremo Electoral

* Había en el país un total de 3892 jrv. No funcionaron 16 por razones de guerra.
 ** Los porcentajes *sobre los votos depositados* van destacados con una fecha. Son los que utilizamos más en el análisis ya que son los que cuentan democráticamente en cualquier elección.
 *** Los totales de votos válidos obtenidos por los partidos en la elección para la Asamblea son los que se usan para la obtención de un cociente electoral por regiones en el método proporcional diseñado por la Ley Electoral de Nicaragua.

Total de votantes, de no votantes, de votos nulos

Centenares de observadores y periodistas internacionales fueron testigos el día 4 de noviembre de una votación ordenada y masiva, sin la presencia del ejército en las calles de las ciudades, cuyos resultados finales fueron éstos:

Estos resultados globales son suficientes ya para deshacer la imagen prefabricada por Estados Unidos de unas elecciones totalitarias o dictatoriales. Ni en la Nicaragua de Somoza ni en el Chile de Pinochet ni en la España de Franco ni en el Gran Reich de Hitler* ni en los países del bloque soviético —donde los mecanismos electorales responden a otro tipo de sociedad— nos encontramos con resultados que presenten menos del 95 % de asistencia a los comicios. *El 24.6 % de los nicaragüenses inscritos que no pudo o no quiso ir a votar indica con claridad que éstas no fueron elecciones de las que son calificadas como “plebiscitarias”* y destruye la propaganda que dice que los nicaragüenses viven en una atmósfera de presión y miedo totalitarios.

El 4.6 % —sobre el total de ciudadanos inscritos— que fue a votar pero que depositó un voto nulo —por las razones que sea— termina de quitar base a la mencionada propaganda y, junto a otros resultados, contribuye a atestiguar que hubo un real ejercicio del voto secreto.

Asistió a las urnas el 75.4 % de los ciudadanos inscritos. Es un porcentaje de participación electoral comparable al promedio normal de las democracias tradicionales y es una cifra muy superior a las de la participación en las elecciones de Estados Unidos desde 1960. En aquel año, en la contienda entre Kennedy y Nixon, votó el 60 % de los ciudadanos inscritos. Este record no ha sido mejorado sino disminuido en los 24 años siguientes. **

Teniendo en cuenta que la Coordinadora Democrática no inscribió candidatos, que su líder Arturo Cruz expresó públicamente su intención de no votar, que la campaña norteamericana sobre “la farsa” electoral fue retomada diariamente por el diario de Managua “La Prensa”, no hay duda de que la gran mayoría de los nicaragüen-

* Incluida la votación *Anschluss* en Austria en 1938, que fue mencionada por el Representante de EE.UU en la ONU en el debate del Consejo de Seguridad (9 de noviembre).

** Es presidente Reagan fue reelecto con el 59 % del total de votos. No indican los despachos de prensa que tenemos a mano si esta cifra y la conseguida por Mondale (41 %) es sobre los votos válidos o sobre los votos depositados (incluyendo válidos y nulos).

ses — más de un 70 % de los inscritos— no compartieron esas posiciones y valoraron la elección como un acontecimiento serio.

Hay que tener en cuenta también que “Radio Impacto” de Costa Rica y la radio “15 de Septiembre”, portavoz del FDN desde Honduras —que se oyen perfectamente en amplias zonas de Nicaragua incluso a través de la onda media—, no llamaban a la abstención. Más bien hablaban de las graves represalias que se tomarían contra los que no votaran; por eso, convocaban a asistir pero a depositar un voto nulo. Parece claro también que el 6 % de votos nulos —sobre el total de los depositados— indica el poco éxito que tuvo esta propaganda. El hecho de que sólo 16 de las 3892 Juntas Receptoras de Votos no funcionaran con normalidad indica también la decisión con que el proceso electoral se llevó a cabo, aun en zonas de guerra.

Los votos de cada partido: cifras y especulaciones

El FSLN obtuvo el 63 % de los votos depositados: * Esto lo convierte en la primera fuerza política del país. Indica “su hegemonía”, según lo expresaba el diario “Le Monde” de París. Este resultado refuta la imagen de una elección “plebiscitaria”, que era la predicha por la propaganda norteamericana. Un 31 % de los votos depositados correspondió fragmentadamente a los 6 partidos opositores inscritos, concentrándose en tres partidos de centro-derecha el 27 % de los votos depositados y apenas un 4 % en otros tres partidos ubicados más a la izquierda del FSLN.

Estos resultados son increíbles no sólo por la honestidad seguida en los procedimientos electorales el día de la votación, honestidad ampliamente atestiguada por observadores de muy diversos países y por cables internacionales de prensa. Son creíbles también porque se ajustan a la capacidad de convocatoria mostrada por el FSLN y por los otros partidos en sus actos de campaña electoral. Muchos de los observadores y periodistas internacionales fueron testigos de la enorme concentración con que se cerró la campaña del FSLN en Managua el 1 de noviembre y de que para esta manifestación no hubo transporte estatal ni regalos ni bonificaciones especiales. Finalmente, los masivos informes del Consejo Supremo Electoral durante el cómputo de los votos hacen creíbles estos resultados. No mostraron incoherencias entre sí sino, más bien, tendencias claras desde el co-

* Escogemos el porcentaje sobre votos depositados pues es el que habitualmente se emplea como expresión de participación en todas las democracias.

mienzo, con variaciones que nunca oscilaron en más de 6 puntos de porcentaje.*

Aunque no pase de ser una anécdota, es significativo el modo de como informó "La Voz de los Estados Unidos" de estos resultados en su emisión matutina para América Latina del 6 de noviembre. Comenzó la noticia reafirmando que las elecciones en Nicaragua habían sido "una farsa". Sin solución de continuidad, el locutor dijo que el 63 % obtenido por los sandinistas estaba muy por debajo del triunfo con un 80 % predicho por ellos. Es decir, quisieron "ganar" con las dos noticias y al hacerlo cayeron en una clara contradicción. Porque, si las elecciones son una farsa, ningún resultado es creíble. Y si se acepta que el 63 % es un resultado decepcionante para las predicciones sandinistas, entonces cae por su base que las elecciones hayan sido una farsa. En parecidas contradicciones se ha enfrascado el diario "La Prensa", el que, sin embargo, no ha mencionado una sola vez en sus páginas la palabra "fraude"

Se puede especular sobre *cuántos votos habría obtenido la Coordinadora con Arturo Cruz como candidato, si se hubiera presentado*. Durante toda la campaña electoral se lanzó al mundo la imagen de que alrededor de esta candidatura se apiñaba "la principal oposición" del país. Pero para el que conozca la vida política nicaragüense esta afirmación es muy discutible. Con más de cuarenta años de dictadura previos a la revolución, con el continuo juego hecho por el somocismo para dividir y fragmentar a los partidos que se le oponían, con organismos gremiales que aglutinaban a la burguesía opositora y que no llegaron a tener una expresión política hasta que en 1978 Robelo fundó el MDN (hoy unido a la contrarrevolución armada), con una de las "fuerzas" políticas de la Coordinadora surgida apenas en 1979, después del triunfo revolucionario (PSD), con otra de esas "fuerzas" claramente minoritaria en su base social (PLC), la historia política nicaragüense no ofrece ningún fundamento sólido para sostener esta imagen de "fuerza" de la Coordinadora. No hay razón creíble para sostener la opinión de que Arturo Cruz y la Coor-

* El Consejo Supremo Electoral entregó desde el lunes 5 (3:00 a.m.) hasta el miércoles 7 (10:00 p.m.) 5 informes de cómputos sobre el 16 %, el 39 %, el 69 %, el 80 % y el 90.5 % de las Juntas Receptoras de Votos, proyectándose estos últimos resultados al 100 %, como un informe final provisional. Este proceder del GSE contrasta con la "costumbre" en otras elecciones de países centroamericanos entre 1972-1982, en las que se comenzaba con premura a dar datos por televisión y a las pocas horas se cortaba bruscamente el flujo de datos. Cuando varios días más tarde se daba el informe final, los resultados tenían muy poco que ver con las tendencias reveladas en las primeras informaciones.

dinadora habrían llegado a reunir tantos votos como para superar notablemente los que consiguió el 4 de noviembre la oposición que sí se inscribió para las elecciones.

Arturo Cruz y la Coordinadora son “la principal oposición” en Nicaragua sólo en el sentido de que su propuesta política no acepta la revolución nicaragüense como un hecho estructuralmente profundo e irreversible. Pero la imagen de una gran fuerza, con un respaldo numérico masivo en el pueblo nicaragüense — sea de militantes o de descontentos con la revolución — es un producto caprichoso de la propaganda norteamericana, que tampoco acepta la revolución nicaragüense como un hecho irreversible y, por eso, la desfigura.

No hay resultados electorales para medir el apoyo a la Coordinadora. Pero hay algunos indicadores que no pueden ser olvidados. En términos de convocatoria, la llegada de Arturo Cruz a fines de julio — después de una amplia propaganda de “La Prensa” — reunió tan sólo a 400 personas en el aeropuerto. Sus actos preelectorales en Matagalpa, Chinandega, León, Boaco y Masaya no juntaron ni a mil personas cada uno. A falta, pues, de mediciones objetivas, sólo queda la especulación, basada en hipótesis sanas o en hipótesis tendenciosas.

La realidad política de Nicaragua indica que una gran coalición opositora, que hubiera agrupado a los 3 partidos de la Coordinadora con los tres partidos de centro-derecha inscritos (PCD, PLI y PPSC) habría sido muy improbable. El PPSC no habría cabido en esa coalición, en virtud de su decidida opción por el cambio estructural que lo llevó a separarse de los demócratacristianos (PSC, hoy en la Coordinadora) varios años antes del derrocamiento de la dictadura (1975). La evidencia de la relación excesivamente amistosa de los gremios de la empresa privada (COSEP) y del PSD con el gobierno norteamericano habría sido un obstáculo para que el PCD y el PLI — con dirigentes con posiciones nacionalistas consecuentes — entraran en esta hipotética coalición opositora.

Por todo esto, los votos obtenidos por el PCD (13 %) y PLI (9 %) pueden ser lógicamente interpretados como votos que *expresan, por una parte, el arraigo de las tradiciones conservadoras y liberales como expresiones políticas de la historia de Nicaragua, a la vez que como votos que expresan la oposición o descontento al FSLN* dentro del marco de la nueva realidad política de Nicaragua, que es mayoritariamente aceptada. Más difícil de analizar es el sentido de los votos obtenidos por el PPSC (5 %). ¿Se habrían mantenido de haber competido también con la Coordinadora? Lo que más distinguió la opción del PPSC fue el haber levantado lo cristiano como ban-

dera política y en este campo, la Coordinadora también intentó crear la misma imagen política de devoción cristiana y de fidelidad eclesiástica.

Dentro del 25 % que no pudo o no quiso ir a las urnas habría que buscar también los votos que pudo haber tenido la Coordinadora. Pero hay que tener en cuenta previamente que dentro de este 25 % está ese porcentaje de personas que en cualquier país nunca ejerce una posición política activa, ni siquiera la mínima de ir a depositar su voto, bien sea que esté de acuerdo o en desacuerdo con algún partido o no coincida con ninguno y que, habitualmente, este porcentaje suele llegar, por lo menos, a un 10 % de los inscritos. Dentro de este 25 % se encuentran también los que después de haberse inscrito en julio fueron movilizados por las necesidades militares de la defensa —incrementadas desde entonces— y no pudieron ejercer su derecho.* Dentro de este 25 % están también los que no pudieron encontrar medios de transporte con los que cubrir grandes distancias, especialmente en el medio rural. (En la Región I no hubo transporte público el día 4 de noviembre). Hay que recordar que para el proceso de inscripción, que abarcó a un 93 % de la población estimada (no existen censos poblacionales), quedando sin inscribirse sólo un 7 % hubo 4 días y que las votaciones se desarrollaron durante un sólo día. Además, *la inscripción era un deber, era obligatoria y el voto era libre, era un derecho.*

Por último, una pequeña parte de ese 25 % que no fue a las urnas estuvo ausente del país en los días de la inscripción o en los de la elección o cayó dentro de la tasa de mortalidad normal del país, aumentada ahora por la guerra.

Sería necesario también hacer un análisis acucioso del voto nulo (4.6 % del total de inscritos) para discernir el voto que muestra señas de anulación voluntaria (frases de burla, consignas contrarrevolucionarias, borrones, palabras obscenas, etc.) y el que se anula por errores involuntarios, propios de lugares en donde existe analfabetismo total o funcional. Es curioso, por otra parte, que *no parece existir una correlación entre las cifras de abstención y las de votos nulos*, correlación que podría existir si ambos porcentajes estuvieran expresando mayoritariamente actitudes políticas. En las regiones en donde se dan los mayores porcentajes de “abstención” se ve más claramente esta falta de correlación. Como muestra el Cuadro II las mayores

* Sólo se podía votar en la Junta donde uno se había inscrito. Para hacerlo en otra, los miembros del ejército necesitaban una carta de autorización de su jefe militar.

CUADRO II
ABSTENCIONES Y NULOS POR REGIONES*

VOTOS %	REGIONES Y ZONAS**						PROMEDIO NACIONAL
	1	2	3	4	5	6	
Sobre total Inscritos	1	2	3	4	5	6	I II III
ABSTENCIONES	20.3	20.4	18.1	22.7	37.5	41.6	17.4 32.3 25.2 24.6
NULOS	6.7	3.4	4.2	4.5	4.7	4.8	6 8 3.4 4.6

FUENTE: Consejo Supremo Electoral y Elaboración IHCA

* Según el Informe Final detallado por regiones.

** I = Estelí, Nueva Segovia, Madriz; 2 = León, Chinandega; 3 = Managua; 4 = Masaya, Carazo, Granada, Rivas; 5 = Boaco, Chontales; 6 = Matagalpa, Jinotega; I = Zelaya Norte; II = Zelaya Sur; III = Río San Juan.

cifras de falta de participación se dieron en zonas de guerra o tradicionalmente más apáticas políticamente.

Naturalmente, las consideraciones anteriores podrían aplicarse también a los votos válidos, entre los que hay que suponer un porcentaje de votos no militantes, de votos que expresan convicciones políticas poco profundas y, en algunos casos, que expresan oportunismo. Es por eso precisamente que, dadas las condiciones para una elección honesta, la única oportunidad coherente que tienen los partidos políticos es arriesgarse al juego electoral, tratando de convocar al pueblo a que participe y se exprese por este medio. Es a esto a lo que se arriesgó el FSLN al convocar a las elecciones y al participar en ellas en la forma en que lo hizo. Se arriesgó así a que apareciera en números la franja de desacuerdo que existe entre él y la población. Una franja que existe, que se ha expresado y que no es despreciable. Esta es la franja que se hubiera visto notablemente reducida si el FSLN hubiera jugado al electorerismo plebiscitario convocando a elecciones en 1979 o 1980.

LOS VOTOS PARA LA ASAMBLEA NACIONAL

Los resultados, por lo que toca a las circunscripciones regionales que eligen la Asamblea Nacional, ofrecen el siguiente perfil de representantes electos, después de aplicar a los votos válidos de cada partido el respectivo cociente electoral:

No hay que olvidar tampoco que en la lista de diputados electos por el FSLN no sólo hay miembros del partido sino también personalidades nacionales o locales que no son militantes y fueron elegidas por su liderazgo social, por sus convicciones patrióticas y revolucionarias. El FSLN anunció que postulaba una candidatura de este tipo para corroborar así su política de unidad nacional. De manera que la Asamblea Nacional Constituyente es pluralista no sólo en sentido multipartidario sino que también estará enriquecida por personalidades no partidistas que iban en las listas del FSLN.

EL MAS PROFUNDO SIGNIFICADO DE ESTAS ELECCIONES

¿Cuál ha sido, en conjunto, el significado más profundo de estas elecciones? Ha sido sin duda, la emergencia de la dignidad nacional de una gran parte del pueblo nicaragüense. A pesar de los defectos que condensó la ausencia de una tradición de participación política,

a pesar de las deficiencias en la cultura democrática de un país del Tercer Mundo sometido hasta hace cinco años a una dictadura servil a la política norteamericana, la inmensa mayoría del pueblo nicaragüense fue a votar y votó con seriedad, con dignidad, incluso con solemnidad.

Lo hizo así, a pesar de la agresión, del malestar que produce el servicio militar al que este pueblo no ha estado acostumbrado y que cuenta ya entre sus reclutados a muchas víctimas, a pesar de la escasez, de la especulación y el mercado negro, a pesar de las llamadas a la abstención. Lo hizo a pesar de la propaganda de que no se respetaría el voto secreto. Lo hizo sin las presiones de ese aparato militar que en Centroamérica — a excepción de Costa Rica — ha acompañado siempre los acontecimientos electorales.

Las elecciones sorprendieron a muchos observadores y periodistas por su honestidad, por su orden y organización y por la adecuación de los métodos de cómputos a las condiciones nacionales de tecnología atrasada.

La sorpresa ha sido constante en Nicaragua desde 1979. Nadie esperaba que entre las revoluciones centroamericanas fuera la nicaragüense la que primero triunfara. Nadie esperaba una revolución triunfante sin ejecuciones masivas en el momento del triunfo y el “ajuste de cuentas”. Nadie esperaba un modelo revolucionario de economía mixta, pluralismo político y no-alíneamiento combinado con verdaderos cambios estructurales y avances económicos. Nadie esperaba — una vez esparcida por el mundo la imagen de un país totalitario — una convocatoria a elecciones y una campaña política llena de durísimas críticas al FSLN. Nadie esperaba un cierre de campaña como el del FSLN el 10. de noviembre. Pocos esperaban la seriedad y honestidad de la votación y de sus cómputos.

Una vez más los ojos del mundo se volcaron sobre Nicaragua en estas elecciones. Son pocos los que no han sabido mirar limpiamente lo que aquí ocurrió. Las visitas casa por casa, método de trabajo empleado por el FSLN durante su campaña, fueron, por ejemplo, distorsionadas por un periódico progresista europeo, que habló de “turbas en las calles aporreando las puertas de las casas en los días previos a las elecciones para meter el miedo en el cuerpo a quienes no deseaban votar”. A pesar de todo, la mayoría en el mundo, rendida ante la evidencia, no ha levantado objeciones contra estas elecciones, que podrían haber sido sin duda más perfectas pero que fueron sorprendentemente buenas y limpias.

La dignidad que emerge en el pueblo nicaragüense — y que se hizo patente en el acto electoral — es hoy un factor cultural poderoso, un

sustancial constitutivo de la identidad popular y nacional del pueblo. Es una identidad forjada durante siglos de resistencia sorda frente a la colonización, durante los años de lucha de Sandino contra la ocupación norteamericana y el colaboracionismo criollo que con ella pactó. Es una identidad consolidada durante décadas de creciente rechazo al enriquecimiento de un capitalismo que aunque menos arcaico que el de los oligarcas clientelistas de antaño, no era menos empobrecedor de las mayorías. Se trata de una dignidad que hoy lleva a los nicaragüenses a resistir con todas sus fuerzas la imposición norteamericana de una contrarrevolución cruel y reaccionaria. Esta digna identidad es la que produce sorpresa, la que a algunos les resulta increíble. Les parece imposible hallarla en un pueblo pobre y subdesarrollado.

El programa político que el pueblo nicaragüense ratificó en las urnas es rechazado por los Estados Unidos no porque sea "totalitario y marxista-leninista", sino porque es un programa revolucionario original que desafía la hegemonía político-ideológica de los Estados Unidos en Centroamérica. *Se trata de un modelo atractivo y también exitoso.* En 1980 Nicaragua tuvo un crecimiento económico global del 10 %, en 1981 del 7 %, en 1982 fue nulo por las inundaciones y sequías, pero en 1983 volvió a crecer en un 5 %, Todos son datos de la CEPAL. Solamente el desvío de recursos hacia la defensa, forzado por la agresión financiada por los Estados Unidos, hará disminuir este crecimiento en 1984. A la atracción y el éxito de este modelo hay que añadir ahora que se trata de un modelo que cuenta con el apoyo mayoritario de una población que es en su mayoría pobre y cristiana.

Las elecciones han demostrado que el cuadro político de Nicaragua no es un cuadro totalitario. Muchos en el mundo lo han visto así y lo han reconocido, incluido el diario "Le Monde" en un editorial postelectoral. Las elecciones no son, además, el único medio de participación política del pueblo. El modelo nicaragüense ratificado por los electores incluye el fomento de otras varias formas de participación política del pueblo: la progresiva autogestión de unidades productivas, la proliferación de organizaciones sectoriales del pueblo, la creciente cooperativización de la producción agropecuaria, un mayor debate ideológico, aun en circunstancias de guerra, etc. El hecho, por ejemplo, de que la población conozca que los hijos de los dirigentes del FSLN, de los ministros del Estado, etc. en edad militar, participan en el servicio militar y en el combate a la contrarrevolución, apunta hacia otra forma de democratización, que deshace tra-

dicionales privilegios habituales en Nicaragua y en Centroamérica. Un hecho como el de que no haya habido choques entre la policía y la población en cinco años de proceso, indica la humanización, la democratización, que se ha logrado en el poder del Estado.

Todas estas realidades —en las que no deja de haber aun muchas deficiencias— son la mejor respuesta a toda la propaganda. Las elecciones reales, las elecciones concretas que se celebraron el 4 de noviembre, han supuesto un momento de realidad contra el que se ha estrellado el intento norteamericano de calificarlas como una farsa. La realidad, y en ella la práctica de los grupos sociales, es siempre el mejor factor contra la ideologización, es siempre mucho más eficaz que cualquier contrapropaganda.

Todo esto puede explicar la rapidez con que el gobierno de Reagan cambió el foco de su propaganda el mismo 6 de noviembre, en el mismo momento de su reelección: pasó de la descalificación de las elecciones al escándalo de los MIG. Y basado en ese escándalo, su primer acto de gobierno en política exterior no ha sido otro que el de intentar pisotear por la fuerza y el amedrentamiento la dignidad popular que no pudo inhibir en las elecciones.

Revista de Revistas

CUADERNOS POLITICOS

Trimestral. Publicada por Editorial ERA, No. 41, julio-diciembre de 1984. Apartado Postal 74-092, México, D.F., 09080 México. Rubén Jiménez Ricárdez: Marx y su teoría de la revolución para el mundo subdesarrollado. Bolívar Echaverría: La "formación natural" de la reproducción social. Carlos Pereyra: Dos aproximaciones al problema de la dialéctica. Ana Cristina Laurell: Ciencia y experiencia obrera: la lucha por la salud en Italia. Hectór Manjarrez: La Revolución y el escritor según Cortázar. Ruy Mauro Marini: Comentario a Raúl Sendic. Suscripción por cuatro números para Centro y Sudamérica 16 dols. (correo aéreo 20 dls.).

REVISTA MEXICANA DE SOCIOLOGIA

Organo oficial del Instituto de Investigaciones Sociales de la UNAM. Torre de Humanidades, 7o. piso, Ciudad Universitaria, México, D.F. 04510, México. Suscripción en Centro y Sudamérica 16 dols. (24 dols. por correo aéreo). Año XLVI, Vol. XLVI, No. 2, abril-junio de 1984. Principales artículos divididos en tres rubros: I) Fuerzas Políticas, con artículos de Matilde Luna, Carlos Martínez Assad, Bertha Lerner, Javier Aguilar García, etc; II) Problemas nacionales con artículos de Da-

vid Torres, Carlos Pereyra María de Ibarriola, María Elena Escudero, etc.;

III) La crisis actual con artículos de Gonzalo Rodríguez, Francisco Dávila Aldas, Carlos Sirvent, David Barkin y Miguel Basáñez.

ENSAYOS

De la División de Estudios de Posgrado de la Facultad de Economía de la UNAM, México, Ciudad Universitaria, México, D.F. 04510, México. Vol. 1, No. 2, segundo trimestre de 1984. Carlos Schaffer: De la noción de clase obrera. Octavio Rodríguez Araujo: Los marxistas frente al Estado mexicano. Sofía Méndez: México: del petróleo a la estabilización. Michel Foucault: Lo que digo y lo que dicen que digo, etc.

ENVIO

Del Instituto Histórico Centroamericano, Managua, Nicaragua, Apartado a.194. Boletín mimeografiado, suscripción anual 15 dls. Año 4, No. 4, tiene los siguientes temas: De la victoria electoral al estado de alerta; La recta final de las elecciones; y Análisis de los resultados electorales.

CRITICAS DE ECONOMIA POLITICA

Publicación trimestral. Apartado Postal 70-176, México, D.F. 04510, México. Nos. 20-21 de julio-dic. de

193. Número dedicado a Los Populismos. Principales artículos: Tim Wohlforth: El movimiento populista de los Estados Unidos de América. Alberto J. Pla: El problema del Estado, la democracia social y el populismo. Carlos M. Vilas: El populismo como estrategia de la acumulación. Nicos Mouselis: Una crítica al libro de E. Laclau "Política e Ideología en la Teoría Marxista". Helena Hirata: El populismo como impulso del Estado capitalista "semi-industrial": el caso de Brasil. Manuel Aguilar Mora: Populismo y revolución permanente. Francisco R. Dávila: Ecuador, economía, política y sociedad. Gilberto Mathías: Régimen político y legitimación "restringida" en América Latina, el paso de los gobiernos populistas a los regímenes autoritarios. Mauricio Antesana Villegas: Bolivia: una nueva ecuación de poder.

NEW LEFT REVIEW

15 Greek Street, London W1E 6QZ, Inglaterra. Suscripción para América Latina 14 libras o 22 dls. No. 142, noviembre-diciembre de 1983. Principales artículos: Roy Medvedev: What the USSR Can Offer China. Petras, Morley y Havens: Capitalist Democracy in Peru. Chris Arthur: The Master-slave Relationship. Abercrombie, Hill y Turner: Ideology and Subordination. Terry Eagleton, Peter Fuller: Value in Art: an Exchange.

COYOACAN

Apartment Postal 65-236. México 8, D.F., México, No. 17, enero-junio de 1985. E. Mandel: La teoría marxista de la crisis y la actual depresión económica. Elmar Altvater: Una recuperación malsana. Frobel, Heinrich y

Kreye: La crisis: recuperación, salida o recaída. F. Colmenares: México: Pétroleo, coyuntura económica y salarios, 1984. Jeffery Bortz: Salarios y ciclos largos en la economía mexicana. Blanca Pastor: Teléfonos: nuevas tecnologías y conflictos sindicales. Salvador Arias: Agroexportación, capitalismo y burguesía en El Salvador. A. Gilly: La anomalía argentina.

TIERS MONDE

Institut de Developpement Economique et Social, 12, rue Jean de Beauvais, 75005 París, Francia. Suscripción anual: 318. F. No. 99, julio-septiembre de 1984. Número dedicado a la deuda del Tercer Mundo, con artículos de Pierre Salama. Endettement et accentuation de la misere; P. Arnaud. Le dollar et la dette du tiers monde; entre otros.

PUNTO DE VISTA

Casilla de Correo 39, Suc. 49 (B), Buenos Aires, Argentina. Año VII, No. 23, abril de 1985. F. H. Cardoso: La democracia en América Latina. T. Halperin Donghi: El revisionismo histórico argentino como visión decadentista de la historia nacional. J. C. Korol: Duraciones y paradigmas en la escuela de los Annales, entre otros artículos.

CAPITAL AN CLASS

Conference of Socialist Economists. 25 Horsell Road. London N5. Inglaterra, No. 22, Spring 1984. Nira Yuval-Davis; The Current Crisis in Israel. R. Munck. Argentina. R. Jenkins: Divisions over the international division of labour. W. Andreff: The international centralization of capital and the reordering of world capita-

lism. A. Lipietz: Imperialism or the beast of the apocalypse H. Radice. The national economy: ¿a Keynesian myth?. R. Albritton: The dialectic of capital: a Japanese contribution.

BOLETIN DE ESTUDIOS LATINOAMERICANO Y DEL CARIBE

CEDLA, Keizersgracht 397, 1016 EK Amsterdam, Holanda. Suscripción, 8 dólares por un año. No. 34, VI-1983. C. Fortin: Latin America in the 1980: issues, trends and prospects. A. Serbin: Estado, indigenismo e indianidad en Venezuela, 1946-1979. F. Schryer: From rancheros to pequeños propietarios. D. La France: Labour and the Mexican Revolution: President Fco.I. Madero and the Puebla textile workers. Ian E. Robertson: The Dutch linguistic legacy in the Guayana. Venezuela border quetsion. H. Hack: Landa problems in the Paraguay Chaco.

DEBATES

CEDES, Pueyrredon 510, 5o. piso. Buenos Aires, Argentina. Año II, No. 3, abril-mayo de 1985. M. Aguinis: Ideología de la cultura democrática.

Llovet: La industria editorial argentina. J. King: El Di Tella y la Cultura del 60: Una conversación con Marta Traba. B. Lamounier: La lucha por la democracia en Brasil. J. Borja: Izquierda: perplejidad y experimentación. Hay otras colaboraciones de O. Landi, Tomás E. Martínez, A. D'Amico, M. del C. Feijóo, E. Jelin, E. Archetti, P. Vila, V. Palermo, R. Cicerchia, M. Negroni, A. Sheridan y P. Nora.

DESARROLLO ECONOMICO. REV. DE CIENCIAS SOCIALES

IDES, GUEMES 3950, Buenos Aires, Argentina. No. 97, Vol. 24, abril-junio de 1985. Suscripción anual No. 4. Daniel Chuvnosky: La difusión de la tecnología de punta en la Argentina. César A. Aguiar, Uruguay: Escenas políticas y subsistemas electorales. Marcelo de Paiva Abreu: La Argentina y Brasil en los años 30. Hilola Sabato: La formación del mercado de trabajo en Buenos Aires, 1850-1880. Notas y Comentarios. Reseñas bibliográficas.

PRAXIS

Debates. Estudios. Documentos, No. 3 y 4.

**La presente edición
se terminó de imprimir
en Noviembre de 1985 en los Talleres de
RIPARI S.A.
J. G. Lemos 246/48 - Tel.: 552-3900
Buenos Aires - Argentina**

Cuadernos del Sur

- | | |
|----------------|---|
| EDUARDO LUCITA | • Elecciones sindicales y autorganización obrera en Argentina |
| HUGO DEL CAMPO | • Continuidad y cambio en el movimiento sindical argentino |
| CARLOS ABALO | • II Parte de notas sobre... |
| ERIK O. WRIGTH | • Los intelectuales y la clase obrera |
| C. M. CASSASUS | • Estructura de clases y acción obrera |
| ANDA/SEGRE | • Política de informática en los países dependientes |
| DOCUMENTOS | • Nicaragua, análisis de los resultados electorales |
| REVISTA | • De REVISTAS |